

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

### DECRETOS

#### DECRETO NÚMERO 515 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se confía al Vicepresidente de la República unas funciones y encargos especiales.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 202 de la Constitución Política, y

#### CONSIDERANDO:

Que el artículo 202 de la Constitución Política establece que el Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales;

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones,

#### DECRETA:

Artículo 1°. *Misiones o encargos del Vicepresidente de la República.* Confiar al Vicepresidente de la República la misión de coordinar interinstitucional e intersectorialmente el desarrollo de la implementación de los acuerdos de paz, la lucha contra el crimen organizado y seguridad ciudadana, y la política integral para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos.

Igualmente, asesorará y coordinará la formulación, estructuración y desarrollo de la política pública para la atención integral de la lucha contra las drogas ilícitas.

Asimismo, ejercer la Presidencia de la Comisión Intersectorial del Océano directamente o a través de su delegado.

Artículo 2°. *Derogatorias y vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 210 del 9 de febrero de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,  
*Liliana Caballero Durán.*

#### DECRETO NÚMERO 542 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se delegan unas funciones constitucionales.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 196 de la Constitución Política, y

#### CONSIDERANDO:

Que los días 2 y 3 de abril de 2017 el Presidente de la República se trasladará a la ciudad de La Habana, Cuba, con el fin de realizar una visita oficial a ese país;

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la ley, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural está habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como Ministro Delegatario,

#### DECRETA:

Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Irigorri Valencia, las funciones legales y las correspondientes a las siguientes atribuciones constitucionales:

1. Artículo 129.
2. Artículo 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2.
3. Artículos 163, 165 y 166.
4. Artículos 200 y 201.
5. Artículos 213, 214 y 215.
6. Artículos 303, 304, 314 y 323.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

## MINISTERIO DEL INTERIOR

### DECRETOS

#### DECRETO NÚMERO 539 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se designa alcaldesa ad hoc para el municipio de Chía, Cundinamarca.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las conferidas por los artículos 115 y 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

#### CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio número 20170100002761 del 6 de febrero de 2017, el alcalde del municipio de Chía, Cundinamarca, doctor Leonardo Donoso Ruiz, se declaró impedido para “la modificación y expedición de dos decretos respecto a las tarifas de servicio público de transporte terrestre de pasajeros en la modalidad de colectivo, así como las tarifas de servicio público individual de pasajeros en vehículos clase taxi”, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002;

Que mediante auto de fecha 23 de febrero de 2017, con número de radicación IUS-2017-46228, la doctora Aura Esperanza Torres Pardo, Procuradora Regional de Cundinamarca, aceptó el impedimento radicado por el doctor Leonardo Donoso Ruiz, en su calidad de alcalde del municipio de Chía, Cundinamarca, toda vez que “(...) la situación que planteada por el funcionario que se declara impedido, objetivamente podría significar el agotamiento del texto legal consagrado en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002; lo que significa que hay lugar a acceder a la petición del alcalde del municipio de Chía, señor Leonardo Donoso Ruiz, precisamente y como quedó analizado, ante la configuración de las (sic) causal que le impide expedir los dos decretos respecto a las tarifas de servicio público transporte terrestre de pasajeros en la modalidad de colectivo, así como la tarifa de servicio público individual de pasajero en vehículos clase taxi”;

Que la Procuradora Regional de Cundinamarca, solicitó que se designará a un funcionario ad hoc, con ocasión de la orden impartida por esa Procuraduría, a través del auto del 23 de febrero de 2017, con número de radicación IUS-2017-46228;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°;

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto del 23 de febrero de 2017, proferido por la Procuradora Regional de Cundinamarca, se hace necesario designar un alcalde ad hoc, que asuma la modificación y expedición de los decretos que determinan las tarifas de servicio público de transporte terrestre de pasajeros en la modalidad de colectivo y las tarifas de servicio público individual de pasajeros en vehículos clase taxi en el municipio de Chía, Cundinamarca;

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que

## LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos estatales no requieren publicación ante la desaparición del Diario Único de Contratación Pública.

**DIARIO OFICIAL**

Fundado el 30 de abril de 1864  
Por el Presidente **Manuel Murillo Toro**  
Tarifa postal reducida No. 56

DIRECTOR: **JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE**

MINISTERIO DEL INTERIOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

**JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE**  
Gerente General

Carrera 66 N° 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia  
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: [correspondencia@imprenta.gov.co](mailto:correspondencia@imprenta.gov.co)

no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a través del Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00(2203);

Que de acuerdo con el Concepto número 2273 del 19 de octubre de 2015, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la designación de los alcaldes municipales y distritales ad hoc es de competencia del Presidente de la República;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación.* Designase como alcaldesa ad hoc del municipio de Chía, Cundinamarca, a la doctora Jeannette Patricia Muñoz Nieto, identificada con la cédula de ciudadanía número 51982069 de Bogotá, D. C., quien se desempeña en el cargo de Profesional Universitario, Grado 13, Código 2028, dentro de la planta global del Ministerio del Interior, para que asuma la modificación y expedición de los decretos que determinan las tarifas de servicio público de transporte terrestre de pasajeros en la modalidad de colectivo y las tarifas de servicio público individual de pasajeros en vehículos clase taxi en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Artículo 2°. *Poseción.* La alcaldesa ad hoc designada en este acto, deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. *Comunicación.* Comuníquese el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc, al alcalde del municipio de Chía y a la Procuraduría Regional del departamento de Cundinamarca.

Artículo 4°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

*Juan Fernando Cristo Bustos.*

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

DECRETOS

**DECRETO NÚMERO 543 DE 2017**

(marzo 30)

*por el cual se hace un traslado en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, el parágrafo segundo del artículo 39 y el parágrafo del artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:

Artículo 1°. *Trasládese* dentro de la planta externa al doctor Francisco Alberto González, identificado con cédula de ciudadanía número 79279888, al cargo de Ministro Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Delegación Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.

Parágrafo. El doctor Francisco Alberto González es funcionario inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Artículo 2°. De acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, el doctor Francisco Alberto González, no tendrá derecho a la asignación que por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos se reconoce a los funcionarios que son designados en la planta externa, toda vez que en la actualidad presta sus servicios en la Delegación Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

*María Ángela Holguín Cuéllar.*

**DECRETO NÚMERO 544 DE 2017**

(marzo 30)

*por el cual se concede una Comisión para Situaciones Especiales a la planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política parágrafo del artículo 6° y el artículo 51 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:

Artículo 1°. *Comisiónase* en la planta externa al doctor Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía número 7548487, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Filipinas.

Parágrafo. El doctor Víctor Hugo Echeverri Jaramillo es funcionario inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Artículo 2°. Conceder comisión al doctor Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, para desempeñar el cargo de Libre Nombramiento y Remoción, del artículo 1° de este decreto.

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

*María Ángela Holguín Cuéllar.*

**MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO**

DECRETOS

**DECRETO NÚMERO 536 DE 2017**

(marzo 30)

*por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 1.2.4.3.1. del Libro 1, Título 4, Parte 2, Capítulo 3 del Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, para establecer la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta por actividades de estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.*

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 392 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 392 del Estatuto Tributario están sujetos a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos, para lo cual el Gobierno determinará mediante decreto los porcentajes de retención;

Que según el análisis realizado por la Dirección de Gestión Organizacional de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): “La actividad económica que corresponde a estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública presenta en los últimos años saldos a favor superiores a veinte mil millones de pesos (\$20.000.000.000), en promedio la tarifa efectiva medida como la retención en la fuente practicada frente a los ingresos netos fue para los años 2013 y 2014 alrededor del 9% y de 7% para el año 2015. Con el fin de reducir estos saldos a favor se realizaron análisis para establecer cuál sería la tarifa adecuada que permitiera equiparar la retención realizada frente al impuesto a cargo de los contribuyentes. La tarifa que permite lograr este equilibrio es de 4% tal como se muestra en el siguiente cuadro (...).”;

Que se requiere adicionar el artículo 1.2.4.3.1. “Retención en la fuente por honorarios y comisiones para declarantes” del Libro 1, Título 4, Parte 2, Capítulo 3 del Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, con un parágrafo para establecer la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta aplicable a aquellos contribuyentes personas jurídicas, sociedades de hecho y demás entidades, que perciban ingresos por actividades de estudios de mercado y la realización de encuestas de opinión pública;

Que en cumplimiento del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 el proyecto de decreto fue publicado en la página web de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

DECRETA:

Artículo 1°. *Adicionar el parágrafo 2° al artículo 1.2.4.3.1. del Libro 1 Parte 2 Título 4 Capítulo 3 del Decreto 1625 de 2016.* Adiciónese el parágrafo 2° al artículo 1.2.4.3.1. del Libro 1, Título 4, Parte 2, Capítulo 3 del Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“**Parágrafo 2°.** La tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta sobre los pagos o abonos en cuenta por actividades de estudios de mercado y la realización de encuestas de opinión pública que se efectúen a las personas jurídicas, las sociedades de hecho y las demás entidades será del cuatro por ciento (4%)”.



Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese y cúmplase.  
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.  
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  
*Mauricio Cárdenas Santamaría.*

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
MINISTERIO DE CULTURA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 537 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011, se modifica el Decreto 1080 de 2015 único reglamentario del sector cultura y el Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, se definen normas sobre el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, la emisión y control de boletería electrónica para los espectáculos públicos de las artes escénicas, la inversión y el seguimiento de la contribución parafiscal cultural y se dictan otras disposiciones.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, en desarrollo de la Ley 1493 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el objetivo de la Ley 1493 de 2011 es reconocer, formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas en Colombia;

Que el artículo 3° de la misma norma define los espectáculos públicos de las artes escénicas como “(...) las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan a la gente por fuera del ámbito doméstico”;

Que el parágrafo f) del artículo 3° de la Ley 1493 de 2011 señala que los escenarios habilitados son aquellos lugares en los cuales se puede realizar de forma habitual espectáculos públicos y que cumplen con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para obtener la habilitación de escenario permanente por parte de las autoridades locales correspondientes;

Que el artículo 7° de la citada ley creó la contribución parafiscal para el sector cultural que grava con una tarifa del 10% la venta de boletería y la entrega de derechos de asistencia a los espectáculos públicos de las artes escénicas cuyo valor sea igual o superior a tres (3) UVT;

Que el artículo 12 de la Ley 1493 de 2011 dispone que el Ministerio de Cultura será la entidad encargada de realizar el recaudo de la contribución parafiscal y de entregarla al municipio o distrito que la generó;

Que el artículo 13 de la misma ley dispone que los recursos de la contribución parafiscal cultural y sus rendimientos serán de destinación específica y estarán orientados a inversión en construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas;

Que el artículo 2.9.2.2.3. del Decreto 1080 de 2015 otorgó competencias al Ministerio de Cultura para autorizar la venta y distribución de boletería para espectáculos públicos de las artes escénicas por parte de operadores de boletería en línea;

Que el Decreto 1625 de 2016 reglamenta las condiciones de expedición de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal;

Que el artículo 2.9.2.4.3. del Decreto 1080 de 2015 establece los lineamientos para la ejecución de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en las entidades territoriales;

Que el artículo 2.9.2.5.1. del Decreto 1080 de 2015 señala que el Ministerio de Cultura hará el seguimiento a la inversión de los recursos provenientes de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas girados a las entidades territoriales;

Que el artículo 2.9.2.5.2. del precitado decreto establece el periodo para el seguimiento a la ejecución de los recursos a los municipios y distritos por parte del Ministerio de Cultura;

Que el artículo 2.9.1.2.1. y siguientes del Decreto 1080 de 2015, contempla el procedimiento y los requisitos para llevar a cabo el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, su actualización y la inscripción de afectaciones;

Que teniendo en cuenta que la Ley 1493 de 2011 tiene como principio fundamental la formalización del sector de espectáculos públicos de las artes escénicas, se hace necesario reglamentar los requisitos mínimos de solvencia económica y liquidez de los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, como también los requisitos documentales para su registro ante el Ministerio de Cultura, con el fin de evitar prácticas informales o al margen de la ley;

Que teniendo en cuenta las necesidades propias del sector, se hace necesario reglamentar la boletería electrónica de espectáculos públicos de las artes escénicas, su equivalencia legal a la factura de venta y la creación de diversas medidas de control a su emisión, venta y validación por parte de los operadores de boletería;

Que teniendo en cuenta la destinación específica de la contribución parafiscal cultural establecida en la Ley 1493 de 2011, se hace necesario regular y reglamentar la ejecución de estos recursos en los distintos tipos de escenarios cuya vocación y giro habitual es la presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas. Así mismo, y en virtud de la destinación específica prevista en la citada ley, es pertinente regular la infraestructura móvil

e itinerante como una modalidad propia de los escenarios en donde se presentan y circulan espectáculos públicos de las artes escénicas;

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Registro de Productores de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.9.1.2.2. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.1.2.2. Requisitos para el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas.** Para la inscripción de los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas en la página web del Ministerio de Cultura, se deberán adjuntar los siguientes documentos al momento de diligenciar el formulario digital previsto para el efecto:

1. Acto de creación legal en el caso de entidades públicas, certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas o cédula de ciudadanía para personas naturales.

2. Copia simple del Registro Único Tributario (RUT), Los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas deberán incluir en el Registro Único Tributario (RUT) como actividad económica principal o secundaria, el Código de Actividad Económica 9007 (“actividades de espectáculos musicales en vivo”) y/o 9008 (“otras actividades de espectáculos en vivo”), según corresponda a sus actividades.

3. Relación de los espectáculos públicos de las artes escénicas producidos en Colombia en los últimos dos (2) años, en el formato prescrito por el Ministerio de Cultura.

4. En el caso de personas jurídicas, estados financieros certificados por un contador y/o revisor fiscal, según sea el caso, correspondientes a la vigencia anterior a la solicitud de registro, que informen, entre otros, el patrimonio líquido del productor. En el caso de personas naturales, una copia simple de la declaración de renta correspondiente la vigencia anterior a la solicitud de registro y estados financieros certificados por un contador.

5. Una declaración juramentada suscrita por el productor o su representante legal, indicando que la realización de los espectáculos públicos de artes escénicas a su cargo no será usada para la realización de actividades al margen de la ley tales como el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

El Ministerio de Cultura podrá solicitar otros documentos que sustenten la capacidad financiera del productor.

**Parágrafo 1°.** La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá acceso al Registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, para los asuntos de su competencia. El Ministerio de Cultura habilitará la interconexión que corresponda entre el Portal Único de Ley de Espectáculos Públicos (PULEP) y los sistemas de información de la Superintendencia de Industria y Comercio.

**Parágrafo 2°.** Los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 de este artículo dejarán de exigirse al usuario una vez el Ministerio de Cultura tenga acceso a dicha información de acuerdo con los convenios interinstitucionales que se suscriban para el efecto con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En todo caso, la solicitud de inscripción en el registro de productores implicará la autorización de consultar dicha información por parte del Ministerio de Cultura, para el cumplimiento de las funciones legales y finalidades previstas en la Ley 1493 de 2011 y el presente decreto.

Esta disposición no aplica para el caso de las entidades públicas, que deberán aportar el acto de creación legal al momento de realizar su solicitud de inscripción.

**Parágrafo 3°.** Una vez realizada la inscripción por primera vez, para la actualización del registro no será necesaria la presentación por parte del solicitante de la relación de espectáculos de que trata el numeral 3 del presente artículo, ya que el productor deberá mantener dicha información actualizada según lo establecido en los artículos 2.9.1.2.5 y siguientes de este decreto, al momento de registrar las afectaciones correspondientes, por cuanto el Ministerio de Cultura verificará directamente en el formulario digital los eventos registrados por cada productor y determinará la clasificación correspondiente como permanente u ocasional.

**Parágrafo 4°.** Para efectos del requisito consagrado en el numeral 4 del presente artículo, las entidades públicas, fondos mixtos o sociedades de economía mixta deberán acreditar que cuentan con los proyectos de inversión, asignaciones o partidas presupuestales destinadas a la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas.

**Parágrafo 5°.** Los productores con domicilio en el extranjero que cumplan con los requisitos para ser clasificados como permanentes, deberán establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 del Código de Comercio.

Artículo 2°. Adiciónese el siguiente artículo al Decreto 1080 de 2015:

“**Artículo 2.9.1.2.11. Lineamientos para la clasificación de los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas.** Los productores tendrán la facultad de autocalificarse como ocasionales o permanentes, sin perjuicio de la facultad de reclasificación ejercida por el Ministerio de Cultura consagrada en el artículo 10 de la Ley 1493 de 2011.

Serán considerados como permanentes los productores que realicen diez (10) o más espectáculos públicos de las artes escénicas en un periodo de dos (2) años, o aquellos que en un periodo igual o inferior a dos (2) años produzcan festivales o temporadas de espectáculos públicos de las artes escénicas que involucren veinte (20) o más eventos, funciones o presentaciones. El Ministerio de Cultura verificará el cumplimiento de este requisito con base en la relación de espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata el numeral 3 del artículo 2.9.1.2.2 de este decreto y las subsiguientes afectaciones al registro sobre dicho requisito, que sean inscritas por los productores en cumplimiento de lo establecido en este decreto.

Para efectos del registro inicial o su renovación, los productores o aquellas personas involucradas, a título de socio o en un nivel directivo, en la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas que hayan generado deudas por concepto de la contribución

parafiscal de las artes escénicas de que trata el artículo 7° de la Ley 1493 de 2011, no podrán tener estas deudas exigibles, salvo que esté en curso proceso de fiscalización con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El Ministerio de Cultura tendrá la facultad de denegar la inscripción o la actualización bienal en el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas a las personas jurídicas o naturales descritas, o quienes en la práctica actúen por interés y en representación de estos y que no cumplan con lo anterior.

La clasificación de los productores permanentes y ocasionales para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas será la siguiente:

a) Productor de espectáculos públicos de gran formato: se denominarán productores de espectáculos públicos de gran formato los que cuenten con un patrimonio líquido superior a los mil quinientos cincuenta y dos (1.552) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

b) Productor de espectáculos públicos de mediano formato: se denominarán productores de espectáculos públicos de mediano formato los que cuenten con un patrimonio líquido entre doscientos un (201) y mil quinientos cincuenta y un (1.551) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

c) Productor de espectáculos públicos de pequeño formato: se denominarán productores de espectáculos públicos de pequeño formato los que cuenten con un patrimonio líquido inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

## CAPÍTULO II

### Emisión, control y validación de la boletería física y electrónica de espectáculos públicos de las artes escénicas

Artículo 3°. *Requisitos de los documentos equivalentes a la factura para ingreso a espectáculos públicos.* Adiciónese un numeral al literal b), numeral 2 del artículo 1.6.1.4.25. del Decreto 1625 de 2016, el cual quedará así:

6. En el caso de los espectáculos públicos de las artes escénicas definidos en el artículo 3° de la Ley 1493 de 2011, el código único del evento asignado al espectáculo y obtenido en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP), administrado por el Ministerio de Cultura, según lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 2.9.1.2.6 del Decreto Único del Sector Cultura 1080 de 2015, adicionado por el artículo 2° del Decreto 2380 de 2015.

Artículo 4°. Adiciónese un Capítulo VI a la Parte IX, del Título II “ASPECTOS TRIBUTARIOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS”, del Decreto 1080 de 2015, titulado “Facturación electrónica de derechos de asistencia digitales”, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.6.1. Facturación electrónica.** Los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas que ofrezcan al público boletería y derechos de asistencia en formato digital, podrán hacerlo en tanto implementen, salvo en lo dispuesto en este decreto, el sistema de facturación electrónica consagrado en el Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo adicionen, reglamenten, complementen o sustituyan.

Los operadores de boletería en línea que obren como mandatarios del productor en la venta de boletería y derechos de asistencia en formato digital, se acogerán a lo dispuesto en el artículo 1.6.1.4.1.11. del Decreto 1625 de 2016 y demás normas aplicables en la materia.

La representación gráfica de la factura electrónica (parágrafo 1°, artículo 1.6.1.4.1.3. del Decreto 1625 de 2016) deberá ser presentada por el asistente en soporte digital al momento de ingresar al evento, la cual será leída por medio de dispositivos validadores. En caso de no contar con este tipo de dispositivos para el control del acceso de manera electrónica, se deberá presentar un soporte impreso como medio de ingreso al evento.

Para efectos de lo anterior, se deberá solicitar ante la DIAN la habilitación para facturar electrónicamente conforme a lo establecido en este decreto, el Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo adicionen, reglamenten, complementen o sustituyan.

Al momento de facturar electrónicamente, los productores o sus operadores de boletería deberán incluir la siguiente información en el campo de descripción específica o genérica del servicio, con un etiquetado para cada uno de los siguientes campos, que atienda la especificación UBL (“Universal Business Language”) en lenguaje XML de los servicios de intercambio de información con la DIAN: 1) “Código único del evento” [asignado por el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP) que administra el Ministerio de Cultura], 2) “Nombre del evento”, 3) “Localidad” y 4) “Cortesía” (si aplica). Estos campos deben poder diferenciarse técnicamente en el documento XML generado.

**Parágrafo 1°.** Solo en el caso de las facturas electrónicas, el valor de la operación consignado en la misma deberá corresponder al valor total de la operación, incluyendo, si los hubiere, el valor del servicio del operador de boletería y los impuestos a cargo.

**Parágrafo 2°.** De conformidad con lo previsto en el artículo 2.9.2.1.2 del presente decreto sobre el hecho generador de la contribución parafiscal cultural, las cortesías entregadas en formato digital deberán ser reportadas en la factura electrónica, para lo cual se deberán marcar como “cortesías” en el campo que habilite la DIAN para el efecto, e incluir el valor comercial de la cortesía, el cual debe corresponder al de la localidad a la que da acceso, la fecha de emisión de la boleta y su etapa de entrega efectiva.

**Artículo 2.9.2.6.2. Autorización de numeración de facturación.** Una vez habilitado por la DIAN para facturar electrónicamente, el productor que venda boletería electrónica de forma directa, o el operador de boletería en línea en calidad de mandatario del productor, según corresponda, solicitará ante la DIAN la autorización de numeración de facturación para la venta de boletería electrónica. La solicitud de autorización de numeración deberá ser realizada a través del servicio informático electrónico que disponga la DIAN.

**Artículo 2.9.2.6.3. Representación gráfica de la factura electrónica.** La representación gráfica de la factura electrónica que debe ser presentada por los asistentes como medio de ingreso al evento, deberá contener, además de lo expresamente consagrado en el Decreto 1625 de 2016 para la representación gráfica de las facturas electrónicas, el código único del evento asignado al espectáculo y obtenido en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP) administrado por el Ministerio de Cultura.

**Artículo 2.9.2.6.4. Validación de la boletería física y electrónica para ingreso a espectáculos públicos de las artes escénicas.** Los operadores de boletería deberán poner a disposición del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

(DIAN), en tiempo real y a través de sus sistemas de información, reportes de ventas de la boletería y entrega de los derechos de asistencia físicos y electrónicos, así como reportes de validación del ingreso de asistentes a los espectáculos públicos de las artes escénicas.

En el lugar del evento, el productor deberá garantizar el reconocimiento o lectura de las boletas y demás derechos de asistencia digitales por medio de dispositivos validadores que deberán ponerse a disposición de la DIAN y el Ministerio de Cultura para efectos de las verificaciones y controles in situ o presenciales.

En el caso de la boletería física, el productor prestará su colaboración y facilitará a la DIAN y al Ministerio de Cultura las actividades para la verificación y revisión de las boletas y colillas correspondientes, en el marco de los controles in situ o presenciales que se realicen.

**Artículo 2.9.2.6.5.** La boletería física de espectáculos públicos de las artes escénicas cumplirá con estándares mínimos de legibilidad que permitan la lectura sin dificultad de la información sobre su precio debidamente discriminado, su localidad, su etapa de venta, y los demás datos exigidos en el artículo 1.6.1.4.25. del Decreto 1625 de 2016. En caso de que su lectura sea imposible para efectos de la determinación de la contribución parafiscal cultural, se entenderá que el precio de la misma es aquel que corresponda a la última etapa de venta de la localidad correspondiente o, en caso de duda sobre la localidad a que pertenece, a la localidad de mayor categoría.

La boletería física de espectáculos públicos de las artes escénicas seguirá siendo regida por el régimen legal contenido en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y por los artículos 1.6.1.4.24. (numeral 2) y 1.6.1.4.25. (literal b), numeral 2) del Decreto 1625 de 2016, en su carácter de documento equivalente a la factura de venta.

## CAPÍTULO III

### Escenarios para espectáculos públicos de las artes escénicas

Artículo 5°. Adiciónese el artículo 2.9.2.4.5. al Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.4.5.** En el marco de las definiciones previstas en el artículo tercero de la Ley 1493 de 2011, los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas son aquellos lugares de reunión cuya vocación principal es la presentación y circulación de espectáculos públicos de las artes escénicas y que tienen un carácter de escenario abierto al público.

Las organizaciones pertenecientes al sector cultural que tengan a cargo la administración de estos escenarios y que tengan como objeto y actividad principal la organización de espectáculos públicos de las artes escénicas, podrán aplicar a los recursos de la contribución parafiscal cultural.

En el caso de aquellos escenarios que pertenezcan a organizaciones de sectores distintos al cultural, se entenderá que estas podrán aplicar a los recursos de la contribución parafiscal cultural, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

1. Que la vocación principal del escenario sea cultural y de circulación artística, conforme a lo establecido en la definición prevista en el literal a) del artículo 3° de la Ley 1493 de 2011.

2. Que tenga una programación cultural permanente primordialmente en la presentación y/o circulación de espectáculos públicos de las artes escénicas, certificada por la autoridad cultural del municipio o distrito en donde se encuentre localizado el escenario, para lo cual deberá tenerse en cuenta el registro de eventos o inscripción de afectaciones al registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata el Decreto 1080 de 2015.

En todo caso, cada entidad territorial establecerá los procedimientos y condiciones para expedir las constancias y certificaciones previstas en este artículo, según las condiciones establecidas en cada convocatoria.

3. Que sea un escenario abierto al público, es decir, que preste un servicio a la comunidad en general del municipio o distrito en donde se encuentre localizado el escenario.

4. Que el escenario se encuentre al servicio del espectáculo público de las artes escénicas en calidad de préstamo, comodato, alquiler o a otro título, a productores y organizadores de espectáculos públicos de las artes escénicas de naturaleza pública y privada.

5. Que cumpla con los demás lineamientos previstos en el artículo 2.9.2.4.3 del presente decreto.

**Parágrafo 1°.** Por tratarse de una contribución parafiscal cultural, se excluyen de la asignación de los recursos de la misma a los escenarios cuya vocación principal sea la deportiva, aunque en los mismos se realicen espectáculos públicos de las artes escénicas, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 1493 de 2011.

**Parágrafo 2°.** Por tratarse de una contribución parafiscal cultural creada por la Ley 1493 de 2011, se excluyen de la asignación de los recursos de la misma los establecimientos de comercio abiertos al público o clubes con una vocación, actividad principal o giro habitual diferentes a la presentación de los espectáculos públicos de las artes escénicas, incluidos en la categoría de bares, tabernas, discotecas o similares, cuyo funcionamiento esté regulado por la Ley 1801 de 2016 o las normas que la sustituyan o modifiquen, sin perjuicio de la aplicación de las normas contenidas en la Ley 1493 de 2011 en materia de autorización de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados”.

Artículo 6°. *Escenarios móviles e itinerantes.* Adiciónese un numeral 4 al artículo 2.9.2.4.2. al Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**4. Proyecto de infraestructura cultural móvil y/o itinerante.** Propuesta para la construcción, mejoramiento, adecuación o dotación de escenarios móviles y/o itinerantes destinados a la presentación y circulación de espectáculos públicos de las artes escénicas. Estos escenarios se caracterizan porque su estructura no se encuentra adosada permanentemente al suelo.

Para este tipo de infraestructura, los recursos de la contribución parafiscal cultural se podrán aplicar exclusivamente a los elementos propios del escenario y no en los medios de transporte que se utilicen para su desplazamiento”.

## CAPÍTULO IV

### Seguimiento e inversión de la contribución parafiscal cultural

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 2.9.2.4.3. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.4.3. Lineamientos para la ejecución de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en las entidades territoriales.**



Las entidades responsables de cultura encargadas de ejecutar los recursos de la contribución parafiscal a nivel municipal y distrital, seguirán los siguientes lineamientos en la asignación de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas de su respectiva jurisdicción:

#### 1. Comités de la Contribución Parafiscal Cultural de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas

Los municipios y/o distritos conformarán en su jurisdicción una instancia denominada Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, la cual tendrá a su cargo definir en cada vigencia el monto de los recursos de la contribución parafiscal destinados a escenarios de las artes escénicas de naturaleza pública, y el monto para los escenarios de naturaleza privada o mixta. Así mismo, indicará cuáles son los proyectos beneficiarios de los recursos de la contribución parafiscal cultural, previa revisión del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos en este decreto y en la reglamentación de asignación de los recursos vigente en cada municipio o distrito. Esta revisión estará a cargo de la entidad responsable de cultura en la alcaldía municipal o distrital.

Los Comités de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas estarán compuestos mínimo por: (i) el Alcalde del municipio o distrito o su delegado, (ii) el Secretario de Hacienda o su delegado, (iii) el responsable de cultura en el municipio o distrito o su delegado, (iv) un representante del Consejo de Cultura del respectivo municipio o distrito, (v) un representante de los productores de espectáculos públicos en el municipio o distrito y (vi) un representante local del sector del teatro, danza, música, circo o magia, con trayectoria demostrada en la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. En la constitución de los Comités de que habla este artículo, se garantizará la participación en igual medida de los representantes privados respecto de los públicos.

El responsable de cultura en el municipio o distrito o su delegado tendrá a su cargo la secretaría técnica del Comité de que trata este artículo y dirimirá, con base en el interés general y en los principios de la Ley 1493 de 2011, cualquier decisión que no cuente con la mayoría suficiente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1493 de 2011, los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas se destinarán a la inversión en construcción, adecuación, mejoramiento, y dotación de la infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas, de acuerdo con las decisiones del Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.

#### 2. Uso Cultural del Escenario para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas

El uso cultural de los escenarios para espectáculos públicos de las artes escénicas deberá permanecer por un período de mínimo diez (10) años a partir de la recepción de los recursos provenientes de la contribución parafiscal cultural por parte de la entidad responsable de cultura en el municipio o distrito. El propietario del inmueble se deberá comprometer por escrito a mantener esta vocación. El cambio de uso del escenario antes del período estipulado dará lugar al reintegro por parte del propietario del escenario de los recursos provenientes de la contribución parafiscal.

Para el caso de escenarios móviles e itinerantes, las entidades responsables de cultura deberán verificar que el solicitante tiene el domicilio fiscal en el respectivo municipio o distrito; y establecerán los mínimos de programación que deberán cumplir estos escenarios en su jurisdicción, para lo cual solicitarán al beneficiario de la contribución parafiscal cultural las garantías que estimen pertinentes, tendientes a demostrar que los escenarios móviles y/o itinerantes cumplirán este requisito.

Las entidades territoriales que dispongan recursos de la contribución parafiscal cultural en esta línea, priorizarán la inversión de los recursos en que los escenarios móviles e itinerantes cumplan los requisitos de seguridad humana en aspectos como la capacidad máxima de personas que pueden contener, los medios de evacuación de los asistentes y demás aspectos de seguridad contenidos en el plan de gestión del riesgo y estrategias de respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1523 de 2012 y las demás normas nacionales y territoriales pertinentes en la materia.

De igual modo, compete a las alcaldías verificar que los lugares donde se instalará este tipo de infraestructura cuentan con la debida licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público, la autorización o permiso para uso temporal del espacio público, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y las demás normas nacionales y territoriales pertinentes en la materia.

#### 3. Convocatoria

Las entidades responsables de cultura o entidades encargadas de ejecutar los recursos de la contribución parafiscal a nivel municipal y distrital, deberán abrir convocatoria pública en la que participen los titulares de escenarios culturales de las artes escénicas de naturaleza privada o mixta, de acuerdo con las decisiones de los Comités de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.

Se exceptúa de participar en la convocatoria a los escenarios de naturaleza pública, del orden nacional departamental, municipal o distrital, caso en el cual el Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas definirá la participación de dichos escenarios en la asignación de los recursos de la contribución parafiscal en proyectos de inversión en infraestructura de las artes escénicas, atendiendo a lo establecido en la Ley 1493 de 2011, el presente decreto y demás normas aplicables en la materia.

En los municipios o distritos con un recaudo de contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en la vigencia fiscal inferior a 170 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), no será necesaria la apertura de convocatoria pública y la ejecución de estos recursos deberá estar orientada a proyectos de mejoramiento, adecuación y/o dotación, según lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 2.9.2.4.2. de este Decreto. Si el municipio o distrito no cuenta con infraestructura de las artes escénicas pública ni privada, podrá invertir los recursos de la contribución parafiscal en la realización de estudios para la construcción de este tipo de escenarios.

#### 4. Formulación de los proyectos de infraestructura de las artes escénicas

La solicitud para concursar en la asignación de recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas será presentada para cada proyecto por las organizaciones privadas o mixtas que participen del proceso de selección.

Los proyectos de infraestructura de las artes escénicas en escenarios de naturaleza pública y privada deberán especificar la modalidad en la destinación de la contribución parafiscal: construcción, adecuación, mejoramiento y/o dotación de la infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas, según lo establecido en el artículo anterior.

Las entidades responsables de cultura encargadas de ejecutar los recursos de la contribución parafiscal a nivel municipal y distrital podrán brindar la orientación técnica requerida para la formulación de los proyectos de infraestructura a quienes se encuentren interesados en participar en la asignación de los recursos, velando porque todos los proponentes de los proyectos tengan acceso a esta en igualdad de condiciones.

#### 5. Priorización en la asignación de los recursos de la contribución parafiscal de las artes escénicas

El Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas establecerá los criterios para priorizar las modalidades de la destinación específica en la asignación de recursos para los proyectos de infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas y dejará las constancias del proceso de selección.

El Comité propenderá por establecer medidas de fortalecimiento y democratización de la oferta cultural, orientadas a que los escenarios beneficiarios de los recursos de la contribución parafiscal cultural se encuentren al servicio de los productores y organizadores de espectáculos públicos de las artes escénicas de naturaleza pública y privada, especialmente aquellos que no cuentan con un escenario propio, en calidad de préstamo, comodato, alquiler u otro título.

#### 6. Publicidad de proyectos beneficiarios

Los municipios y distritos publicarán los proyectos ganadores en infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas, para lo cual podrán disponer de medios físicos o electrónicos de amplia difusión nacional y/o territorial.

#### 7. Modalidad de entrega de los recursos de la contribución parafiscal de las artes escénicas

Las alcaldías municipales y distritales deberán establecer el/los mecanismo(s) idóneo(s) para la entrega de los recursos (contratos de apoyo, estímulos, fiducia, transferencias, etc.).

#### 8. Interventoría en proyectos de artes escénicas

Las entidades responsables de cultura en el municipio o distrito harán la interventoría o supervisión pertinente a cada proyecto seleccionado y tendrán que tomar en cualquier caso todas las medidas de control y vigilancia para asegurar el adecuado uso de los recursos que sean asignados.

#### 9. Registro de proyectos seleccionados

Los proyectos de infraestructura beneficiarios de los recursos de la contribución parafiscal cultural deberán ser registrados en línea a través del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP) del Ministerio de Cultura. El registro estará a cargo de las entidades responsables de cultura en el municipio o distrito.

Una vez inscritos en el PULEP, para efectos de la verificación técnica pertinente, la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Cultura realizará la distribución correspondiente al Grupo de Infraestructura Cultural o a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura según la naturaleza del proyecto, junto con los documentos soporte que acrediten la viabilidad en la ejecución.

Las entidades responsables de cultura municipales y distritales deberán garantizar que los proyectos beneficiarios queden debidamente registrados ante la Oficina de Planeación del Ministerio de Cultura antes del giro de los recursos a los beneficiarios.

**Parágrafo 1°.** En caso de comodato, arrendamiento u otros en los que no se ostente la propiedad del predio o inmueble, el interesado en presentar el proyecto deberá demostrar autorización para la ejecución de los recursos del propietario titular del predio que figure en el folio de matrícula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

**Parágrafo 2°.** En caso de que el interesado en presentar el proyecto sea un productor de espectáculos públicos de las artes escénicas que no se encuentre al día en la declaración y pago de la contribución parafiscal, o que no surta su registro como productor ante el Ministerio de Cultura, no podrá ser beneficiario de la asignación de estos recursos°.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 2.9.2.5.2. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

**“Artículo 2.9.2.5.2. *Periodo de ejecución de los recursos.*** Las alcaldías municipales y distritales podrán ejecutar los recursos de la contribución parafiscal cultural desde el momento de la recepción del giro realizado por el Ministerio de Cultura y hasta el final de la vigencia fiscal siguiente a la transferencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 2.9.2.4.1 del presente decreto.

Las entidades territoriales que no hayan ejecutado los recursos en el plazo indicado anteriormente, podrán utilizar los recursos en las siguientes dos vigencias, de lo cual informarán al Ministerio de Cultura con copia a la contraloría territorial competente”.

### CAPÍTULO V

#### Otras disposiciones

Artículo 9°. Modifíquese el numeral 1 del artículo 2.9.2.1. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“1. El responsable del proyecto de infraestructura deberá, previamente a la ejecución, presentar y hacer calificar por parte del Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), previsto en el artículo 2.9.2.2 de este decreto, un proyecto de inversión en infraestructura de escenarios para la presentación y realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. Para el efecto, se entiende por proyecto de infraestructura el conjunto de estudios, diseños y obras de arquitectura e

ingeniería, así como la dotación de elementos e instalaciones necesarios para el desarrollo de los mencionados espectáculos.

Los proyectos presentados de los que trata el artículo 4° de la Ley 1493 de 2011 y el presente artículo, deberán estar enfocados a la construcción, adecuación, mejoramiento, dotación y/o mantenimiento de escenarios habilitados u orientados a su habilitación una vez concluidos, cuya vocación sea la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas, en alguna(s) de las siguientes modalidades”.

Artículo 10. Modifíquese el parágrafo 1° al artículo 2.9.2.1. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Parágrafo 1°.** Las inversiones aceptables para efectos de lo previsto en este artículo deberán realizarse preferiblemente en dinero. Las inversiones en especie deberán valorarse de conformidad con las disposiciones previstas en el Estatuto Tributario. En todo caso, todo inversionista se entenderá responsable del proyecto”.

Artículo 11. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.9.2.1. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Parágrafo 3°.** Para efectos de lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1493 de 2011, se entenderá como “infraestructura de proyectos para escenarios habilitados”, aquellos proyectos en infraestructura de artes escénicas que estén orientados al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 16 de la Ley 1493 de 2011 y que se enmarquen en los tipos de proyecto definidos en este artículo”.

Artículo 12. Adiciónese el parágrafo 2° al artículo 2.9.2.3. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Parágrafo 2°.** El Ministerio de Cultura remitirá un informe a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en las condiciones y con la periodicidad que esta establezca, indicando los proyectos de infraestructura de las artes escénicas calificados por el Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (CIEPA), el valor total de cada proyecto, los montos de los elementos e ítems que se aprobaron, así como el monto de las inversiones realizadas a partir de los informes periódicos presentados por los beneficiarios”.

Artículo 13. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 2.9.2.1.3. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Parágrafo 2°.** Los responsables de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas deducirán en la contribución parafiscal a consignar, el monto de las retenciones que les hayan efectuado, según lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Parte IX del presente decreto”.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 2.9.2.1.4. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.1.4. Presentación de la declaración de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.** Los responsables de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas que sean productores permanentes según lo establecido en la Ley 1493 de 2011, presentarán una declaración bimestral ante el Ministerio de Cultura y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del mecanismo electrónico dispuesto o habilitado por la DIAN.

**Parágrafo 1°.** Los periodos bimestrales para la declaración de la contribución parafiscal de que trata este artículo son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre- octubre; noviembre-diciembre. En cada vigencia fiscal, la declaración de la contribución parafiscal deberá ser presentada dentro de los mismos plazos establecidos por el Gobierno nacional para presentar la declaración del IVA.

**Parágrafo 2°.** Los productores ocasionales presentarán una declaración por cada espectáculo público que realicen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su realización. Además, deberán constituir las garantías o pólizas de seguro que reglamente el Ministerio de Cultura, las cuales deberán amparar el pago de la contribución parafiscal”.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 2.9.2.1.5. del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.1.5. Contenido de la declaración de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.** La declaración de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata el artículo 2.9.2.1.1 del presente decreto, deberá contener:

1. El formulario que para el efecto prescriba el Ministerio de Cultura debidamente diligenciado y suscrito por el productor.
2. La información necesaria para la identificación del productor.
3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el hecho generador en los espectáculos públicos de las artes escénicas realizados en el bimestre.
4. La información del pago correspondiente.
5. Un anexo que contenga el listado en el que se discrimine el pago de la contribución parafiscal según la entidad territorial donde se hayan realizado los espectáculos públicos de las artes escénicas, en el formato que para el efecto adopte el Ministerio de Cultura. Este se presentará junto con la declaración y hará parte integral de la misma.

Los párrafos correspondientes a este artículo 2.9.2.1.5. mantendrán su redacción.

Artículo 16. Modifíquese el artículo 2.9.2.1.6. del Decreto número 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.1.6. Espectáculos con entrega anticipada de boletería.** Cuando se realicen espectáculos públicos de las artes escénicas con entrega anticipada de boletería, los productores permanentes y ocasionales deberán presentar la declaración y pago de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en los plazos establecidos en la Ley 1493 de 2011 y en el presente decreto. Por su parte, los agentes retenedores presentarán la declaración de retención en la que se incluyan las retenciones efectuadas por este concepto en el período.

Para estos efectos, se entiende que existe entrega anticipada de boletería, cuando el adquirente transfiere el valor de la boleta o derecho de asistencia, en forma previa al momento en que se realice el espectáculo público de las artes escénicas.

En caso de que el espectáculo público no se realice, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2.9.2.4.4 del presente decreto”.

Artículo 17°. Modifíquese el artículo 2.9.2.2.5. del Decreto número 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.2.5. Presentación de la declaración de retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.** Los agentes de retención deberán presentar en forma mensual ante el Ministerio de Cultura, la declaración de retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, en los plazos que señale el Gobierno nacional para la retención en la fuente y a través del mecanismo electrónico dispuesto o habilitado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la declaración mensual se deben incluir las retenciones de la contribución parafiscal de los espectáculos de las artes escénicas efectuadas en los términos del artículo 9° de la Ley 1493 de 2011, realizadas durante el mes anterior al de la respectiva declaración.

Parágrafo 1°. La presentación de la declaración de retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, será obligatoria en todos los casos, siempre y cuando en el mes se hayan realizado operaciones sujetas a la misma”.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 2.9.2.2.6. del Decreto número 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.2.6. Contenido de la declaración de retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.** La declaración de retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata el artículo 2.9.2.2.5. del presente decreto, deberá contener:

1. El formulario que para el efecto prescriba el Ministerio de Cultura, debidamente diligenciado y suscrito por el agente retenedor.
2. La información necesaria para la identificación del agente retenedor.
3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el hecho generador en los espectáculos públicos de las artes escénicas realizados en el bimestre.
4. La información del pago correspondiente.
5. Un anexo que contenga el listado en el que se discrimine el pago de la contribución parafiscal según la entidad territorial donde se hayan realizado los espectáculos públicos de las artes escénicas, en el formato que para el efecto adopte el Ministerio de Cultura”.

Los párrafos correspondientes al artículo 2.9.2.2.6. mantendrán su redacción.

Artículo 19. Modifíquese el parágrafo 1° del artículo 2.9.2.5.1. del Decreto número 1080 de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura reglamentará mediante resolución el procedimiento, los mecanismos y protocolos para efectuar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos de la contribución parafiscal en los municipios y distritos, en el marco de lo dispuesto en este decreto”.

Artículo 20. Adiciónese un numeral al artículo 2.9.2.2.3. del Decreto número 1080 de 2015, el cual quedará así:

“4. Que en el Registro Único Tributario (RUT) se incluya como actividad económica principal o secundaria el Código de Actividad Económica 7990 (“Otros servicios de reserva y actividades relacionadas”).

Artículo 21. Modifíquese el artículo 2.9.2.2.1. del Decreto número 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.2.1. Retención la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de artes escénicas.** Los agentes retención definidos en el artículo “Agentes de retención” de este decreto, realizarán la retención prevista en el artículo 9° de la Ley 1493 de 2011. La retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes aplicable por los agentes de retención, a título de contribución parafiscal de las artes escénicas, tendrá una tarifa del diez por ciento (10%) sobre valor total de la boletería o derechos asistencia generados en el correspondiente mes, cuyo precio o costo individual sea igual o superior a 3 UVT.

La retención de contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, se realizará sobre todos los ingresos que perciben los operadores boletería por la venta de boletería o entrega de derechos de asistencia a nombre del productor, la cual deberá causarse en el momento de la venta de la respectiva boleta al público, o de la entrega del derecho asistencia.

No formará parte de la base de retención el valor de la retribución que recibe el operador de boletería, ni el importe de los gastos asociados a la comercialización o distribución que se cobra por parte de ellos. En todo caso, estos servicios se encuentran sujetos al impuesto sobre las ventas (IVA), de conformidad con lo estipulado en el Estatuto Tributario.

Artículo 22. *Transitorio.* El Ministerio de Cultura y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en ejercicio de sus funciones y según corresponda, reglamentarán lo previsto en artículos 1°, 2° y 4° del presente decreto y señalarán, de ser del caso, los mecanismos tecnológicos adoptados para capturar y sistematizar la información de registro de los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas y de la facturación electrónica de los espectáculos públicos de las artes escénicas.

Los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas que estén registrados ante el Ministerio de Cultura al momento de la expedición del presente decreto, deberán complementar su registro con los requisitos faltantes dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que emitan el Ministerio de Cultura o la DIAN. La falta de subsanación de los mismos dará lugar a la anulación del registro.

Los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas y los operadores de boletería, en su calidad de mandatarios de los productores en la venta de boletería y derechos de asistencia en formato digital, que al momento de expedición de este decreto se encuentren emitiendo facturas electrónicas previstas en el artículo 1.6.1.4.13. del Decreto



número 1625 de 2016 y/o la factura por computador prevista en el artículo 1.6.1.4.7. del Decreto número 1625 de 2016 y sus reglamentos, o la factura por talonario, y que deseen continuar ofreciendo al público boletería y derechos de asistencia en formato digital, podrán hacerlo en tanto implementen, salvo en lo dispuesto en este Decreto, el sistema de facturación electrónica regulado en la Sección 1, Capítulo 4, Título 1 de la Parte 6 del Decreto número 1625 de 2016 y las normas que lo adicionen, reglamenten, complementen o sustituyan.

Artículo 22. *Vigencia y derogatorias.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

*Mauricio Cárdenas Santamaría.*

La Ministra de Cultura,

*Mariana Garcés Córdoba.*

## MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

### DECRETOS

#### DECRETO NÚMERO 541 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se delegan unas funciones en el Ministro de Justicia y del Derecho.*

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 211 de la Constitución Política y 9° de la Ley 489 de 1998, y

#### CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que “[l]a función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que el artículo 211 de la Constitución Política prescribe que “[l]a ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, Superintendentes, Gobernadores, Alcaldes y Agencias del Estado que la misma ley determine”.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 establece que “[l]as autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Que al Presidente de la República, además de las funciones constitucionales, le han sido asignadas competencias o funciones en el Decreto-ley 960 de 1970 relacionadas, entre otras, con la designación de los notarios de primera categoría.

Que el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 dispone que, por regla general, contra los actos administrativos procede el recurso de reposición, el cual se formulará ante quien expide la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque, de ser el caso.

Que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, establece que “[l]os actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte (...)”.

Que, en aplicación de los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, es necesario delegar en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones relacionadas con el trámite y decisión de recursos de reposición y solicitudes de revocatoria directa, formulados en contra de actos administrativos relacionados con asuntos notariales.

En mérito de lo expuesto,

#### DECRETA:

Artículo 1°. *Delegación en el Ministerio de Justicia y del Derecho.* Delégase en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones de tramitar y decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa interpuestos contra actos administrativos relacionados con asuntos notariales.

Artículo 2°. *Derogatoria.* Derógase el Decreto número 1113 de 2016.

Artículo 3°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

*Enrique Gil Botero.*

### RESOLUCIONES EJECUTIVAS

#### RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 143 DE 2017

(marzo 30)

*por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

#### CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Embajada en nuestro país, mediante Notas Verbales números II.2.C6.E3 002920 del 5 de septiembre y II.2.C6.E3 003276 del 18 de octubre de 2016, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Hower Alexander Duarte Quiroga, quien en Venezuela se conoce como Hover Alexander Tirado Quiroga, requerido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Barinas, de conformidad con la Orden de Apreensión del 20 de julio de 2016, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles.

2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e) mediante resolución del 5 de septiembre de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Hower Alexander Duarte Quiroga, identificado con cédula de ciudadanía número 1092386468, identificado en Venezuela como Hover Alexander Tirado Quiroga, con cédula de identidad venezolana número V-19.243.715, quien había sido detenido el 29 de agosto de 2016, por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con fundamento en una Circular Roja de Interpol y notificado de la resolución de captura con fines de extradición el 5 de septiembre de 2016.

3. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su Embajada en nuestro país mediante Notas Verbales números II.2.C6.E3 número 003647 y II.2.C6.E3 número 003648 del 24 y 25 de noviembre de 2016, respectivamente, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Hower Alexander Duarte Quiroga, quien en Venezuela se conoce como Hover Alexander Tirado Quiroga.

4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2831 del 24 de noviembre de 2016, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente para los dos Estados, el ‘Acuerdo sobre extradición’ adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano, Hower Alexander Duarte Quiroga, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI16-0032688-OAI-1100 del 30 de noviembre de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 8 de marzo de 2017, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exige el Convenio aplicable al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Hower Alexander Duarte Quiroga.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:

#### “III. Condicionamientos:

3.1. El Gobierno nacional está en la obligación de condicionarla entrega de la persona solicitada, de conformidad con lo estipulado en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con el artículo VIII del Acuerdo sobre Extradición de 1911, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la extradición, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención en razón del presente trámite y a que se le conmute la pena de muerte, como también a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

3.2. Del mismo modo, le corresponde condicionar la entrega del solicitado, como lo solicita la defensa, a que se le respeten todas las garantías debidas, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

3.3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en la imputación por la cual procede la presente extradición.

3.4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

3.5. Se advierte además, que en razón de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

#### VI. Cuestión final:

De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el Gobierno nacional puede extraditar al ciudadano Hower Alexander Duarte Quiroga bajo los con-

dicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su entrega.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,  
EMITE CONCEPTO FAVORABLE

Respecto de la solicitud de extradición del ciudadano Hower Alexander Duarte Quiroga, con fundamento en la orden de aprehensión del 20 de julio de 2016 dictada en el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control número 5 del Circuito Judicial Penal del Estado de Barinas, por la presunta comisión del delito de “homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles”, según lo pide el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su embajada...”.

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Hower Alexander Duarte Quiroga, identificado con cédula de ciudadanía número 1092386468, identificado en Venezuela como Hover Alexander Tirado Quiroga, con cédula de identidad venezolana número V-19.243.715, requerido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Barinas, Venezuela, de conformidad con la Orden de Aprehensión del 20 de julio de 2016, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Hower Alexander Duarte Quiroga no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 11 del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, el Gobierno nacional advertirá al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco será entregado a otra Nación. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Hower Alexander Duarte Quiroga, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

11. Que el ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Hower Alexander Duarte Quiroga, identificado con Cédula de Ciudadanía número 1092386468, identificado en Venezuela como Hover Alexander Tirado Quiroga, con cédula de identidad venezolana número V-19.243.715, requerido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Barinas, Venezuela, de conformidad con la Orden de Aprehensión del 20 de julio de 2016, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Hower Alexander Duarte Quiroga, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco será entregado a otra Nación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo Bolivariano de Extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,

Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

**Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.**

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Enrique Gil Botero.

## RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 144 DE 2017

(marzo 30)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 2022 del 14 de octubre de 2016, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan Diego Cuéllar Gallego, requerido para comparecer a juicio por un delito de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 20 de octubre de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego, identificado con la cédula de ciudadanía número 16782194, la cual se hizo efectiva el 7 de noviembre de 2016, por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 2496 del 3 de enero de 2016, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego.

En dicha Nota se informa lo siguiente:

“Juan Diego Cuéllar Gallego es requerido para comparecer a juicio por un delito de narcóticos. Es el sujeto de la acusación número CR 4:16 CR 46, dictada el 14 de abril de 2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, o ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 21, Sección 959 del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos, y del Título 46, Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra Juan Diego Cuéllar Gallego por estos cargos fue dictado el 14 de abril de 2016, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0023 del 4 de enero de 2017, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988<sup>1</sup>. En ese sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

Así mismo, la ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000<sup>2</sup>, que en su artículo 16, numerales 3 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como caso de extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

<sup>1</sup> Artículo 3° numeral 1 literal a).

<sup>2</sup> Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).



De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI17-0000360-OAI-1100 del 10 de enero de 2017, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 8 de marzo de 2017, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:

“VI. ACOTACIÓN FINAL

*Resulta pertinente poner de presente al Gobierno nacional que, en caso de conceder la extradición, se debe condicionar la entrega, de modo tal que el ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego no sea juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le imponga la pena capital o perpetua, al tenor del artículo 494 del Código de Procedimiento Penal de 2004, condicionamientos fijados en la ley y reiterados por la jurisprudencia.*

*Así mismo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas Internas sobre la materia, le ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.*

*Además, el Gobierno nacional debe formular las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le reconozcan al solicitado todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad (artículo 494 del estatuto procesal), es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.*

*De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.*

*Asimismo, en caso de que el ciudadano Cuéllar Gallego sea absuelto, sobreseído, o por cualquier otra vía legal, declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su extradición y, en consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante –en el evento en que el mencionado desee regresar al país– deberá asumir sus gastos de transporte y manutención, de acuerdo con su dignidad humana (artículos 1° y 93 de la Constitución Política).*

*Por último, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en el evento de que el entregado en extradición sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso por el que es reclamado, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.*

VII. CONCLUSIÓN

*En consecuencia, como la totalidad de los requisitos formales contemplados en los artículos 490, 493, 495 y 502 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) se satisfacen a cabalidad, la Corte **Conceptúa Favorablemente** a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano colombiano Juan Diego Cuéllar Gallego, conforme los cargos uno y dos que se le imputan en la acusación número 4:16 CR 46, dictada el 14 de abril de 2016, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas...*”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Juan Diego Cuéllar Gallego, identificado con la cédula de ciudadanía número 16782194, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, o ayuda y facilitación de dicho delito; y,

Cargo Dos: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número CR 4:16 CR 46, dictada el 14 de abril de 2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que ésta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Diego Cuéllar Gallego identificado con la cédula de ciudadanía número 16782194, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, o ayuda y facilitación de dicho delito; y,

Cargo Dos: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación No. CR 4:16 CR 46, dictada el 14 de abril de 2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Juan Diego Cuéllar Gallego al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

**Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.**

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Ministerio de Justicia y del Derecho,

Enrique Gil Botero.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 145 DE 2017

(marzo 30)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Embajada en nuestro país, mediante Notas Verbales números II.2.C6.E3 002649 y II.2. C6.E3 002796 del 11 y 22 de agosto del 16, respectivamente, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Nicolás Agudelo Bejarano, requerido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira, de conformidad con la Orden de Apreensión del 19 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de tráfico en la modalidad de transporte agravado en el carácter de director y financista de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir.



2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 11 de agosto de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano, identificado con cédula de ciudadanía número 79237092 y cédula de identidad venezolana V-30.279.352, quien había sido detenido el 4 de agosto de 2016, por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con fundamento en una circular roja de Interpol y notificado de la resolución de captura con fines de extradición el 11 de agosto de 2016.

3. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su Embajada en nuestro país mediante Nota Verbal II.2.C6.E3 número 003409 del 2 de noviembre de 2016, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano.

4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2638 del 3 de noviembre de 2016, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de precisar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de extradición y multilaterales de Cooperación entre las Partes:

1. El ‘Acuerdo sobre extradición’ adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.

2. La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988<sup>1</sup>.

En ese sentido, el artículo 6°, numeral 2, de la precitada Convención dispone lo siguiente:

‘[...] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes...’.

5. Que perfeccionado así el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano, Nicolás Agudelo Bejarano, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI16-0030746-OAI-1100 del 9 de noviembre de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 8 de marzo de 2017, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exige el Convenio aplicable al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:

#### “CONCLUSIÓN

*En consecuencia, ya que los requisitos contemplados en las disposiciones referidas en precedencia se satisfacen a cabalidad y que los hechos fueron cometidos con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 17 de diciembre de 1997, modificadorio del artículo 35 de la Constitución Nacional, la Corte Conceptúa Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respecto del ciudadano colombiano Nicolás Agudelo Bejarano, por los cargos que endilgados en el auto de privación judicial preventiva de la libertad expedido el 19 de mayo de 2016 por el Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira.*

#### ACOTACIÓN FINAL

*En caso de que el Gobierno nacional conceda la extradición de Nicolás Agudelo Bejarano, en los términos que más adelante se precisan, se debe condicionar su entrega de tal modo que no sea juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a las sanciones de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo previsto en los artículos 12 y 34 de la Carta Política, ni se le impondrá la pena capital, al tenor del artículo 10 del Acuerdo de Extradición.*

*También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas circunstancias, todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a que su situación de detenido se desarrolle en condiciones dignas y a que la eventual pena privativa de la libertad que se le imponga tenga como finalidad esencial la resocialización, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.*

*Así mismo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca al requerido posibilidades razonables y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que le prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.*

*También se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Nacional.*

*De igual modo, en caso de que Nicolás Agudelo Bejarano sea absuelto, sobreseído o, por cualquier otra vía legal declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su entrega en extradición y, en consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante -si el ciudadano desea regresar al país- deberá asumir los gastos de transporte y manutención*

*correspondientes de acuerdo con su dignidad humana (artículos 1° y 93 de la Constitución Nacional).*

*Adicionalmente, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en el evento de que el ciudadano solicitado sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso por el cual es reclamado, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.*

*En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTÚA*

*Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respecto del ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano, en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en auto que decreta medida de privación judicial preventiva de la libertad, de fecha 19 de mayo de 2016, emitido por el Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira dentro del asunto identificado como SP11-P-2016-002708...’.*

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Nicolás Agudelo Bejarano, identificado con cédula de ciudadanía colombiana número 79237092 y cédula de identidad venezolana V- 30279352, requerido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira, Venezuela, de conformidad con la Orden de Aprehesión del 19 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de tráfico en la modalidad de transporte agravado en el carácter de director y financista de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 11 del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, el Gobierno nacional advertirá al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco será entregado a otra Nación. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que ésta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

11. Que el ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

#### RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Nicolás Agudelo Bejarano, identificado con cédula de ciudadanía colombiana número 79237092 y cédula de identidad venezolana V-30279352, requerido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira, Venezuela, de conformidad con la Orden de Aprehesión del 19 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de tráfico en la modalidad de transporte agravado en el carácter de director y financista de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Nicolás Agudelo Bejarano, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco será entregado a otra Nación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo Bolivariano de Extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de

<sup>1</sup> Artículo 3° numeral 1 literal a).



conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

**Publíquese** en el *Diario Oficial*, **notifíquese** al ciudadano requerido, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Enrique Gil Botero.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 555 DE 2017

(marzo 30)

por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1801 de 2016  
“por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 10 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, dispone que los yerros caligráficos y/o tipográficos en las citas o referencias de las leyes deberán ser modificados, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del Legislador.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-178 de 2007 consideró que “*corresponde a los respectivos funcionarios enmendar los errores caligráficos o tipográficos en el texto de una norma, cuando no quede duda alguna de la voluntad del Congreso. Así mismo, se ha dicho que la expedición de decretos de corrección de yerros es una función administrativa y ordinaria del Presidente de la República en el ámbito de la promulgación de la ley*”.

Que el Consejo de Estado en Sentencia (6871) del 22 de noviembre de 2002, adoptó la postura jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la facultad del Presidente de la República para corregir yerros legislativos a través de la expedición de decretos, para lo cual trajo a colación los argumentos expuestos en la Sentencia C-520 de 1998 por la Corte Constitucional, de la siguiente manera: “*dentro de la función constitucional de promulgar las leyes es válido que se haga uso del mecanismo idóneo para enmendar los textos legales cuando ellos presentan errores caligráficos o tipográficos que puedan alterar su sentido real, tal como sucede en el caso en estudio, cual es la publicación de la ley con la corrección del error o la expedición de un decreto que ponga de presente el error y su correspondiente corrección -los cuales no afectan la vigencia y validez de la inicialmente publicada-, actuaciones que le corresponde ejecutar al Presidente de la República.*”

Que en los artículos 27 (numerales 5, 6 y 7 de la Tabla), 33 (numerales 1 y 2 c de la Tabla), 59 (numeral 5 de la Tabla), 92 (numeral 3 de la Tabla), 115 (numerales 4 y 6 de la Tabla), 135 (numerales 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Tabla), 140 (numeral 3 y 11 de la Tabla), 180 (inciso final del parágrafo y parágrafo transitorio), 209 (numeral 2 b) y 210 (numeral 2 c) de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, se hace referencia a medidas correctivas definidas en el artículo 173 de esa misma ley, pero por errores tipográficos no fueron transcritas con el nombre correcto.

Que el numeral 3 del artículo 34 de la Ley 1801 de 2016, remite al artículo 83 de la misma ley, siendo lo correcto remitir al artículo 84, dado que no queda duda alguna de que la intención del Legislador era remitir al artículo sobre el perímetro de impacto de la actividad económica, principalmente, porque así lo dispone el propio numeral 3 al establecer: “*ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo [...].*”

Que el parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley 1801 de 2016 remite al numeral 11 del mismo artículo, cuando lo correcto es que lo haga al numeral 10, teniendo en cuenta que el tema del parágrafo 4° y de la Ley 1209 de 2008 es el de seguridad en las piscinas, el cual es coincidente con el asunto de que trata el numeral 10. En ese sentido, no queda duda de que la intención del Legislador era remitir al numeral señalado.

Que el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 1801 de 2016 remite al mismo artículo 45 de ese Código, cuando lo correcto es que la remisión se haga al artículo 46 sobre “Comportamientos de los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución”. Así, el actual artículo 45 se incluyó en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes como un artículo nuevo y su texto remitía al artículo 45 (actual artículo 46), pero en la conciliación, aunque dicho artículo nuevo se enumeró como 45, no se modificó la remisión señalada. Por tal razón es necesario efectuar la corrección teniendo en cuenta la clara intención del Legislador de remitir a esa norma.

Que el artículo 60 de la Ley 1801 de 2016 remite al artículo 46 del mismo Estatuto, cuando lo correcto es remitir al artículo 47, sobre “Definición y clasificación de las aglomeraciones de público”, ya que si bien el texto aprobado en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes del artículo 59, actual artículo 60, remitía correctamente al

artículo 46, por efectos de la enumeración final de estas normas, el artículo sobre definiciones y clasificaciones de las aglomeraciones de público quedó finalmente con el número 47, sin que dicha circunstancia se advirtiera al momento de la conciliación. En ese sentido, no queda duda alguna sobre la intención del Legislador de remitir al parágrafo del artículo 47.

Que el artículo 173 en el numeral 11 de la Ley 1801 de 2016 establece la medida correctiva de “*Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles*”, pero según el artículo 188 de la misma ley, que define la medida como tal, el nombre correcto de la misma es “*Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o muebles*”. Así, por un error tipográfico no fue transcrito el nombre correcto, por lo que resulta necesario corregirlo de acuerdo con la clara intención del Legislador.

Que en el artículo 236 de la Ley 1801 de 2016 se hace referencia a la 1732 de 2015, cuando el año de expedición de esa norma es el 2014, por lo que se hace necesario proceder a su corrección.

Que, en consecuencia, es necesario expedir un decreto de corrección de yerros que subsane las imprecisiones señaladas de acuerdo con la clara intención del Legislador.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Corríjase el artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.** Los siguientes

comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia:

1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.
5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.
7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogeo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 2.
Numeral 2	Amonestación; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 3	Multa General tipo 3.
Numeral 4	Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia; Multa General tipo 2.
Numeral 5	Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles; Remoción de bienes; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Destrucción de bien.
Numeral 6	Multa General tipo 2; Prohibición de ingreso a actividad que involucre aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien.
Numeral 7	Multa General tipo 2; Prohibición de ingreso a actividad que involucre aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien.

Parágrafo 2°. En todos los comportamientos señalados en el presente artículo, se deberá utilizar la mediación policial como medio para intentar resolver el conflicto”.

Artículo 2°. Corríjase el artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas.** Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse:

1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:
  - a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo;
  - b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;
  - c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas.
2. En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público:
  - a) Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.

- b) Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.
- c) Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizados para su consumo.
- d) Fumar en lugares prohibidos.
- e) Limitar u obstruir las manifestaciones de afecto y cariño que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo en razón a la raza, origen nacional o familiar, orientación sexual, identidad de género u otra condición similar.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 3; Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
Numeral 2, literal a)	Multa General tipo 3.
Numeral 2, literal b)	Multa General tipo 3.
Numeral 2, literal c)	Multa General tipo 2; Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
Numeral 2, literal d)	Amonestación.
Numeral 2, literal e)	Multa general tipo 1.

Parágrafo 2°. No constituyen actos sexuales o de exhibicionismo los besos o caricias que las personas, sin importar su género, color de piel, orientación sexual o identidad de género, manifiesten como expresiones de cariño, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Artículo 3°. Corríjase el artículo 34 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias.** Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse:

1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo.
2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo.
3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 84 de la presente ley.
4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley.
5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo.

Parágrafo 1°. Los niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales anteriores serán objeto de las medidas dispuestas en la Ley 1098 de 2006 y demás normas vigentes en la materia.

También procederá la medida de destrucción del bien, cuando haya lugar.

Parágrafo 2°. La persona mayor de edad que incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos internos de cada establecimiento educativo:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 3; Destrucción de bien.
Numeral 2	Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 3	Multa General tipo 3; Destrucción de bien.
Numeral 4	Multa General tipo 4; Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 5	Multa General tipo 2; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles.

“.

Artículo 4°. Corríjase el artículo 38 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 38. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes.**

Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar:

1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde:
  - a) Se realicen espectáculos o actividades cinematográficas aptas solo para mayores de 18 años;
  - b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones establecidas por la Ley 1554 de 2012;
  - c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Gobierno nacional;
  - d) Se realicen actividades sexuales o pornográficas, o se ejerza la prostitución, o la explotación sexual;
  - e) Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas;
  - f) Se desarrollen juegos de suerte y azar localizados;
2. Inducir, engañar o realizar cualquier acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o participen de actividades que les están prohibidas por las normas vigentes.
3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para acceder a material pornográfico.

4. Emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.

5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:

- a) Material pornográfico;
  - b) Bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
  - c) Pólvora o sustancias prohibidas;
  - d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones;
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
- a) Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;
  - b) Participar en juegos de suerte y azar;
  - c) Ingresar a fiestas o eventos similares en los cuales exista previa restricción de edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su ingreso por las normas vigentes.
  - d) La explotación laboral.

7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores de animales potencialmente peligrosos.

8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.

9. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.

10. Permitir que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de piscinas y estructuras similares, de uso colectivo o de propiedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o modifiquen.

11. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean parte de confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, se impondrá solo la medida correctiva de suspensión temporal de actividad y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley 1554 de 2012 y las normas que la adicionen o modifiquen.

Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en el literal d) del numeral 1 del presente artículo, será procedente también la medida correctiva de suspensión definitiva de la actividad.

Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el literal d) del numeral 1 y en el numeral 8, se impondrán las medidas correctivas en el presente Código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen o modifiquen.

Parágrafo 4°. En los comportamientos señalados en el numeral 10, se impondrán las medidas correctivas en el presente Código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o modifiquen.

Parágrafo 5°. En los casos en los que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados se aplicará lo dispuesto en la Ley 109 2006.

Parágrafo 6°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 2	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3	Multa General tipo 4; Destrucción de bien.
Numeral 4	Multa General tipo 1.
Numeral 5	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 6	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 7	Multa General tipo 2.
Numeral 8	Suspensión definitiva de actividad.
Numeral 9	Multa General tipo 4.
Numeral 10	Suspensión temporal de actividad.
Numeral 11	Multa General tipo 4.

Parágrafo 7°. Al menor de 18 años que cometa cualquiera de los anteriores comportamientos se le aplicarán las medidas previstas en el Código de infancia y adolescencia.

Parágrafo 8°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida reincida en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad”.

Artículo 5°. Corríjase el artículo 45 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 45. Comportamientos de quienes soliciten servicios de prostitución.** Los siguientes comportamientos no deben ser realizados por quienes solicitan los servicios de prostitución en tanto afectan a quienes prestan dicho servicio:

1. Irrespetar, agredir o maltratar física o psicológicamente a las personas en el ejercicio de la prostitución, en sus derechos, dignidad o libertad.
2. Obligar a las personas en el ejercicio de la prostitución a realizar actividades contrarias a su voluntad.
3. Solicitar o usar los servicios de las personas en ejercicio de la prostitución incumpliendo las condiciones del artículo 46.



Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 4.
Numeral 2	Multa General tipo 4.
Numeral 3	Multa General tipo 4; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

Artículo 6°. Corrijase el artículo 59 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 59. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.** Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas y por tanto no deben realizarse:

1. Realizar acciones que constituyan un riesgo para la propia vida o la de terceros, antes, durante o después de tales actividades.
2. No utilizar los implementos de seguridad en la actividad que los exige.
3. Incumplir con las instrucciones o reglamentos específicos de los organizadores o responsables de la actividad o desatender las recomendaciones de los grupos de logística en lo que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no autorizados para el público.
4. Carecer o no proporcionar los implementos de seguridad exigidos por la actividad, o proporcionarlos en mal estado de funcionamiento.
5. Incumplir las disposiciones legales o la reglamentación distrital o municipal pertinente.
6. No respetar la asignación de la silletería en caso de haberla.
7. Ingresar o introducir niños, niñas o adolescentes a los actos o eventos que puedan causar daño a su integridad o en los cuales exista previa restricción de edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su ingreso por las normas vigentes.
8. Invadir los espacios no abiertos al público.
9. Quienes, al desplazarse a un acto o evento, o durante el desarrollo del mismo, en el recinto o en sus alrededores, porten, consuman, o estén bajo los efectos de sustancias psicoactivas, alcohólicas o sustancias combinadas química o físicamente, que produzcan estados irregulares en el cuerpo humano y estén prohibidas por las normas vigentes, o por la reglamentación expedida de conformidad con el artículo 47 del presente Código.
10. Pretender ingresar, o estar en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma u objetos prohibidos por las normas vigentes, por el alcalde o su delegado.

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR DE MANERA GENERAL
Numeral 1	Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2	Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia
Numeral 3	Amonestación.
Numeral 4	Multa General tipo 3.
Numeral 5	Multa General tipo 4; Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
Numeral 6	Amonestación.
Numeral 7	Amonestación; Multa General tipo 1
Numeral 8	Multa General tipo 3
Numeral 9	Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los centros de atención en drogadicción (CAD) y servicios de farmacodependencia a que se refiere la Ley 1566 de 2012.
Numeral 10	Multa General tipo 3; Destrucción de bien.

Artículo 7°. Corrijase el artículo 60 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 60. Definición de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.** Las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas son aquellas que de acuerdo con variables tales como: aforo, tipo de evento, clasificación de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la reunión, den lugar a riesgos de afectación a la comunidad o a los bienes, generando una alta afectación de la dinámica normal del municipio, distrito o del área específica en que se realizan, y que por ello requieren condiciones especiales para su desarrollo, determinadas por el Gobierno Nacional de conformidad con el parágrafo del artículo 47 del presente Código.

Parágrafo 1°. Toda actividad que involucra la aglomeración de público compleja exige la emisión de un permiso, por parte del alcalde o su delegado. El permiso para el desarrollo de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en escenarios habilitados o no habilitados se concederá previo cumplimiento de los requisitos y las normas vigentes para cada tipo de escenario.

Parágrafo 2°. Para los fines del presente artículo, se entenderá que no procede el otorgamiento del permiso ni la realización de la reunión en áreas de espacio público protegidas, reservadas o determinadas por los concejos municipales o distritales competentes.”

Artículo 8°. Corríjase el artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica.** Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:

1. Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos o contrariando las normas vigentes.
2. No presentar el comprobante de pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor.
3. No comunicar previamente de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o subestación de policía de la jurisdicción, a fin de facilitar posteriormente su labor de convivencia, de acuerdo al procedimiento que para tal fin se establezca.
4. Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.
5. Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro mercantil.
6. Permitir el ingreso de personas o elementos en un número superior a la capacidad del lugar.
7. Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender, comercializar, distribuir, exhibir, o publicar textos, imágenes, documentos, o archivos audiovisuales de contenido pornográfico a menores de dieciocho (18) años.
8. Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.
9. Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.
10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público.
11. Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes.
12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación.
13. Instalar servicios eléctricos, hidráulicos u otros especiales, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios públicos respectiva.
14. Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando las normas sobre el uso del suelo.
15. Cuando en el término de dos (2) años y en diferentes hechos, se incurra en dos o más comportamientos contrarios a la convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa o se repita dicho comportamiento contrario en alguna de ellas.
16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
17. Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito, sin la debida autorización, habilitación o reconocimiento por parte de las autoridades o entidades competentes.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en los numerales 7 y 11, se impondrán las medidas correctivas y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen o modifiquen.

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa General tipo 2; Destrucción de bien; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 2	Multa General tipo 3; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3	Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 4	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 5	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 6	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 7	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 8	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 9	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad; Destrucción de bien.
Numeral 10	Multa General tipo 2; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 11	Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de la actividad.
Numeral 12	Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de actividad.
Numeral 13	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 14	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 15	Suspensión definitiva de actividad.
Numeral 16	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 17	Multa General tipo 4; Suspensión definitiva de actividad.

Parágrafo 3°. Se mantendrá la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se modifique o cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.

Parágrafo 4°. Las medidas correctivas mencionadas para el incumplimiento de los anteriores comportamientos, se aplicarán, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial que regula esas materias.

Parágrafo 5°. Cuando se aplique la medida de suspensión temporal de actividad porque el responsable del establecimiento no permitió el ingreso de autoridades de policía, la medida se extenderá hasta tanto se autorice el ingreso de la autoridad que en ejercicio de su función o actividad de policía, requiera hacerlo.

Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente

artículo que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad”.

Artículo 9°. Corrija-se el artículo 115 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 115. Comportamientos contrarios a la protección y conservación del patrimonio cultural.** Además de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, los siguientes comportamientos atentan contra el patrimonio cultural y por lo tanto no deben efectuarse:

1. No dar aviso inmediato a las autoridades del hallazgo de bienes del patrimonio arqueológico o no dar aviso sobre bienes de interés cultural y patrimonio cultural adquiridos ilícitamente por terceros, de conformidad con las normas sobre la materia.
2. Incumplir las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural de acuerdo con las leyes nacionales y los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) aprobados por el Ministerio de Cultura o la autoridad competente, normas que son de superior jerarquía a los Planes de Ordenamiento Territorial.
3. Intervenir, en los términos establecidos por el numeral segundo del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico, sin la respectiva licencia o autorización de la autoridad que hubiere efectuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración de personal autorizado para ello.
4. Destruir, dañar, dar utilización ilícita o explotación ilegal a bienes materiales de interés cultural.
5. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de la autoridad cultural competente, sustraerlos, disimularlos u ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización de exportación temporal.
6. Llevar a cabo, permitir o facilitar exploraciones, excavaciones o cualquier tipo de intervención de bienes arqueológicos sin la autorización requerida para ello.
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de adecuado mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor o propietario de un inmueble o mueble declarado como Bien de Interés Cultural, de tal forma que esto lleve a un deterioro de la estructura del inmueble y puesta en riesgo de los valores culturales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.

Parágrafo 1°. La autoridad de policía que conozca la situación remitirá el caso a la autoridad cultural que haya realizado la declaratoria de Bien de Interés Cultural, la cual impondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o modifiquen, y sus Decretos Reglamentarios.

Parágrafo 2°. Frente a los comportamientos en que se vean involucrados bienes arqueológicos, la autoridad de policía que conozca de la situación remitirá el caso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que impondrá y ejecutará las medidas establecidas en las normas vigentes que regulan la materia, las que las adicionen o modifiquen, y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 3°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de las medidas establecidas en la normatividad específica:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 2	Suspensión temporal de actividad.
Numeral 3	Suspensión temporal de actividad y Multa General tipo 2.
Numeral 4	Suspensión temporal de actividad; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia; Multa General tipo 4.
Numeral 5	Decomiso; Suspensión temporal de actividad y Multa General tipo 2.
Numeral 6	Suspensión temporal de actividad; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia; Multa General tipo 2.
Numeral 7	Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.

“.

Artículo 10. Corrija-se el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.** Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada:

A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:

1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos.
2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.
3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público.
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.

B) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:

5. Demoler sin previa autorización o licencia.
6. Intervenir o modificar sin la licencia.
7. Incumplir las obligaciones para su adecuada conservación.
8. Realizar acciones que puedan generar impactos negativos en el bien de interés cultural, tales como intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, intervenciones en las zonas de influencia y/o en los contextos del inmueble que puedan afectar las características y los valores culturales por los cuales los inmuebles se declararon como bien de interés cultural.

C) Usar o destinar un inmueble a:

9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.

10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.

11. Contravenir los usos específicos del suelo.

12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con desconocimiento de las normas urbanísticas sobre usos específicos.

D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:

13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.

14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.

15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.

16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.

17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.

18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.

19. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso de cascos e implementos de seguridad industrial y contar con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias de acuerdo con esta ley.

20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.

21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.

22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.

23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.

24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de construcciones en terrenos no aptos o sin previa licencia, se impondrán de inmediato la medida de suspensión de construcción o demolición, y se solicitará a las empresas de servicios públicos domiciliarios la suspensión de los servicios correspondientes si no hubiese habitación.

Parágrafo 2°. Cuando se realice actuación urbanística sin previa licencia en predios aptos para estos menesteres, sin perjuicio de la medida de multa y de la suspensión temporal de la obra, se concederá un término de sesenta (60) días para que el infractor solicite el reconocimiento de la construcción ante la autoridad competente del distrito o municipio; si pasado este término no presenta licencia de reconocimiento, no podrá reanudar la obra y se duplicará el valor de la multa impuesta.

Parágrafo 3°. Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización; en el caso de bienes de interés cultural las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el artículo 26 de la Resolución número 0983 de 2010 emanada por el Ministerio de Cultura o la norma que la modifique o sustituya.

Parágrafo 4°. En el caso de demolición o intervención de los bienes de interés cultural, de uno colindante, uno ubicado en su área de influencia o un bien arqueológico, previo a la expedición de la licencia, se deberá solicitar la autorización de intervención de la autoridad competente.

Parágrafo 5°. Cuando el infractor incumple la orden de demolición, mantenimiento o reconstrucción, una vez agotados todos los medios de ejecución posibles, la administración realizará la actuación urbanística omitida a costa del infractor.

Parágrafo 6°. Para los casos que se generen con base en los numerales 5 al 8, la autoridad de policía deberá tomar las medidas correctivas necesarias para hacer cesar la afectación al bien de Interés Cultural y remitir el caso a la autoridad cultural que lo declaró como tal, para que esta tome y ejecute las medidas correctivas pertinentes de acuerdo al procedimiento y medidas establecidas en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008. La medida correctiva aplicada por la autoridad de policía se mantendrá hasta tanto la autoridad cultural competente resuelva de fondo el asunto.

Parágrafo 7°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1	Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de bienes.
Numeral 2	Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de bienes.
Numeral 3	Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de bienes.
Numeral 4	Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de bienes.



COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 5	Multa especial por infracción urbanística; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 6	Multa especial por infracción urbanística; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 7	Multa especial por infracción urbanística; Suspensión temporal de actividad.
Numeral 8	Multa especial por infracción urbanística; Suspensión temporal de la actividad.
Numeral 9	Multa especial por infracción urbanística; Suspensión definitiva de la actividad.
Numeral 10	Multa especial por infracción urbanística; Suspensión definitiva de la actividad.
Numeral 11	Multa especial por infracción urbanística; Suspensión definitiva de la actividad.
Numeral 12	Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 13	Suspensión de construcción o demolición.
Numeral 14	Suspensión de construcción o demolición.
Numeral 15	Suspensión de construcción o demolición.
Numeral 16	Suspensión de construcción o demolición.
Numeral 17	Suspensión de construcción o demolición.
Numeral 18	Suspensión de construcción o demolición; Remoción de bienes.
Numeral 19	Suspensión de construcción o demolición.
Numeral 20	Suspensión de construcción o demolición.
Numeral 21	Suspensión de construcción o demolición.
Numeral 22	Suspensión de construcción o demolición; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o muebles.
Numeral 23	Suspensión de construcción o demolición; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o muebles.
Numeral 24	Suspensión de construcción o demolición.

”.

Artículo 11. Corríjase el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

**“Artículo 140. *Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.***

Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse:

1. Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado.
2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente.
3. Alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura.
4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.
5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o de uso público o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes.
6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente.
7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.
8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público.
9. Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.
10. Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades.
11. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.
12. Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.

Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden ocupar de manera temporal el espacio público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el respeto de las calidades ambientales y paisajísticas del lugar, y la respectiva licencia de intervención expedida por la autoridad competente.

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR DE MANERA GENERAL
Numeral 1	Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 2	Multa General tipo 3.
Numeral 3	Multa General tipo 4; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles.
Numeral 4	Multa General tipo 1.

COMPORTAMIENTOS	MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR DE MANERA GENERAL
Numeral 5	Multa General tipo 3; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 6	Multa General tipo 4; Remoción de bienes.
Numeral 7	Multa General tipo 2; Destrucción de bien. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Farmacodependencia a que se refiere la Ley 1566 de 2012.
Numeral 8	Multa General tipo 2; Destrucción de bien.
Numeral 9	Multa General tipo 2; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
Numeral 10	Multa General tipo 4.
Numeral 11	Multa General tipo 4; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
Numeral 12	Multa especial por contaminación visual; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de bienes; Destrucción de bien.

Parágrafo 3°. Cuando el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se refiere el numeral 4 del presente artículo, se realice dos (2) veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.

Parágrafo 4°. En relación con el numeral 9 del presente artículo bajo ninguna circunstancia el ejercicio del grafiti, justificará por sí solo, el uso de la fuerza, ni la incautación de los instrumentos para su realización.”

Artículo 12. Corríjase el artículo 173 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

**“Artículo 173. *Las medidas correctivas.*** Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este Código por las autoridades de policía, son las siguientes:

1. Amonestación.
2. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas.
4. Expulsión de domicilio.
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas.
6. Decomiso.
7. Multa General o Especial.
8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.
9. Remoción de bienes.
10. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles.
11. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles o muebles.
12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales.
13. Restitución y protección de bienes inmuebles.
14. Destrucción de bien.
15. Demolición de obra.
16. Suspensión de construcción o demolición.
17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
18. Suspensión temporal de actividad.
19. Suspensión definitiva de actividad.
20. Inutilización de bienes.”

Artículo 13. Corríjase el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

**“Artículo 180. *Multas.*** Es la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y el costo del cobro coactivo.

Las multas se clasifican en generales y especiales.

Las multas generales se clasifican de la siguiente manera:

Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Las multas especiales son de tres tipos:

1. Comportamientos de los organizadores de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.
2. Infracción urbanística.
3. Contaminación visual.

**Parágrafo.** Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto dispongan las administraciones distritales y municipales, y se destinarán a proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así como al cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las autoridades de policía cuando su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma.

En todo caso, mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad.

Cuando los Uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposición de multa general, impondrán orden de comparendo al infractor, evidenciando el hecho.

Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual constituye un descuento por pronto pago.

A cambio del pago de la Multa General tipos 1 y 2 la persona podrá, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del comparendo, solicitar a la autoridad de policía que se conmute la multa por la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

Si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo o con el cumplimiento de la medida de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, cuando este aplique, podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código.

Una vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente deberá reportar la existencia de la deuda al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y así mismo deberá reportar el pago de la deuda.

La administración distrital o municipal podrá reglamentar la imposición de la medida correctiva de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia para los comportamientos contrarios a la convivencia que admitan Multa tipos 1 y 2, en reemplazo de la multa.

**Parágrafo transitorio.** Durante el primer año de vigencia de la presente ley, las personas a las que se les imponga una Multa General tipos 3 o 4 podrán obtener un descuento adicional al previsto por el pronto pago de la multa, en un porcentaje del veinticinco por ciento (25%) de su valor total, siempre y cuando soliciten a la autoridad de policía competente que se les permita participar en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del comparendo”.

Artículo 14. Corríjase el artículo 209 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

**“Artículo 209. Atribuciones de los comandantes de estación, subestación, centros de atención inmediata de la Policía Nacional.** Compete a los comandantes de estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional o, sus delegados, conocer:

1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas:
  - a) Amonestación;
  - b) Remoción de bienes;
  - c) Inutilización de bienes;
  - d) Destrucción de bien;
  - e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas;
  - f) Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
3. Conocer en primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal de la actividad”.

Artículo 15. Corríjase el artículo 210 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

**“Artículo 210. Atribuciones del personal uniformado de la Policía Nacional.** Compete al personal uniformado de la Policía Nacional, conocer:

1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en primera instancia la aplicación de las siguientes medidas de conformidad con el proceso verbal inmediato de policía contenido en el presente Código:
  - a) Amonestación;
  - b) Participación en Programa Comunitario o Actividad Pedagógica de Convivencia;
  - c) Remoción de Bienes;
  - d) Inutilización de Bienes;
  - e) Destrucción de bien.

**Parágrafo 1°.** La participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia será organizada y realizada por las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delegados, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin, establezca el Gobierno nacional.

**Parágrafo 2°.** Contra las medidas previstas en este artículo se concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo que resolverá un inspector de policía”.

Artículo 16. Corríjase el artículo 236 de la Ley 1801 de 2016, el cual quedará así:

**“Artículo 236. Programa de educación y promoción del Código.** El Gobierno nacional, a través de las autoridades competentes, deberá diseñar programas, actividades y campañas de promoción en todo el territorio nacional, de las disposiciones más relevantes contenidas en el presente Código, especialmente de los comportamientos contrarios a la convivencia y las consecuencias que se derivan de su realización, con el fin de que la ciudadanía conozca y se actualice en torno a los aspectos trascendentales de esta ley.

Así mismo deberá adelantar jornadas de capacitación y formación del nuevo Código de Policía y Convivencia a las autoridades de policía, a partir de su promulgación.

De igual forma, a través del Ministerio de Educación, desarrollará programas para el fomento de competencias que fortalezcan la cultura ciudadana y la convivencia, así como el respeto por las normas y las autoridades, en concordancia con los lineamientos definidos en la Ley 1013 de 2006 y la Ley 1732 de 2014.

Estos programas serán implementados por las Instituciones Educativas en el marco de su autonomía escolar y su contenido”.

Artículo 17. Publíquese en el *Diario Oficial* la Ley 1801 de 2016, con la corrección que se establece en el presente decreto.

Artículo 18. *Vigencia.* El presente decreto se entiende incorporado a la Ley 1801 de 2016 y rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

*Juan Fernando Cristo Bustos.*

El Ministro de Justicia y del Derecho,

*Enrique Gil Botero.*

El Ministro de Defensa Nacional,

*Luis C. Villegas Echeverri.*

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

### RESOLUCIONES

#### RESOLUCIÓN NÚMERO 000069 DE 2017

(marzo 28)

*por la cual se modifica el literal c) del artículo 1° de la Resolución número 278 de 24 de noviembre de 2016 que reglamenta y administra para el año 2017 los contingentes de importación para carne de bovino establecidos para el séptimo año calendario en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y República de Colombia.*

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 1363 de 2009, el Decreto número 185 de 2012, y

#### CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 185 de 30 de enero de 2012, se da cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá.

Que la Sección C del Decreto número 185 del 30 de enero de 2012, señaló los contingentes arancelarios para cada año establecidos en el Programa de Desgravación para las importaciones de los productos agrícolas originarios de Canadá, los cuales serán reglamentados y administrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), de conformidad con el artículo 57 del mismo cuerpo normativo.

Que mediante Resolución número 278 del 24 de noviembre de 2016 se reglamentaron para el año 2017 los contingentes de importación para carne de bovino establecidos para el séptimo año calendario en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, y su Decreto Reglamentario número 185 de 2012.

Que mediante el Decreto número 228 de 14 de febrero de 2017 se corrigió un yerro en los artículos 49 y 52 del Decreto número 185 del 30 de enero de 2012, en el sentido de corregir el texto en español del título del párrafo 3 de la subsección “iii Contingentes Arancelarios” de la “Sección C - Lista Arancelaria de Colombia para Mercancías Agrícolas” del “Anexo 203 Eliminación Arancelaria” del Acuerdo por cuanto se leía como “Carne de Bovino – Despojos” cuando lo correcto era “Despojos y Visceras Comestibles”.

Que teniendo en cuenta la modificación realizada por el Decreto número 228 de 2017, es necesario que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural modifique el literal c) del artículo 1° de la Resolución número 278 de 2016.

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase el literal c) del artículo 1° de la Resolución número 278 de 24 de noviembre de 2016, el cual quedará así:

“c) Contingente de importación de dos mil sesenta y cinco (2.065) toneladas métricas de Despojos y Visceras Comestibles clasificado por las líneas arancelarias 0206100000, 0206210000, 0206220000, 0206290000, 0504001000, 0504002000, 0504003000”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2017.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

*Aurelio Iragorri Valencia.*

(C. F.).

## MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

### DECRETOS

#### DECRETO NÚMERO 546 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se modifica el Decreto 1429 de 2016.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, y



CONSIDERANDO:

Que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) - ADRES y dispuso que los gastos requeridos para el desarrollo de su objeto se financiarán con un porcentaje de hasta el cero coma cinco por ciento (0,5%) de los recursos administrados con situación de fondos;

Que en desarrollo del precitado artículo, se expidió el Decreto 1429 de 2016 que define la estructura interna, funciones y régimen de transición respecto al inicio de actividades de la ADRES;

Que los artículos 21, 22 y 24 *ibídem*, consagraron el periodo de transición para el inicio de funciones de la ADRES como administradora de los recursos del SGSSS, la terminación de las funciones de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social y la subrogación de contratos y convenios a la nueva entidad administradora, respectivamente;

Que el parágrafo del artículo 23 del citado decreto establece que el Ministerio de Salud y Protección Social “(...) *apoyará la gestión y los trámites legales, contractuales, administrativos y financieros, suministrando el soporte técnico, logístico y el que sea necesario para la organización y puesta en funcionamiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)*”;

Que en tal sentido, los procesos de recaudo, reconocimiento y pago que contempla la administración de los recursos del SGSSS, para garantizar el flujo de recursos en forma debida, oportuna y segura, requieren una infraestructura robusta y procedimientos tecnológicos y funcionales de gran complejidad por el volumen, tamaño y plazos de cumplimiento de las diferentes operaciones, por lo que se requiere disponer de la infraestructura tecnológica necesaria para que la ADRES pueda iniciar las actividades de alistamiento, adecuación e integración de los aplicativos del sistema de información del Fosyga;

Que en razón a que se requiere contar con la infraestructura física y tecnológica necesaria para el adecuado funcionamiento de la ADRES, es preciso financiar con cargo a los recursos del rubro de apoyo técnico del Fosyga, las contrataciones requeridas, los cuales computarán como parte del cero coma cinco por ciento (0.5%) de los recursos de que trata el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 y modificar los plazos previstos para dar inicio a su operación;

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 21 del Decreto 1429 de 2016, el cual quedará así:  
**“Artículo 21. Período de transición.** *La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), asumirá la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a partir del 1° de agosto de 2017.*

*Desde la publicación del presente decreto y hasta la fecha señalada, la Entidad deberá realizar las acciones necesarias para asumir las citadas funciones”.*

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 22 del Decreto 1429 de 2016, el cual quedará así:  
**“Artículo 22. Terminación de las funciones.** *La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social continuará adelantando las funciones establecidas en el Decreto-ley 4107 de 2011, hasta el 31 de julio de 2017”.*

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 23 del Decreto 1429 de 2016, el cual quedará así:  
**“Artículo 23. Disponibilidad presupuestal.** *La disponibilidad presupuestal para proveer los cargos de Director General y Director Administrativo y Financiero de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), será expedida por la Coordinadora de Presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos de la Unidad Ejecutora que se incorpore dentro del presupuesto del Ministerio, en virtud del artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 2.8.1.5.2 del Decreto 1068 de 2015, para la ejecución de los recursos que se deben transferir a la ADRES. Una vez se haya posesionado el Director General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), deberá adelantar los trámites presupuestales requeridos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Confis para la aprobación del presupuesto con el cual ejecutará los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación para la organización de dicha Entidad; solo en este caso la aprobación del presupuesto no requerirá aprobación de la Junta Directiva.*

**Parágrafo 1°.** *El Ministerio de Salud y Protección Social apoyará la gestión y los trámites legales, contractuales, administrativos y financieros, suministrando el soporte técnico, logístico y el que sea necesario para la organización y puesta en funcionamiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).*

**Parágrafo 2°.** *La financiación de la contratación de la infraestructura tecnológica y los demás gastos requeridos para desarrollar el objeto de la entidad, se podrá realizar con cargo a los recursos del rubro de apoyo técnico del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Para tal efecto, la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, adelantará los procesos de contratación requeridos para tal fin, previo visto bueno del Director General y del Director Administrativo y Financiero de ADRES.*

*Los recursos destinados para dicho propósito, computarán como parte del cero coma cinco por ciento (0,5%) de que trata el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 destinados a desarrollar el objeto de la ADRES”.*

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 24 del Decreto 1429 de 2016, el cual quedará así:

**“Artículo 24. Contratos y convenios vigentes.** *Los contratos y convenios celebrados por la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social vigentes al 1° de agosto de 2017 y cuyo objeto corresponda a las funciones y actividades propias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), se entienden subrogados a esta, la cual continuará con su ejecución en los mismos términos y condiciones, sin que para ello sea necesaria la suscripción de documento adicional alguno. (...)”.*

Artículo 5°. *Vigencia y derogatorias.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica los artículos 21, 22, 23 y 24 del Decreto 1429 de 2016.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

*Mauricio Cárdenas Santamaría.*

El Ministro de Salud y Protección Social,

*Alejandro Gaviria Uribe.*

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

*Liliana Caballero Durán.*

DECRETO NÚMERO 547 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se modifica el Decreto 1432 de 2016 modificado por el Decreto 2188 de 2016.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1432 de 2016 se modificó la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social, estableciendo, entre otros aspectos, la fecha de entrada en funcionamiento de la ADRES y la consecuente fecha límite de funcionamiento de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social;

Que mediante Decreto 2188 de 2016 se modificó el parágrafo transitorio del artículo 5° del Decreto 1432 de 2016, en el sentido de ampliar hasta el 31 de marzo de 2017, la fecha hasta la cual la citada Dirección ejercería sus funciones;

Que se hace necesario modificar el artículo 5° del Decreto 1432 de 2016, modificado por el Decreto 2188 de 2016, con el fin de adecuarlo a la fecha de inicio de operaciones de la ADRES, así como la disposición relativa a la fecha límite de funcionamiento de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social;

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 5° del Decreto 1432 de 2016, modificado por el Decreto 2188 de 2016, el cual quedará así:

**“Parágrafo transitorio.** *La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social continuará ejerciendo las funciones señaladas en el Decreto 4107 de 2011 hasta el 31 de julio de 2017”.*

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el artículo 5° del Decreto 1432 de 2016.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

*Mauricio Cárdenas Santamaría.*

El Ministro de Salud y Protección Social,

*Alejandro Gaviria Uribe.*

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

*Liliana Caballero Durán.*

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 000926 DE 2017

(marzo 30)

*por la cual se reglamenta el desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas.*

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el artículo 67 de la Ley 1438 de 2011 y en desarrollo del numeral 6 del artículo 2° y el numeral 11 del artículo 6° del Decreto-ley número 4107 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el Sistema de Emergencias Médicas, establecido mediante el artículo 67 de la Ley 1438 de 2011, busca la articulación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar la respuesta oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismo o paro cardiorrespiratorio que requieran atención médica de urgencias.

Que el artículo 2° de la Ley 1523 de 2012 “*por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones*”, dispone que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y, en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud dispuso, en su artículo 14, que para efecto de acceder a servicios y tecnologías de salud, no se requerirá de ningún tipo de autorización administrativa entre el

prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de urgencias.

Que a su vez, el artículo 10 de la misma norma contempla el deber de los ciudadanos de actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas como extensión del deber constitucional de solidaridad contenido en el artículo 95, numeral 2.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, corresponde a las entidades territoriales la dirección del sector salud en el ámbito de su jurisdicción.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.5.3.2.17 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, corresponde a las direcciones territoriales de salud regular los servicios de urgencias de la población de su territorio y coordinar la atención en salud de la población afectada por emergencias o desastres en su área de influencia, así mismo señala, que el “*Ministerio de Salud y Protección Social establecerá las condiciones y requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias y Desastres (CRUE)*”.

Que en la Sexagésima Asamblea Mundial de la Salud, realizada entre el 14 y el 23 de mayo de 2007, a través de la Resolución WHA60.22, se insta a los Estados Miembros, “(...) 2) a que velen por que los ministerios de salud participen en la revisión y el fortalecimiento de la prestación de atención traumatológica y de emergencia, y que a ese efecto se disponga de un mecanismo de coordinación intersectorial”; y “3) que consideren el establecimiento de sistemas institucionales e integrados de atención traumatológica y de emergencia (...)”.

Que de otro lado, el Decreto número 2434 de 2015, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias define, en el artículo 2.2.14.1.3, al Centro de Atención de Emergencias (CAE), como el medio de recepción de llamadas, a través del número único nacional de emergencias, de mensajes o de cualquier tipo de comunicación que utilizan los individuos para requerir ayuda en situaciones de emergencias y seguridad ciudadana y que se encarga de realizar el direccionamiento a la entidad responsable de atender la solicitud.

Que en el mismo sentido, el artículo 2.2.14.2.5 del mencionado decreto establece que el CAE se pondrá en contacto con las entidades correspondientes, como la Policía, Bomberos, Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE), Oficinas de Gestión del Riesgo, entre otros, para iniciar la atención que requiera el individuo solicitante.

Que los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), reglamentados por la Resolución número 1220 de 2010, hacen parte de la Red Nacional de Urgencias y son apoyo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y dentro de sus funciones se encuentra el articular con el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE), y organizar los servicios de atención prehospitalaria del territorio.

Que el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, adoptado por la Resolución número 1841 de 2013, en la dimensión salud pública en emergencias y desastres establece, como una de sus metas en el componente de respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y desastres, la implementación del Sistema de Emergencias Médicas en el país.

Que el Título V de la Resolución 6408 de 2016, incluye en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, el traslado acuático, aéreo y terrestre en caso de movilización de pacientes con patología de urgencias desde el sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades móviles, así como el traslado entre IPS bajo las condiciones allí previstas.

Que a través de la Resolución número 1441 de 2016 de este Ministerio, se establecen los estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de las Redes integrales de Prestadores de Servicios de Salud incluidas las redes de urgencias.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Circular número 015 de 2016, instruyó en torno a la gestión de la atención de accidentes de tránsito para cada uno de los integrantes que intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y, por su parte, la Resolución 2273 de 2014 del Ministerio de Transporte adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021.

Que en consecuencia, se requiere reglamentar el desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en Colombia, a fin de articular las diferentes normas que tienen que ver con la materia y garantizar una respuesta oportuna y efectiva a las situaciones de urgencia que se presenten en el territorio nacional.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Aspectos generales

Artículo 1°. *Objeto*. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en Colombia.

Artículo 2°. *Campo de aplicación*. Las disposiciones contenidas en la presente resolución son aplicables a las entidades territoriales, a los prestadores de servicios de salud –a las entidades– responsables de pago de servicios de salud y a los primeros respondientes.

Artículo 3°. *Sistema de Emergencias Médicas (SEM)*. El SEM es un modelo general integrado, cuya estructura se define en el artículo 7° de la presente resolución, con el propósito de responder de manera oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios, que requieran atención médica de urgencias, en lugares públicos o privados. Comprende, entre otros, los mecanismos para notificar las emergencias médicas, la actuación del primer respondiente, la prestación de servicios prehospitalarios y de urgencias, las modalidades de transporte básico y medicalizado, la atención hospitalaria, el trabajo de los centros reguladores de urgencias y emergencias, los programas educacionales y los procesos de vigilancia y que será financiado entre otros con los recursos del Programa Institucional de Fortalecimiento de la Red Nacional de urgencias.

Artículo 4°. *Implementación*. Los distritos, los municipios de categoría especial y de primera categoría y el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa

Catalina deberán implementar el SEM en el territorio de su jurisdicción, teniendo en cuenta el análisis de situación de salud, los antecedentes de emergencias y desastres y las condiciones geográficas particulares para lo cual podrán, de manera autónoma, constituir un Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) o suscribir convenios con el departamento para tal fin.

Parágrafo 1°. Las áreas metropolitanas y los municipios de categorías diferentes a las señaladas en el presente artículo podrán, de manera independiente o asociados con otros municipios, implementar un SEM en su territorio. En este caso, estarán facultados, con autorización del departamento de su jurisdicción, para constituir Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) o suscribir convenios con el departamento para tal fin.

Parágrafo 2°. En cualquier caso, la creación de los CRUE propenderá por una articulación técnica y operativa eficiente con el CRUE departamental.

Artículo 5°. *Principios*. La prestación de los servicios relacionados con el SEM deberá realizarse con sujeción a los principios propios al derecho fundamental a la salud, contenidos en el artículo 6° de la Ley 1751 de 2015 y los previstos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de que trata el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011.

CAPÍTULO II

Estructura y funciones del SEM

Artículo 6°. *Objetivo del SEM*. El SEM tiene como objetivo responder de manera oportuna y eficiente las veinticuatro (24) horas del día y siete (7) días a la semana, a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios, que requieran atención médica de urgencias.

Artículo 7°. *Estructura del SEM*. El SEM está estructurado por unos órganos de direccionamiento, de coordinación no asistencial y operadores asistenciales.

Artículo 8°. *Direccionamiento*. El direccionamiento estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo del Comité Nacional de Urgencias, como responsable de la orientación de los SEM hacia el cumplimiento de su objetivo.

Artículo 9°. *Coordinación no asistencial*. La coordinación y operación no asistencial del SEM está en cabeza de la entidad territorial, a través del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) del territorio de su jurisdicción y tendrá como funciones, además de las previstas en la normatividad vigente, las siguientes:

1. Garantizar la articulación del CRUE con el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE) o aquel que cumpla sus funciones.
2. Articular a los integrantes del SEM ante situaciones de emergencia o desastre en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
3. Promover programas de educación a la comunidad como primeros respondientes comunitarios ante emergencias; para tal fin, la entidad territorial podrá establecer alianzas con las demás entidades del Sistema Nacional Gestión del Riesgo de Desastres o con la empresa privada.
4. Reportar a este Ministerio la información que se requiera a través de los mecanismos que para el efecto se definan.

Parágrafo. Las entidades territoriales emitirán los actos administrativos respectivos para la implementación del SEM en su jurisdicción y en general para el cumplimiento de las funciones aquí señaladas.

Artículo 10. *Operadores asistenciales*. Los prestadores de servicios de salud son los encargados de brindar atención de urgencias, de manera oportuna, eficiente y con calidad, a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios. Para tal efecto, tendrán adicionalmente las siguientes funciones dentro del SEM:

1. Responder a las necesidades de atención en salud de la población afectada por situaciones de urgencia, emergencia o desastre, incluida la atención prehospitalaria, transporte básico y medicalizado de pacientes, atención de urgencias y hospitalaria.
2. Promover la formación y capacitación del talento humano para cubrir las necesidades del SEM.
3. Apoyar los procesos de vigilancia epidemiológica.
4. Reportar a este Ministerio la información que se requiera a través de los mecanismos que para el efecto se definan.

Parágrafo. Los operadores asistenciales no podrán aducir la responsabilidad de otra entidad para sustraerse de sus obligaciones o negar la atención objeto de la presente resolución.

CAPÍTULO III

Componentes del SEM

Artículo 11. *Componentes de los SEM*. Son componentes operativos del SEM, los siguientes:

1. Notificación y acceso al sistema.
2. Coordinación y gestión de las solicitudes.
3. Atención prehospitalaria y traslado de pacientes.
4. Atención de urgencias y hospitalaria.
5. Educación a la comunidad e implementación de programas de Primer Respondiente.
6. Investigación y vigilancia epidemiológica.
7. Formación del talento humano requerido.

Artículo 12. *Notificación y acceso al sistema*. El acceso al SEM por parte de la comunidad se hará a través de la línea 123 - Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE), donde esté implementada, para lo cual la entidad territorial deberá adelantar los trámites necesarios que garanticen la articulación del CRUE con el NUSE. En los casos donde el NUSE no opere, la notificación se podrá hacer a través de un medio de comunicación gratuito, de fácil acceso y recordación para la comunidad.

Parágrafo. Toda llamada o solicitud recibida deberá ser atendida, clasificada y registrada, con el seguimiento correspondiente. Con este registro, el CRUE realizará el despacho del recurso requerido.



Artículo 13. *Primer respondiente.* Es la persona capacitada que en forma solidaria decide participar en la atención inicial de alguien que ha sufrido una alteración de la integridad física y/o mental, puede o no ser un profesional de la salud. Activará el SEM, apoyará en la valoración de los riesgos asociados al evento y brindará ayuda inicial al afectado.

Artículo 14. *Coordinación y gestión de las solicitudes.* Será responsabilidad de los CRUE coordinar y gestionar la respuesta en salud requerida, según el caso, para la atención de las situaciones de urgencia, emergencia o desastre reportadas por la comunidad o por las autoridades.

Parágrafo 1°. Los pacientes atendidos por el SEM deberán ser trasladados a la institución apropiada y con la oportunidad requerida según las condiciones de salud de la persona, acorde con el direccionamiento del CRUE.

Parágrafo 2°. El CRUE asignará un código de registro al servicio de atención prehospitalaria o de transporte asistencial designado para realizar la atención. El registro, además de un número consecutivo, deberá incluir la identificación del paciente, la hora de recepción y despacho, la identificación del vehículo despachado, la hora de llegada a la escena, el lugar donde se solicitó trasladar el paciente y la hora de recepción por parte de la institución hospitalaria. Para tal efecto el prestador deberá proporcionar la información en forma inmediata al terminar el servicio.

Parágrafo 3°. Las IPS receptoras de un paciente garantizarán su admisión en el menor tiempo posible de conformidad con la normatividad vigente sobre el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias-triage.

Artículo 15. *Organización de la atención.* La entidad territorial de salud gestionará la prestación del servicio de atención prehospitalaria y transporte asistencial de pacientes en su jurisdicción, para lo cual deberá definir las formas de organización, disponibilidad y ubicación de los vehículos que operen en el SEM.

Parágrafo. Todas las ambulancias y vehículos de atención prehospitalaria deberán responder a las situaciones de urgencia, emergencia o desastre, conforme con las directrices que emita el CRUE.

Artículo 16. *Atención prehospitalaria y traslado de pacientes.* La atención prehospitalaria y el traslado de los pacientes desde el sitio de ocurrencia del evento, deberá ser realizado por prestadores de servicios de salud habilitados.

Parágrafo. Todos los vehículos que presten los servicios de atención prehospitalaria y transporte asistencial de pacientes deberán contar con un sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE.

Artículo 17. *Gestión de la atención de urgencias y hospitalaria.* Los servicios de urgencias y hospitalarios deberán coordinarse de manera efectiva con los CRUE, atendiendo los lineamientos previstos en la Resolución número 1441 de 2016, o la norma que la modifique o sustituya y el Manual de Habilitación de las Redes Integrales de Servicios de Salud, con el fin de garantizar la continuidad e integralidad de la atención a las víctimas.

Parágrafo. Los servicios de atención prehospitalaria y transporte asistencial de pacientes deberán contar con los procedimientos de triage requeridos que les permita clasificar sus pacientes acordes con su gravedad y la complejidad del servicio de salud necesario para trasladarlos a la institución indicada en el momento oportuno.

Artículo 18. *Educación a la comunidad y formación del primer respondiente.* Las entidades territoriales desarrollarán estrategias de información, educación y comunicación a la comunidad acorde con los riesgos identificados en el territorio, sobre el uso racional de los servicios del SEM, así como la implementación de programas de formación del primer respondiente.

Artículo 19. *Formación del talento humano.* Las diferentes entidades que hacen parte del SEM, promoverán la formación de talento humano en salud acorde con las necesidades del Sistema.

Artículo 20. *Financiación del SEM.* Para la operación del sistema, la entidad territorial podrá destinar recursos propios, recursos provenientes de regalías y recursos del Sistema General de Participaciones. Así mismo, se podrá financiar la implementación del SEM con recursos del programa institucional de fortalecimiento de la Red Nacional de Urgencias.

Artículo 21. *Pago de los servicios de salud.* Los servicios de salud prestados a las víctimas de urgencias, emergencias y desastres en el marco del SEM, serán reconocidos conforme con los planes de beneficios definidos por la normatividad vigente. Para el caso de la población pobre no asegurada, su atención estará en cabeza de las entidades territoriales con cargo a los recursos del subsidio a la oferta.

Artículo 22. *Sistema de información.* El SEM contará con un sistema de información que permita integrar el registro de los datos resultantes de la gestión y operación del sistema, con el propósito de establecer indicadores de gestión, monitoreo y evaluación de resultados para el mejoramiento continuo de la calidad del SEM. El Ministerio de Salud y Protección Social determinará los estándares, tanto tecnológicos, como operativos que deberá tener dicho sistema de información. Así mismo, establecerá los indicadores que sean necesarios para su evaluación.

CAPÍTULO IV  
Disposiciones finales

Artículo 23. *Participación social.* La comunidad, a través de las diferentes formas de participación, velará por el cumplimiento de las políticas, objetivos, procesos, procedimientos y actividades que realice el SEM.

Artículo 24. *Inspección, vigilancia y control.* La inspección, vigilancia y control estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y de las entidades territoriales de salud, en el marco de sus competencias.

Parágrafo. Los prestadores y el personal de salud deben abstenerse de ofrecer beneficios en dinero o en especie de cualquier tipo a las personas naturales o jurídicas que realicen el traslado asistencial del paciente víctima de un accidente de tránsito o de otras causas, entre las distintas instituciones prestadoras de servicios de salud y/o lleven a cabo el transporte y

movilización de la víctima desde el sitio de la ocurrencia de los hechos, hasta la institución prestadora de servicios de salud a donde sea trasladada.

Artículo 25. *Plazo.* La implementación del SEM se realizará por parte de las entidades mencionadas en el artículo 4° del presente acto, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia la presente resolución.

Artículo 26. *Vigencia y derogatoria.* Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el literal c) del artículo 3° de la Resolución número 1220 de 2010.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.  
(C. F.).

CIRCULARES

CIRCULAR NÚMERO 000018 DE 2017

(marzo 29)

<b>Para:</b>	Gobernadores, Alcaldes, Secretarios Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Administradoras DGE Regímenes Especiales y de Excepción, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Puntos de Entrada, Dirección General Marítima (Dimar), Aerolíneas Nacionales e Internacionales y Comunidad en General.
<b>De:</b>	Ministro de Salud y Protección Social
<b>Asunto:</b>	Actualización a la Circular 014 de marzo 1° de 2017 “Directrices para el Control de la Fiebre Amarilla y Exigencia de Certificación Internacional o Carné Nacional de Vacunación”.

En concordancia con la alerta internacional sobre fiebre amarilla emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ante la necesidad de actualizar la situación epidemiológica mundial, el Ministerio de Salud y Protección Social determina los países a los cuales se les solicitará la certificación internacional de fiebre amarilla contemplada en el Anexo 7 del Reglamento Sanitario Internacional RSI 2005, así como se puntualizan los sitios de riesgo en el territorio nacional, previa la siguiente consideración:

Frente a la situación mundial, desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y hasta el 17 de marzo de 2017, se notificaron en Brasil 1.561 casos de fiebre amarilla, de los cuales 28,7% fueron confirmados (n=448), 16,9% fueron descartados (n=263) y 54,41% (n=850) sospechosos permanecen en investigación, y se contabilizan 264 defunciones (144 confirmadas, 10 descartadas y 110 en investigación). La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 32%.<sup>1</sup>

En Colombia, al cierre del 2016, se confirmaron 7 casos por laboratorio, de los cuales 6 fallecieron, entre ellos uno proveniente de Caballococha, Perú. La letalidad fue del 86%. A marzo 18 de 2017 no se han confirmado nuevos casos.

Bajo el contexto anteriormente mencionado, se determina que los viajeros que procedan de los países de Angola, República Democrática del Congo, Uganda y Brasil se les solicitará el Certificado Internacional de Fiebre Amarilla para el ingreso a Colombia.

Por otra parte, **se recomienda** a los viajeros (nacionales e internacionales) que se desplacen a los municipios de riesgo que a continuación se relacionan, que por lo menos 10 días previos a su viaje a los mismos, se vacunen contra la fiebre amarilla, y como medidas de protección adicional usen repelente, camisa manga larga, pantalón largo y toldillos impregnados para evitar la picadura del mosquito.

Municipios con riesgo para fiebre amarilla por circulación viral o nexos ecológico, Colombia, marzo 2017

DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS
ANTIOQUIA	Dabeiba (zona rural), Mutatá (zona rural) Turbo y Yondó.
LA GUAJIRA	Dibulla, Barrancas (zona rural de la Serranía del Perijá), Fonseca (zona rural de la Serranía del Perijá), San Juan del Cesar (zona rural de la Serranía del Perijá y de la Sierra Nevada de Santa Marta), El Molino (zona rural de la Serranía del Perijá), Villanueva (zona rural de la Serranía del Perijá), La Jagua del Pilar (zona rural de la Serranía del Perijá) y Urumita (zona rural de la Serranía del Perijá), Riohacha (zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta)
CESAR	Manauare, Balcón del Cesar (zona rural de la Serranía del Perijá), La Paz Robles (zona rural de la Serranía del Perijá), San Diego (zona rural de la Serranía del Perijá), Agustín Codazzi (zona rural de la Serranía del Perijá), Becerril (zona rural de la Serranía del Perijá), La Jagua de Ibirico (zona rural de la Serranía del Perijá), Chiriguaná (zona rural de la Serranía del Perijá), Curumaní (zona rural de la Serranía del Perijá), Pailitas (zona rural de la Serranía del Perijá) y Pelaya (zona rural de la Serranía del Perijá). Pueblo Bello, Valledupar (zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta).
CHOCÓ	Carmen del Darién, Juradó, Acandí, Riosucio, Nuquí y Unguía.
MAGDALENA	Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, Fundación, (zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta).
NORTE DE SANTANDER	Convención (zona rural), El Carmen (zona rural), El Tarra, El Zulia (zona rural), Hacarí, San Calixto, Sardinata (zona rural), Teorama y Tibú (zona rural).
META	Mapiripán, Mesetas, El Castillo, Granada, La Macarena, La Uribe, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa.

<sup>1</sup> Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica: Fiebre amarilla, 23 de marzo de 2017, Washington, D. C. OPS/OMS. 2017.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS
CASANARE	Maní (zonas rurales en las riberas del río Meta), Orocué (zonas rurales y urbanas en las riberas del río Meta), Paz de Ariporo (zonas rurales en las riberas del río Meta), San Luis de Palenque (zonas rurales en las riberas del río Meta), Monterrey, Nunchía, Trinidad (zonas rurales en las riberas del río Meta), Pore y Hato Corozal (zonas rurales en las riberas de los ríos Meta y Casanare).

Para los departamentos de **Arauca, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada** se consideran de riesgo todos los municipios.

Cabe mencionar que la exigencia del carné de vacunación contra la fiebre amarilla a la entrada de los parques nacionales, está vigente desde el año 2013.

Por último, es necesario indicar que la lista de los países a quienes se les exigirá la Certificación Internacional de Fiebre Amarilla se actualizará, dependiendo de la presencia y magnitud del brote en cada país, previa la respectiva evaluación de riesgo que Colombia realice en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2005.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2017.

El Ministro de Salud y Protección Social,

*Alejandro Gaviria Uribe.*

**(C. F.)**

## MINISTERIO DE TRABAJO

### DECRETOS

#### DECRETO NÚMERO 552 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se modifica la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y se dictan otras disposiciones.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

#### CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en la sesión del 17 de diciembre de 2014, mediante el Acta número 1510 decidió someter a la aprobación del Gobierno nacional la ampliación de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena);

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio técnico para la modificación de la planta, el cual obtuvo concepto favorable;

Que el Director de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación certifica que hay disponibilidad presupuestal para la ampliación de la planta de personal del Sena, con cargo a los proyectos de inversión “Capacitación a trabajadores y desempleados para su desempeño en actividades productivas, y asesoría y asistencia técnica empresarial, para el desarrollo social, económico y tecnológico, a través de los centros de formación del Sena” y “Crédito hipotecario para sus empleados y pago de cesantías”,

#### DECRETA:

Artículo 1°. Créanse en la planta global de empleos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), los siguientes cargos:

N° DE CARGOS	DENOMINACIÓN DEL CARGO	CÓDIGO	GRADO
PLANTA GLOBAL			
40	Profesional	2020	20
40	Profesional	2020	12
165	Profesional	2020	10
127	Profesional	2020	08
528	Profesional	2020	06
2.100	Instructor	3010	1-20

Parágrafo. El Director General distribuirá los nuevos cargos de la planta global mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta las necesidades del servicio de la entidad.

Artículo 2°. Los empleos creados en el presente decreto se proveerán de manera progresiva en las vigencias 2017, 2018 y 2019, a razón de 700 instructores y 300 profesionales anualmente.

Artículo 3°. El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), proveerá los empleos creados en el artículo 1° del presente decreto, de acuerdo a la apropiación y disponibilidad presupuestal.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente al Decreto 250 de 2004, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

*Mauricio Cárdenas Santamaría.*

La Ministra del Trabajo,

*Clara López Obregón.*

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

*Liliana Caballero Durán.*

#### DECRETO NÚMERO 553 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se crea una planta de empleos temporales en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y se dictan otras disposiciones.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, y

#### CONSIDERANDO:

Que con base en las facultades del artículo 10 de la Ley 119 de 1994, el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), decidió someter a aprobación del Gobierno nacional la modificación de la planta de personal, según consta en el Acta número 1505 del 1° de octubre de 2014;

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, el correspondiente estudio técnico de que trata el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, y los artículos 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015 “*por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*”, para efectos de crear la planta temporal de personal, el cual emitió concepto técnico favorable;

Que el Director de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación mediante Comunicado número 20174320080871 de miércoles 8 de febrero de 2017 emitió concepto favorable a solicitud de viabilidad presupuestal para la creación de planta temporal, en el marco del proyecto de inversión “Capacitación a trabajadores y desempleados para su desempeño en actividades productivas, y asesoría y asistencia técnica empresarial, para el desarrollo social, económico y tecnológico, a través de los centros de formación del Sena a nivel nacional”,

#### DECRETA:

Artículo 1°. Créanse en la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), los siguientes empleos de carácter temporal, dentro del periodo comprendido entre el 17 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

No. de cargos	Denominación	Código	Grado
565	Instructor	3010	1-20
10	Profesional	2020	20
23	Profesional	2020	19
24	Profesional	2020	18
23	Profesional	2020	17
155	Profesional	2020	15

Artículo 2°. El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), distribuirá los cargos de la planta temporal a que se refiere el presente decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de la entidad.

Artículo 3°. Los empleos de carácter temporal, creados en el presente decreto, deberán dirigirse al cumplimiento de las funciones que dieron lugar a la creación de los mismos, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, y los artículos 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015, “*por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*”.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, tiene efectos fiscales a partir del 17 de julio de 2017 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

*Mauricio Cárdenas Santamaría.*

La Ministra del Trabajo,

*Clara López Obregón.*

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

*Liliana Caballero Durán.*

## MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

### RESOLUCIONES

#### RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0250 DE 2017

(marzo 28)

*por la cual se prorroga un nombramiento provisional.*

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el artículo 1° del Decreto número 1338 del 18 de junio de 2015, y

#### CONSIDERANDO:

Que actualmente en la Planta de Personal del Ministerio de Minas y Energía existen empleos ocupados por funcionarios nombrados en provisionalidad por un término no superior a seis (6) meses.

Que el nombramiento en provisionalidad mencionado a continuación, vence el 27 de marzo de 2017:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	DEPENDENCIA
Luisa Fernanda García Vanegas	1014205270	Profesional Especializado	2028	15	Dirección de Hidrocarburos



Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 señala:

*Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera.*

Que el artículo 1° del Decreto número 4968 de 2007 establece:

*Modifícase el párrafo transitorio del artículo 8° del Decreto número 1227 de 2005, modificado por los artículos 1° de los Decretos número 3820 de 2005 y 1937 de 2007, el cual quedará así:*

(...)

*“Párrafo transitorio. **La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder 6 meses, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.** (Subraya y negrilla fuera del texto).*

Que mediante Auto de fecha 5 de mayo de 2014 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la suspensión provisional de los apartes demandados de la Circular número 005 de 2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como del artículo 1° del Decreto número 4968 de 2007.

Que sobre el particular la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la Circular número 003 del 11 de junio de 2014 manifestó: “ (...) *en virtud del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el honorable Consejo de Estado, mediante el cual se suspendió provisionalmente apartes del decreto número 4968 de 2007 y la Circular número 005 de 2012 de la CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, se informa que a partir del 12 de junio de 2014, no se otorgarán autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente (...)*”.

Que en virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar a partir del 28 de marzo de 2017 y hasta el 31 de julio de 2017, el siguiente nombramiento provisional de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	DEPENDENCIA
Luisa Fernanda García Vanegas	1014205270	Profesional Especializado	2028	15	Dirección de Hidrocarburos

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2017.

El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.  
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0251 DE 2017

(marzo 28)

por la cual se da por terminado un encargo y se hace otro.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que en la Planta de Personal del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra en vacancia temporal el siguiente empleo y es procedente proveerlo:

NÚMERO DE EMPLEOS		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO	DEPENDENCIA	TIPO DE VACANCIA	NOMBRE DEL SERVIDOR DE CARRERA TITULAR
1	Uno	Profesional Especializado	2028	17	Oficina de Control Interno	TEMPORAL	Armando Calderón Salom

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, dispone: **“El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acredítandolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente”**.

Que la Subdirección de Talento Humano, en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen con los requisitos para ser encargados en el empleo de Profesional Especializado 2028-17, de la Oficina de Control Interno, Despacho del Ministro.

Que la señora Tarcila Isabel Martínez Herazo, titular del empleo de carrera administrativa Secretario Ejecutivo 4210-16, cumple con los requisitos de la normatividad vigente para ser encargada en el empleo de Profesional Especializado 2028-17, de la Oficina de Control Interno, Despacho del Ministro.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución número 9 0766 del 6 de julio de 2015, se encargó a la señora Tarcila Isabel Martínez Herazo, identificada con cédula de ciudadanía número 64557944 de Sincelejo, en el empleo de Profesional Especializado 2028-12, de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario dar por terminado el encargo conferido mediante el artículo 2° de la Resolución 9 0766 del 6 de julio de 2015, a la señora Tarcila Isabel Martínez Herazo en el empleo de Profesional Especializado 2028-12 de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y encargarla en el empleo de Profesional Especializado 2028-17, de la Oficina de Control Interno, mientras el doctor Armando Calderón Salom, titular del empleo, se encuentre en encargo.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el encargo conferido mediante el artículo 2° de la Resolución número 9 0766 del 6 de julio de 2015, a la señora Tarcila Isabel Martínez Herazo, identificada con cédula de ciudadanía número 64557944 de Sincelejo, en el empleo de Profesional Especializado 2028-12 de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Despacho del Ministro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Artículo 2°. Encargar a la señora Tarcila Isabel Martínez Herazo, identificada con cédula de ciudadanía número 64557944 de Sincelejo, en el empleo de Profesional Especializado 2028-17, de la Oficina de Control Interno, Despacho del Ministro, mientras el doctor Armando Calderón Salom, titular del empleo, se encuentre en encargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2017.

El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.  
(C. F.).

MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 513 DE 2017

(marzo 30)

por el cual se designa un Superintendente de Industria y Comercio ad hoc.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 87 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el doctor Francisco Hernando Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, había sido designado como Superintendente de Industria y Comercio *ad hoc*, mediante Decreto 1963 del 6 de diciembre de 2016, para conocer y decidir de todos los asuntos que correspondan al procedimiento disciplinario adelantado bajo el número 15-261342 por el Grupo de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio;

Que al revisar el expediente, el doctor Reyes Villamizar presentó escrito ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el 31 de enero de 2017<sup>1</sup>, a través del cual se declaró impedido para conocer y decidir todos los asuntos referentes al procedimiento disciplinario adelantado bajo el Radicado número 15-261342 por el Grupo de Control Disciplinario Interno de esa Superintendencia, por las razones consignadas en el respectivo expediente administrativo;

Que la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, estudió la manifestación de impedimento formulada por el doctor Francisco Hernando Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, y en aplicación del artículo 84 del Código Disciplinario Único, expidió la Resolución número 0289 del 22 de febrero de 2017, por medio de la cual se aceptó el impedimento y dispuso el envío de los documentos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para la designación del funcionario *ad hoc*;

Que subsiste, en consecuencia, la necesidad de designar un superintendente de Industria y Comercio *ad hoc*, para conocer del asunto aludido, por cuanto al titular y al designado se les ha aceptado el impedimento, por lo que se designará al doctor Juan Carlos Durán Echeverry, Presidente del Fondo Nacional de Garantías, como Superintendente de Industria y Comercio *ad hoc*, para conocer y decidir de todos los asuntos que correspondan al procedimiento disciplinario adelantado bajo el número 15-261342 por el Grupo de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio,

DECRETA:

Artículo 1°. **Designar** al Doctor Juan Carlos Durán Echeverry, Presidente del Fondo Nacional de Garantías, como Superintendente de Industria y Comercio *ad hoc*, para conocer y decidir de todos los asuntos que correspondan al procedimiento disciplinario adelantado bajo el número 15-261342 por el Grupo de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.

<sup>1</sup> Con el Radicado número 1 -2017-001500.

## MINISTERIO DE CULTURA

## DECRETOS

## DECRETO NÚMERO 554 DE 2017

(marzo 30)

por el cual se modifican los artículos 2.2.1.40, 2.10.1.10, 2.10.1.16, 2.10.2.1.3, 2.10.2.5.1, 2.10.5.1.5 y 2.10.5.1.8 del Decreto 1080 de 2015 en lo referente a elección de representantes; cortometrajes nacionales; recaudo de contribución parafiscal; Comité de Clasificación de Películas y Festivales o Muestras de Cine.

El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 397 de 1997 y 814 de 2003, y

## CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1080 de 2015, Parte X, regula la actividad cinematográfica en Colombia;

Que el importante desarrollo del sector cinematográfico, a partir de la Ley 814 de 2003, requiere garantizar mejor participación de las obras locales en el mercado cinematográfico, y perseverar en el incremento de los recursos existentes, en particular los del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), instrumento parafiscal que ha tenido un crecimiento sostenido y eficiente desde su creación;

Que se requieren algunos ajustes en las referencias y contenidos del Decreto 1080 de 2015, en lo referente a la elección de representantes al Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), los cortometrajes nacionales, el recaudo de la contribución parafiscal, los requisitos para acceder al estímulo por la exhibición de cortometrajes colombianos, el Comité de Clasificación de Películas y los Festivales o Muestras de Cine;

En mérito de lo expuesto,

## DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.2.1.40 del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

**“Artículo 2.2.1.40. Criterios para la elección de representantes.** Para la elección de los representantes a que se refieren los numerales 4 al 8 del artículo 2.2.1.38 de este decreto, se tendrán en consideración los siguientes criterios generales:

1. Que los representantes a que se refieren los numerales 4 al 8 del citado artículo sean personas conocedoras del sector cinematográfico, en criterio de sus electores.

2. Que las elecciones se efectúen en forma democrática, buscando una amplia participación”.

Artículo 2°. Adiciónese un párrafo al artículo 2.2.1.43 del Decreto 1080 de 2015, con el siguiente contenido:

**“Párrafo.** Para la elección del representante de los exhibidores, los electores (exhibidores permanentes), deben estar registrados ante la Dirección de Cinematografía, explotar al menos una sala de cine, y encontrarse al día con el FDC e información obligatoria de taquilla al SIREC.

En la elección se utilizará un sistema de cociente en el que se tendrá en consideración el número de salas registradas en el año inmediatamente anterior a la elección, con el objeto de determinar sobre dicho número cuál es la participación porcentual de propiedad de cada exhibidor en el total. El voto de cada exhibidor se contabilizará por tal porcentaje, de manera que resultará elegido el candidato que sume un porcentaje mayor de las votaciones. En todo caso, un mismo exhibidor no podrá tener un coeficiente mayor del quince por ciento (15%); por lo tanto, si su participación fuera superior en el mercado su voto se limitará a este último porcentaje.

Se consideran un mismo exhibidor aquellas personas o empresas que utilicen igual nombre comercial, con independencia de las razones sociales usadas para su operación, o quien se presente ante la clientela o ante el público en general como un mismo exhibidor o circuito de exhibición”.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2.10.1.10 del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

**“Artículo 2.10.1.10. Cortometraje nacional.** Se considera producción o coproducción nacional de cortometraje la que, reuniendo porcentajes de participación económica, artística y técnica colombianos iguales a los previstos en cada caso por los artículos 43 y 44 de la Ley 397 de 1997, tenga una duración inferior a 70 minutos en pantalla de cine o inferior a 52 minutos para otros medios de exhibición.

La duración mínima de los cortometrajes nacionales es de 7 minutos de conformidad con el artículo 3° de la Ley 814 de 2003”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 2.10.1.16 del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

**“Artículo 2.10.1.16. Terminología utilizada.** Para los exclusivos efectos de este decreto, los términos película nacional, producción o coproducción nacional de corto o largometraje y obra cinematográfica nacional se entienden análogos, independientemente de su destinación, soporte de fijación o medio de difusión finales, siempre que la obra de que se trate tenga las características creativas, lenguaje y desarrollo de la acción propios y diferenciales de la obra cinematográfica”.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 2.10.2.1.3 del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

**“Artículo 2.10.2.1.3. Recaudo.** La contribución parafiscal “Cuota para el Desarrollo Cinematográfico” deberá ser consignada dentro del término previsto en el artículo 2.10.2.1.1 del presente decreto, directamente por los agentes retenedores en la cuenta de la entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, a nombre del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, cuya apertura estará a cargo del administrador de dicho Fondo.

Conforme a los artículos 3° y 5° de la Ley 814 de 2003, la distribución y exhibición de cualquier clase de obra audiovisual en salas de cine en el país basada en la venta o nego-

ciación de derechos de ingreso a dicha exhibición, es objeto de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico.

Ninguna distribución o exhibición en salas de cine basada en la venta o negociación de derechos de ingreso al público está exenta de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico. Los contenidos alternativos, es decir, aquellos diferentes a la obra cinematográfica se asimilan a esta cuando se exhiban en salas de cine y, en consecuencia, pagarán la referida Cuota a partir de la expedición de este decreto, sin perjuicio de aquellos que ya lo hubieran efectuado, y sin que les sea exigible ningún otro gravamen, tributo o retención que no se cobre sobre la obra cinematográfica, o respecto de los pagos relacionados con esta”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 2.10.2.5.1 del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

**“Artículo 2.10.2.5.1. Requisitos para ser beneficiario del estímulo por la exhibición de cortometrajes colombianos.** Para obtener el estímulo por la exhibición de cortometrajes colombianos, los exhibidores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Que el cortometraje sea producción o coproducción colombiana, certificada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cinematografía.

2. Que haya sido clasificado por el Comité de Clasificación de Películas.

3. Que haya sido aprobado por un comité designado o vinculado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), al menos con la participación de tres de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el representante de los exhibidores. Este comité valorará la contribución de la obra a la cinematografía nacional. No aprobará en los casos en los que la obra corresponda a cualquiera de las designadas en el artículo 2.10.1.1 de este decreto o cuando considere que la misma no representa una obra de calidad.

No se requiere la aprobación de este comité si el cortometraje ha sido destinatario de algún estímulo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

El CNACC informará de manera pública las fechas de reunión del comité a efectos de que se sometan a su consideración los respectivos cortometrajes. En todo caso, podrá conformar un banco de cortometrajes de los cuales podrán escogerse o adquirirse por los exhibidores aquellos que voluntariamente consideren pertinentes.

Lo previsto en este numeral regirá a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, el Comité se conformará a partir del 1° de julio de 2017.

4. Que la clasificación del cortometraje sea igual o inferior en edades a la de la película que acompaña.

5. Que se anuncie el cortometraje en un lugar visible del teatro en donde se encuentre ubicada la sala de cine.

6. Que su duración mínima sea de siete (7) minutos.

7. Que la proyección principal en la sala de exhibición o de cine, se realice con una diferencia no mayor a quince (15) minutos, contados entre la terminación del corto y el inicio de dicha proyección principal.

8. En ningún caso podrá tratarse de:

- Comerciales: Obras que anuncien productos o bienes comerciales.
- Propaganda política: Obras que realicen proselitismo político.

• Institucionales: Obras que divulguen las labores, beneficios o programas de instituciones públicas, privadas o mixtas.

• En general obras que correspondan a las exclusiones señaladas en el artículo 2.10.1.1 de este decreto.

9. Para los efectos previstos en este artículo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

9.1. Ningún cortometraje que dé derecho al estímulo podrá exhibirse por un período mayor de dos (2) meses calendario continuos en una misma sala de cine. El cortometraje que sea utilizado en el respectivo bimestre en una misma sala de cine, deberá exhibirse al menos durante quince (15) días corridos de cada mes calendario y en todas las funciones.

9.2. A partir del 1° de enero de 2018, ningún cortometraje que dé derecho al estímulo podrá exhibirse por un período mayor de un mes calendario continuo en una misma sala de cine. El cortometraje que sea utilizado en el mes en una misma sala de cine, deberá exhibirse al menos durante quince (15) días corridos del mes calendario y en todas las funciones.

9.3. A partir de la publicación de este decreto cuando la función principal corresponda a contenidos alternativos no cinematográficos, no será necesario exhibir el cortometraje en tal función. Sin embargo, el exhibidor deberá cumplir con la obligación de exhibir el cortometraje en todas las demás funciones, según lo señalado en los numerales 9.1 y 9.2. Si el número de funciones de contenido alternativo creciera sustancialmente, el Ministerio de Cultura podrá imponer un límite a la excepción consagrada en este numeral.

9.4. A partir del 1° de enero de 2018 el cortometraje que haya dado derecho a la disminución de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico a cargo de un mismo exhibidor con independencia de las razones sociales que utilice, no podrá ser utilizado para los mismos fines por otro exhibidor. Tampoco podrá utilizarse para este cometido ningún cortometraje cuya producción, o cualquiera de los cargos de producción haya estado en cabeza del exhibidor que hace uso del beneficio.

10. Enviar dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes a la Dirección de Cinematografía y al Administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, la programación de cortometrajes para el mes siguiente en cada sala de cine. El incumplimiento de esta obligación impedirá el otorgamiento del estímulo previsto en este artículo, para la respectiva sala.

Parágrafo 1°. Desde el 1° de agosto de 2004 lo previsto en los numerales 9.1 y 9.2 ha debido cumplirse y seguirá siéndolo con cortometrajes nuevos, es decir, que no hayan sido exhibidos públicamente en sala de cine o de exhibición.

Parágrafo 2°. No pueden presentarse como cortometrajes para los fines de este artículo, los cortes o ediciones de otras obras audiovisuales de mayor duración, entendiéndose que el cortometraje destinatario de este beneficio debe constituir una obra cinematográfica individual. En este sentido, no se admiten cortes o ediciones de otras obras, ni fragmentos o capítulos de seriados audiovisuales”.



Artículo 7°. Modifíquese el artículo 2.10.5.1.5, numeral 4, del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“4. La exhibición de las películas ante el Comité de Clasificación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, sin perjuicio del término del que dispone el Comité para clasificar a partir de dicha exhibición conforme al artículo 21 de la Ley 1185 de 2008. Copia de la película en su soporte original deberá entregarse por el solicitante a la secretaría, cuando menos con un día de antelación a la exhibición ante el Comité. En caso de que la solicitud o la copia de la obra no sean presentadas en debida forma, los términos se computarán desde que la solicitud cumpla con los requisitos exigidos”.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 2.10.5.1.8 del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará así:

“**Artículo 2.10.5.1.8. Definiciones.** Para efectos de la excepción de clasificación de películas consagrada en el artículo 22 de la Ley 1185 de 2008 y dentro del contexto de este decreto adóptase la siguiente definición:

Festival o Muestra de Cine: Programación a cargo de personas jurídicas, de duración no superior a veinte (20) días continuos en el territorio nacional, en la que se exhiben obras cinematográficas con propósitos expresos y verificables de formación, de valoración académica o artística, o de otorgar a aquellas premios o distinciones.

Parágrafo 1°. No podrá reconocerse más de un festival o muestra en un mismo año calendario para una misma persona jurídica organizadora o responsable de la actividad, en forma directa o indirecta, si se trata del mismo festival o muestra.

Si se trata de una muestra de cine itinerante, esta tendrá una única autorización por año calendario. La autorización determinará las ciudades a las que se llevará la respectiva muestra.

Parágrafo 2°. No se considera festival o muestra de cine la exhibición definida autónomamente por exhibidores que no sean personas jurídicas sin ánimo de lucro o entidades estatales no comerciales. Lo expresado en este parágrafo se entiende sin perjuicio de que los organizadores o responsables de una muestra o festival acuerden con salas comerciales la exhibición de las obras en dichas salas.

Parágrafo 3°. La programación cinematográfica de entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social sea de manera expresa la formación de públicos o formación académica, así como la programación de entidades estatales no comerciales, podrá asimilarse a festival o muestra de cine”.

Artículo 9°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Industria y Comercio

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 14371 DE 2017

(marzo 29)

por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.

El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 35 del artículo 3° del Decreto número 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Primero: Que el artículo 24 del Código General del Proceso atribuyó a la Superintendencia de Industria y Comercio facultades jurisdiccionales para conocer de los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor, violación de normas relativas a la competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial.

Segundo: Que el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 24 del Código General del Proceso señala que: “Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de intermediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado”.

Tercero: Que el numeral 35 del artículo 3° del Decreto número 4886 de 2011 otorgó al Superintendente de Industria y Comercio la facultad de “Designar las Delegaturas, grupos internos de trabajo o funcionarios que ejerzan las funciones jurisdiccionales asignadas en virtud de la ley, garantizando la autonomía e independencia propia de la función”.

Cuarto: Que el artículo 21 del Decreto número 4886 de 2011 asignó al Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, entre otras, las siguientes funciones:

“3. Decidir la admisión de las reclamaciones que se presenten y adelantar, de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, en única o primera instancia según corresponda de acuerdo con la cuantía, el trámite de los procesos que deban iniciarse en ejercicio de las funciones jurisdiccionales de protección al consumidor.

4. Adoptar, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales de protección al consumidor, en primera o única instancia, cualquiera de las siguientes decisiones:

4.1. Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección al consumidor o las contractuales si ellas resultan más amplias.

4.2. Imponer las multas sucesivas que procedan de acuerdo con la ley, por incumplimiento de las órdenes de efectividad de garantías emitidas.

5. Decidir sobre la admisión de las demandas que en competencia desleal se presenten, y adelantar el trámite, de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, de los procesos en materia de competencia desleal.

6. Proferir las providencias que resuelven solicitudes de medidas cautelares en los procesos de competencia desleal.

7. Proferir las providencias que resuelven solicitudes de diligencias preliminares de comprobación en los procesos de competencia desleal.

8. Proferir la sentencia en los procesos de competencia desleal.

9. Resolver los recursos de reposición y solicitudes de nulidad que se propongan contra las decisiones que haya adoptado.

10. Coordinar, dirigir y asignar a los funcionarios que adelantarán la práctica de pruebas, las audiencias y diligencias a lo largo de las actuaciones y procesos.

11. Expedir las certificaciones y constancias relacionadas con los temas de su competencia.

12. Informar periódicamente al Superintendente sobre el estado de los asuntos de su dependencia y el grado de ejecución de sus programas.

13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia”.

Quinto: Que mediante Resolución número 74622 del 5 de diciembre de 2013 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, se asignaron funciones jurisdiccionales a los Coordinadores de los Grupos de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial –en adelante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal e Infracción de Derechos de Propiedad Industrial–, de Calificación y de Defensa del Consumidor, así como a los abogados de dichas áreas que ocupan los cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado, y al asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

Sexto: Que mediante Resolución número 7327 del 22 de febrero de 2016 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, se creó el Grupo de Trabajo para la Verificación del Cumplimiento adscrito al Despacho del Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, con el fin de llevar a cabo el trámite de verificación del cumplimiento de las órdenes proferidas en el marco de las acciones de protección al consumidor, de conciliaciones y transacciones realizadas en legal forma en materia de consumo, en los términos y para los efectos del citado acto.

Séptimo: Que ante la eventual concurrencia de una causal de recusación en cabeza del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, y con el fin de garantizar la autonomía e independencia propias de la función jurisdiccional, es necesaria la designación de un Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales ad hoc.

En consecuencia, para los fines previstos en los artículos 140 y siguientes del Código General del Proceso, en el evento en que concurra en el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales una causal de recusación, el Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales habrá de fungir como Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales ad hoc y será el funcionario que deba reemplazarlo en los términos y para los efectos señalados, especialmente en el inciso segundo del artículo 140 del Código General del Proceso, lo anterior, sin perjuicio de las facultades que le asisten al Superintendente de Industria y Comercio de designar a otro servidor para tales efectos en los casos en que lo estime pertinente en aras de salvaguardar el principio de transparencia.

Octavo: Que en consideración a la reorganización interna de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, a la entrada en vigencia del Código General del Proceso, así como a la naturaleza y características de los procedimientos judiciales aplicables en competencia desleal, infracción de derechos de propiedad industrial y protección al consumidor, principalmente la oralidad, resulta indispensable para lograr una gestión eficiente y eficaz de los procesos a cargo de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, asignar funciones jurisdiccionales a los Coordinadores de los Grupos de Trabajo de Competencia Desleal e Infracción de Derechos de Propiedad Industrial, de Calificación, de Defensa del Consumidor, y del Grupo de Trabajo para la Verificación del Cumplimiento, así como a los abogados de dichas áreas que ocupen los cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado, y al/los asesores asignados al Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales. Teniendo en cuenta las siguientes reglas:

**8.1. Facultades del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales.** Sin perjuicio de la asignación que se realiza con la presente, el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales conserva la totalidad de las facultades jurisdiccionales y, en consecuencia, podrá en cualquier tiempo desplazar a los funcionarios que las estén ejerciendo.

**8.2. Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal e Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.** Le corresponde dirigir y coordinar el trámite de los asuntos jurisdiccionales relativos a las acciones por competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial que se ejerzan ante esta Superintendencia, conforme a las atribuciones otorgadas en el Código General del Proceso, quedando facultado para adelantar las actuaciones y proferir los diferentes actos procesales que a lo largo del trámite se presenten, incluida la decisión definitiva y la solicitud de medidas cautelares.

**8.3. Profesional Universitario y Profesional Especializado.** Los abogados que ocupen los cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado adscritos al Grupo de Trabajo de Competencia Desleal e Infracción de Derechos de Propiedad Industrial, podrán llevar a cabo las diferentes diligencias y audiencias que deban efectuarse en el marco del trámite de los procesos a cargo del área, incluida la práctica de pruebas y la adopción de las decisiones que surjan durante su desarrollo, con excepción de la decisión definitiva del proceso y la solicitud de medidas cautelares.

**8.4. Coordinador del Grupo de Trabajo de Calificación.** Le corresponde calificar las demandas presentadas por la violación de las normas de protección al consumidor, para lo cual surtirá el trámite de su eventual corrección o adición, adoptando la decisión de admitirla, inadmitirla o rechazarla, resolviendo los recursos o solicitudes de nulidad que se interpongan en contra de los autos que profiera, así como las solicitudes de medidas

cautelares. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, podrá realizar cualquier otro trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.

**8.5. Profesional Universitario y Profesional Especializado.** Los abogados que ocupen los cargos de profesional Universitario y Profesional Especializado adscritos al Grupo de Trabajo de Calificación, estarán revestidos de las facultades secretariales para la elaboración y suscripción del acta de corrección de la demanda a que hace alusión el artículo 391 del Código General del Proceso, previa designación del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto número 4886 de 2011, en consonancia con lo dispuesto en el inciso segundo del párrafo primero del artículo 24 del Código General del Proceso. Los abogados que ocupan cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado adscritos al Grupo de Trabajo de Calificación, podrán proferir autos admisorios, inadmisorios, de rechazo, aclaración, adición, resolver recursos de reposición o cualquier otra providencia que resulte pertinente durante la fase de calificación de la demanda. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, los referidos funcionarios podrán realizar cualquier trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.

**8.6. Coordinador del Grupo de Defensa del Consumidor.** Le corresponde dirigir y coordinar el trámite de los asuntos jurisdiccionales relativos a las acciones de protección al consumidor que se ejerzan ante esta Superintendencia, conforme a las atribuciones otorgadas en el Código General del Proceso y en la Ley 1480 de 2011, quedando facultado para adelantar las actuaciones y proferir los diferentes actos procesales que a lo largo del trámite se presenten, incluyendo la sentencia y la imposición de las sanciones previstas en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, podrá realizar cualquier trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.

**8.7. Profesional Universitario y Profesional Especializado.** Los abogados que ocupen los cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado adscritos al Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor, podrán llevar a cabo las diferentes diligencias y audiencias que deban efectuarse en el marco del trámite de los procesos de mínima, menor o mayor cuantía, previa asignación que realice el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto número 4886 de 2011, en consonancia con lo dispuesto en el inciso segundo del párrafo primero del artículo 24 del Código General del Proceso, incluida la práctica de pruebas y la adopción de las decisiones que surjan durante su desarrollo, incluyendo la sentencia. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, los referidos funcionarios podrán realizar cualquier trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.

**8.8. Coordinador del Grupo de Trabajo para la Verificación del Cumplimiento.** Le corresponde dirigir y coordinar el trámite de verificación del cumplimiento de las órdenes proferidas en el marco de las acciones de protección al consumidor o del cumplimiento de las conciliaciones y transacciones realizadas en materia de consumo, quedando facultado para proferir las providencias judiciales necesarias para tales efectos de conformidad con lo señalado en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, la Resolución número 7327 del 22 de febrero de 2016 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio y los lineamientos del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, podrá realizar cualquier trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.

**8.9. Profesional Universitario y Profesional Especializado.** Los abogados que ocupen los cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado adscritos al Grupo de Trabajo para la Verificación del Cumplimiento, quedan facultados para proferir las providencias judiciales necesarias para la verificación del cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia o en el marco del cumplimiento de las conciliaciones y transacciones realizadas en materia de consumo, de conformidad con lo señalado en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, la Resolución número 7327 del 22 de febrero de 2016 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio y los lineamientos del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, los referidos funcionarios podrán realizar cualquier trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.

**8.10. Asesor/es asignado/s a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.** El/los asesores asignados a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales estarán facultados para adelantar las actuaciones y proferir los diferentes actos procesales que a lo largo del trámite de los procesos por competencia desleal, por infracción de derechos de propiedad industrial y en materia de protección al consumidor se presenten, incluida la decisión definitiva, las solicitudes de medidas cautelares y la verificación del cumplimiento de la sentencia, y los acuerdos de conciliación o transacción en materia de consumo.

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE:

Artículo 1°. Designar al Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales como Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales ad hoc, en los precisos términos y para los efectos previstos en el considerando séptimo de la presente resolución, lo anterior, sin perjuicio de las facultades que le asisten al Superintendente de Industria y Comercio de designar a otro servidor para tales efectos en los casos en que lo estime pertinente en aras de salvaguardar el principio de transparencia.

Artículo 2°. Asignar funciones jurisdiccionales al Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal e Infracción de Derechos de Propiedad Industrial adscrito a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en los precisos términos y para los efectos previstos en el numeral 8.2 del considerando octavo de la presente resolución.

Artículo 3°. Asignar funciones jurisdiccionales al Coordinador del Grupo de Trabajo de Calificación adscrito a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en los precisos términos y para los efectos previstos en el numeral 8.4 del considerando octavo de la presente resolución.

Artículo 4°. Asignar funciones jurisdiccionales al Coordinador del Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor adscrito a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en los precisos términos y para los efectos previstos en el numeral 8.6 del considerando octavo de la presente resolución.

Artículo 5°. Asignar funciones jurisdiccionales al Coordinador del Grupo de Trabajo para la Verificación del Cumplimiento adscrito a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en los precisos términos y para los efectos previstos en el numeral 8.8. del considerando octavo de la presente resolución.

Artículo 6°. Asignar funciones jurisdiccionales a los abogados que ocupen los cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado, en los Grupos de Trabajo de Competencia Desleal e Infracción de Derechos de Propiedad Industrial, de Calificación, de Defensa del Consumidor, y del Grupo de Trabajo para la Verificación del Cumplimiento adscritos a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en los precisos términos y para los efectos previstos en los numerales 8.3, 8.5, 8.7 y 8.9. del considerando octavo de la presente resolución.

Artículo 7°. Asignar funciones jurisdiccionales al/los asesores asignados a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en los precisos términos y para los efectos previstos en el numeral 8.10 del considerando octavo de la presente resolución.

Artículo 8°. Derogar la Resolución número 74622 del 5 de diciembre de 2013 “*por la cual se asignan funciones jurisdiccionales*”.

Artículo 9°. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el **Diario Oficial**. Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2017.

El Superintendente de Industria y Comercio,

Pablo Felipe Robledo del Castillo.  
(C. F.).

## Superintendencia Nacional de Salud

### RESOLUCIONES

#### RESOLUCIÓN NÚMERO 000515 DE 2017

(marzo 21)

*por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar el Hospital San Andrés ESE, del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, identificado con el NIT. 800179870-2.*

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 230 y 233 de la Ley 100 de 1993, el artículo 115 del Decreto-ley 663 de 1993, modificado por el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 2555 de 2010, el numeral 13 del artículo 7° del Decreto 2462 de 2013, el Decreto 780 de 2016, y

#### CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud por remisión del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 9.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, la toma de posesión e Intervención Forzosa Administrativa para Administrar, es una medida especial que tiene por finalidad “(...) *establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones...* (...)”.

Que el Hospital San Andrés ESE, del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, según Ordenanza número 078 del 7 de septiembre de 1995, emanada de la Asamblea Departamental de Nariño, es una entidad con categoría especial, de utilidad común, de carácter descentralizado; dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Que según el documento de Red presentado por el departamento de Nariño con los radicados 201442301493782, 201442301682162 y 201542300533572 y viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social según concepto técnico del 2 de diciembre de 2015, el Hospital San Andrés ESE, se constituye en centro de referencia de mediana complejidad del Nodo Occidente del departamento de Nariño, cuyo radio de acción son los municipios de Tumaco, Barbacoas, Francisco Pizarro, Maguí, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Olaya Herrera, Mosquera y Santa Bárbara. Esta subregión se caracteriza por tener los mayores problemas de accesibilidad, dispersión geográfica, cultivos ilícitos, conflicto armado, riesgo antrópico por desplazamientos masivos, riesgos naturales por tsunamis, altos índices de enfermedades transmitidas por vectores y, en general, bajo desarrollo.

Que mediante NURC 1-2016-179506 el Director General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informa que ese Ministerio adelantó un proceso de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero presentado por el Hospital San Andrés ESE, el cual fue incumplido por la mencionada institución.

Que respecto de la evaluación al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado al Hospital San Andrés ESE, se concluyeron las siguientes situaciones: “i) *Inconsistencias en el reporte de información a las fuentes oficiales*; ii) *Recurrencia en el balance negativo de su operación*; iii) *Operación corriente deficitaria derivada de la disminución de las ventas de servicios y la inclusión de nuevas cuentas por pagar*; iv) *Afectación de las fuentes de*



*financiación previstas para el PSFF, principalmente las derivadas del ahorro corriente y las asignadas por el Departamento; v) Según tendencia, se detectó incremento del pasivo del 11% respecto del mismo mes de septiembre de la vigencia 2015.”.*

Que mediante memorando identificado con el NURC 3-2016-016839 de fecha 8 de septiembre de 2016, la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, remitió a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, Informe de Evaluación relacionado con la visita efectuada al Hospital San Andrés ESE cuyo objeto fue: “(...) *establecer la gestión del Hospital San Andrés ESE, en referencia a la prestación de los servicios de salud, así como lo relacionado con su organización en aspectos administrativos, operacionales, técnicos, de solvencia económica y gestión financiera (...).*”.

Que en el mencionado informe se recomienda “*poner en consideración el presente concepto técnico al Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, para que evalúe y se tomen las decisiones a que haya lugar, tendientes a garantizar la prestación de servicios producto del mejoramiento de la gestión administrativa en el Hospital San Andrés ESE, con el apoyo del ente territorial, considerando el documento de red viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el departamento de Nariño.*”.

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, mediante Auto número 000022 del 20 de enero de 2017, ordenó realizar visita al Hospital San Andrés ESE, con el objeto de “*recaudar información administrativa, financiera, jurídica, técnico-científica y de servicios que reporte la entidad, con el fin de ser sometida al análisis de la Superintendencia Nacional de Salud*”, la cual se llevó a cabo los días 1º, 2 y 3 de febrero de 2017 y donde el equipo auditor evidenció inconsistencias en los controles de producción de servicios, incoherencia entre los diferentes reportes de información, inexistencia de cierres contables para la vigencia 2016, debilidades en las estrategias de defensa judicial e inconsistencias en la gestión contractual.

Que como consecuencia de la anterior visita se derivó el respectivo informe por parte de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales con fecha 10 de febrero de 2017, donde se concluye lo siguiente:

“(...

*Durante la visita realizada el equipo auditor evidenció en todos los componentes un alto grado de informalidad y falta de confiabilidad de la información reportada, concluyendo que la misma no es fuente cierta para efectos de determinar la condición real del hospital y permitir la toma de decisiones al respecto.*

*Adicionalmente, se evidenció que la atención prestada a los usuarios es potencialmente peligrosa para el personal asistencial y principalmente para los usuarios generando en ellos un impacto negativo que en muchas ocasiones puede derivar en un evento adverso, que puede llevar a secuelas causadas por negligencia o incluso la muerte.*

*En términos generales, se concluye que el Hospital presenta serias dificultades en la gestión financiera, administrativa y jurídica, afectando su sostenibilidad en el corto y largo plazo, lo cual impacta de manera directa en la adecuada prestación de los servicios de salud a su población objeto.*

(...)”.

Que de acuerdo a las consideraciones previstas en el concepto de la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional y el informe de visita llevado a cabo por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, se evidencia que el Hospital San Andrés ESE no refleja la aplicación de los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud que deben guardar todas las entidades que administran recursos públicos, en concordancia con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3º de la Ley 1438 de 2011.

Que las anteriores situaciones ponen en riesgo la garantía de la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud a los usuarios del Hospital San Andrés ESE.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución número 000461 del 13 de abril de 2015 “*por la cual se conforma el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud y se deroga la Resolución número 000385 de 2014*”, el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, sesionó el pasado 15 de marzo de 2017, según consta en Acta No. 179 de la misma fecha, recomendando adoptar la medida especial que se ordena en el presente acto administrativo respecto del Hospital San Andrés ESE.

Que de acuerdo con lo manifestado, se considera necesario ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar por el término de un (1) año, sobre el Hospital San Andrés ESE, con el fin de dar cumplimiento a lo contenido en el artículo 115 del Decreto-ley 663 de 1993.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 291 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999 y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2462 de 2013, le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud designar el Agente Especial Interventor, quien ejercerá las funciones propias de su cargo de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y demás normas que le sean aplicables.

Que, de acuerdo con lo anterior, dada la naturaleza jurídica de las funciones tanto del agente especial interventor como del liquidador; el numeral 4 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), modificado por el artículo 28 de la Ley 510 de 1999, establece que pueden ser personas naturales o jurídicas y que podrán ser removidos de sus cargos cuando a juicio del competente deban ser reemplazados.

Que conforme a lo previsto en los numerales 1 y 6 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Agente Especial ejercerá funciones públicas transitorias, lo cual no constituye ni establece relación laboral alguna con la Superintendencia Nacional de Salud.

Que la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 002599 del 6 de septiembre de 2016 “*Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y*

*contralores de las entidades objeto, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de las medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas especiales previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015*”.

Que el artículo 15 de la mencionada resolución establece que “*La escogencia de los agentes interventores, liquidadores y contralores se hará exclusivamente por parte del Superintendente Nacional de Salud, previa presentación de tres (3) candidatos escogidos a juicio del Comité de Medidas Especiales regulado por la Resolución 461 de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud*”.

Que el inciso segundo del artículo antes citado, señala que el Comité de Medidas Especiales deberá sugerir a quienes considere como los tres (3) candidatos de las personas que estando inscritos en la categoría aplicable a la entidad objeto de la medida de toma de posesión, intervención forzosa administrativa o medida especial de las previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, cumplan los requisitos que el caso exige según la aplicación de los criterios de escogencia.

Que, no obstante, haberse derogado la Resolución 1947 de 2003 “*por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el nombramiento y posesión de Interventores, Liquidadores y Contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones*”; el artículo 48 de la Resolución 002599 de 2016 previó que “*la lista existente en desarrollo de lo dispuesto por la Resolución 1947 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud solo estará vigente por un término máximo de seis (6) meses después de la publicación de la presente resolución en el **Diario Oficial**, momento en el cual deberá estar conformado un nuevo registro en los términos de esta resolución.*”.

Que previo al vencimiento del término antes señalado, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 000390 del 6 de marzo de 2017 en la cual se amplió la vigencia de la lista de interventores liquidadores y contralores.

Que el Comité de Medidas Especiales, en ejercicio de las funciones que le corresponden según Resolución número 000461 de 2015, en concordancia con lo reglado en el artículo 15 de la Resolución 002599 de 2016, adelantó la revisión de seis (6) hojas de vida inscritas en el registro de interventores, liquidadores y contralores vigente y, una vez revisados los requisitos de experiencia e idoneidad requeridos para el desempeño del cargo, fueron puestas a consideración del Superintendente Nacional de Salud, quien dispuso la designación del doctor Bernardo Ocampo Martínez identificado con cédula de ciudadanía número 12965764 de Pasto (Nariño), para ejercer las funciones de Agente Especial Interventor del Hospital San Andrés ESE y a la firma Auditoría y Gestión Ltda., identificada con NIT. 830008673-4, representada legalmente por el doctor Julio César Florián, identificado con cédula de ciudadanía número 79102029 de Bogotá, como Contralor de la mencionada ESE.

Que la toma de posesión ordenada en esta resolución, busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio en condiciones de calidad y oportunidad, permitiendo que durante un lapso determinado se estructuren las soluciones administrativas, financieras, jurídicas y asistenciales que permitan superar las falencias identificadas en el concepto de la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional y en el informe de la visita realizada por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, sobre el Hospital San Andrés ESE.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

Artículo 1º. *Ordenar* la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar el Hospital San Andrés ESE, del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, identificado con NIT. 800179870-2, ubicado en el kilómetro 23 Inguapi del Carmen Tumaco - Nariño, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, de conformidad con las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y por el término de un (1) año.

Artículo 2º. *Comisionar* al Superintendente Delegado para las Medidas Especiales, para ejecutar en nombre de la Superintendencia Nacional de Salud, la medida adoptada en el presente acto administrativo, quien podrá ordenarle al Agente Especial Interventor que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de la toma de posesión.

Artículo 3º. *Ordenar* el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 así:

a) La inmediata guarda de los bienes de la intervenida y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables;

b) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida;

c) Comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro para que ordene a los Registradores de Instrumentos Públicos, que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial, así como el registro de cualquier acto que afecte el dominio de bienes propiedad de la intervenida. También deberá informar al Agente Especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la institución intervenida. Igual situación procede frente a las Secretarías de Tránsito y Transporte, previa comunicación al Ministerio de Transporte.

d) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión y de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar que afecten bienes de la entidad. Cuando las autoridades se rehúsen a cumplir esta orden, la Superintendencia Nacional de Salud librará los oficios correspondientes;



e) El Agente Especial podrá poner fin a cualquier clase de contrato existente al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios, así como suspender de manera unilateral contratos celebrados hasta el momento de la toma de posesión en concordancia con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1797 de 2016.

f) Prevenir a los deudores de la intervenida de que solo podrán pagar al agente especial, advirtiéndolo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta. Igual prevención debe advertirse a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales.

Artículo 4°. *Ordenar* la separación de la Gerente (e) y de los miembros de la Junta Directiva del Hospital San Andrés ESE o de quienes hagan sus veces.

Artículo 5°. *Designar* como Agente Especial Interventor del Hospital San Andrés ESE, al doctor Bernardo Ocampo Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 12965764 de Pasto (Nariño), con dirección de notificación en la carrera 42 No. 21-36 de Pasto (Nariño); email: bernardoo386@gmail.com; quien se notificará y tomará posesión del cargo firmando el acta correspondiente en el lugar de la diligencia de intervención que se lleve a cabo de acuerdo con el presente acto administrativo.

Parágrafo 1°. El Agente Especial Interventor dentro del mes siguiente a la fecha en que haya tomado posesión hará un inventario preliminar de los activos y pasivos de la intervenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.1.1.4., del Decreto 2555 de 2010.

Parágrafo 2°. El Agente Especial Interventor designado ejercerá las funciones propias de su cargo, previa posesión del mismo y tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la entidad junto con los demás deberes y facultades que le asigne la ley.

Parágrafo 3°. De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, el Agente Especial Interventor ejercerá funciones públicas transitorias previa posesión, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas del derecho privado a los actos que ejecute en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión. En virtud de lo anterior, no se constituye relación laboral alguna con la Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo 4°. El cargo de Agente Especial Interventor es de obligatoria aceptación y el designado tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea notificado para aceptar el cargo y posesionarse del mismo de conformidad con el inciso segundo del artículo décimo sexto de la Resolución 002599 de 2016.

Artículo 6°. *Ordenar* al Agente Especial Interventor que, dentro del término dispuesto para la medida especial de acuerdo con el artículo primero de la presente resolución, ejecute las acciones necesarias para superar las situaciones que dan lugar a la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar.

Parágrafo 1°. El Agente Especial Interventor deberá presentar el Plan de Acción de la Intervención dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la toma de posesión de la entidad, el cual debe contener las actividades a realizar con miras a subsanar los hallazgos que dan origen a la presente medida de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.1. “Informe Preliminar” del numeral 1 denominado “Información que debe reportar el Agente Interventor” del Capítulo II Título IX de la Circular Única de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo 2°. La Superintendencia Nacional de Salud a través de la Delegada para las Medidas Especiales evaluará y aprobará el documento presentado y lo hará público, de conformidad con lo establecido en la Resolución 002599 de 2016.

Artículo 7°. La institución intervenida asumirá los gastos que ocasione la presente intervención.

Artículo 8°. *Designar* como Contralora para la medida ordenada en el presente acto administrativo, a la firma Auditoría y Gestión Ltda., identificada con Nit. 830.008.673-4, representada legalmente por el doctor Julio César Florián Londoño identificado con cédula de ciudadanía No. 79.102.029 de Bogotá, quien ejercerá las funciones propias de su cargo de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que sean aplicables.

Parágrafo 1°. La persona designada como Contralor de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del numeral 3, Capítulo II, Título IX de la Circular Única de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, ejercerá además las funciones propias de un Revisor Fiscal, conforme a lo establecido en el Código de Comercio.

Parágrafo 2°. Conforme a lo dispuesto en el Título IX, Capítulo II, numeral 3 denominado “Informes que debe reportar el Contralor y/o Revisor Fiscal” de la Circular Única, el Contralor deberá remitir un informe preliminar en medio físico a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su posesión que incluya las observaciones y recomendaciones sobre aspectos relacionados con la situación administrativa, financiera, jurídica, laboral y asistencial de la intervenida, junto con el plan de trabajo que va a adelantar durante el término de la intervención.

Parágrafo 3°. La Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, evaluará y aprobará el documento presentado y lo hará público de conformidad con lo establecido en la Resolución 002599 de 2016.

Parágrafo 4°. El cargo de Contralor es de obligatoria aceptación y el designado tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea notificado, para aceptar el cargo y posesionarse del mismo de conformidad con el segundo inciso del artículo décimo sexto de la Resolución 002599 de 2016.

Parágrafo 5°. Toda vez que para este caso se designó como Contralor a una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 19 de la Resolución 002599 de 2016, deberá posesionarse tanto el representante legal de la firma como la persona natural designada por esta para ejercer el cargo, aportando prueba de la representación legal y del certificado que acredite el vínculo de la persona jurídica con la persona natural que en su nombre desarrollará las funciones como contralor. Asimismo, aportarán documento en el cual manifiesten su responsabilidad solidaria en cualquier evento.

Artículo 9°. *Notificar* personalmente el contenido de la presente resolución a la firma Auditoría y Gestión Ltda., identificada con Nit. 830.008.673-4, representada legalmente por el doctor Julio César Florián identificado con cédula de ciudadanía 79102029 de Bogotá, mediante citación dirigida al domicilio ubicado en la calle 31 N° 6 - 42 oficina 502 de la ciudad de Bogotá, o al sitio que se indique para tal fin, para que se presente ante la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales a tomar posesión dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del presente acto administrativo.

Parágrafo. Si no pudiere practicarse la notificación personal, esta deberá surtirse mediante aviso, en los términos y para los efectos de los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 10. La decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto y si la misma no se puede notificar personalmente al Representante Legal del Hospital San Andrés ESE, se notificará por medio de un aviso que se fijará por un día en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el artículo 9.1.1.1.3., del Decreto 2555 de 2010.

Artículo 11. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto devolutivo, que no suspenderá la ejecución de la medida de toma de posesión e Intervención Forzosa Administrativa para Administrar que se ordena en el presente acto administrativo, la cual procederá inmediatamente. Dicho recurso podrá interponerse en el momento de la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella ante el Despacho del Superintendente Nacional de Salud.

Los recursos que se interpongan contra este acto administrativo no suspenderán la ejecutoriedad del mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo sexto del Decreto 506 de 2005, compilado en el artículo 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016.

Artículo 12. *Comunicar* la presente resolución al Gobernador del departamento de Nariño o a quien haga sus veces, y a todos los Alcaldes del citado departamento donde el Hospital San Andrés ESE tenga cobertura geográfica, así como al Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 13. *Facultar* al Superintendente Delegado para las Medidas Especiales para que lleve a cabo las labores de notificación del presente acto administrativo.

Artículo 14. *Publicar* el contenido de la presente resolución en el *Diario Oficial* y en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 15. *Publicar* mediante aviso fijado en las Oficinas de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, la medida de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar ordenada en el presente acto administrativo, de conformidad con el artículo 16 de la Resolución 002599 de 2016.

Artículo 16. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de marzo de 2017.

El Superintendente Nacional de Salud,

Norman Julio Muñoz Muñoz.  
(C. F.).

## RESOLUCIÓN NÚMERO 000527 DE 2017

(marzo 27)

por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre “Manexka”, con NIT 812.002.376-9.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que le confieren la Ley 100 de 1993, los artículos 113 a 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011, el Decreto 2462 de 2013, y

### CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 2° de la Constitución Política de Colombia precisa como “*finances esenciales del Estado: servir a la comunidad (...) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución*” y en el inciso segundo que “*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares*”.

Que de conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que el artículo 334 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 003 de 2011, dispone que los servicios públicos son actividades intervenidas por el Estado, a través de la ley y el artículo 365 prescribe: “*Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley*” y agrega, con independencia de quien los preste que “*En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios*”.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, estableció que es deber del Estado “*Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un órgano y/o las entidades especializadas que se determinen para el efecto*”.



Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio público de seguridad social en salud, con el fin de garantizar, entre otros, los principios consagrados en la Constitución Política y en los artículos 2 y 153 de la citada ley.

Que según lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo 230 de la Ley 100 de 1993, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica, competencia que fue reiterada por el artículo 68 de la Ley 715 de 2001.

Que por su parte, el párrafo 2° del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 señala que el procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto 780 de 2016 reglamentario del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, “la Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o para liquidar (...) las Empresas Promotoras de Salud, (...) las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan”.

Que el párrafo tercero del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 dispone que “Cuando quiera que al decretar la toma de posesión de una entidad (...) encuentra acreditado que la misma debe ser liquidada podrá disponer la liquidación en el mismo acto”

Que el artículo 2.5.2.4.1.2 del Decreto 780 de 2016, dispone que las Entidades Promotoras de Salud Indígenas con cuentas por pagar superiores a 30 días calendario, contados a partir de la fecha prevista para su pago, no podrán, entre otras, realizar nuevas afiliaciones, salvo los beneficiarios de aquellos afiliados que se encontraban cotizando tratándose de régimen contributivo y los recién nacidos en el régimen subsidiado.

Que el Capítulo 2 Sección 1 del Decreto 780 de 2016, estableció las condiciones financieras y de solvencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) autorizadas para operar el aseguramiento en salud, así como los criterios generales para que la información financiera reúna las condiciones de veracidad, consistencia y confiabilidad necesarias para la adecuada y eficaz inspección, vigilancia y control.

Que el artículo 2.5.2.2.1.15 del Decreto 780 de 2016, dispone que el incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia dentro de los plazos allí previstos, dará lugar a la adopción de las medidas correspondientes por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con sus competencias.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución 02262 del 04 de agosto de 2016, adoptó la medida preventiva de Vigilancia Especial a la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre Manexka, identificada con NIT. 812.002.376-9.

Que en la Resolución 02262, se designó como Contralor para la medida preventiva de Vigilancia Especial adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre Manexka a la firma Sociedad de Auditorías & Consultorías S.A.S. (SAC) Consulting S.A.S, identificada con NIT 819.002.575-3, representada legalmente por el doctor Never Enrique Mejía Matute, identificado con cédula de ciudadanía número 15681157 de Purísima - Córdoba.

Que la firma Sociedad de Auditorías & Consultorías S.A.S. (SAC) Consulting S.A.S, identificada con NIT. 819.002.575-3, contralor designado para la medida preventiva de vigilancia especial adoptada a la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre Manexka, en documento remitido a la Superintendencia Nacional de Salud, presentó dictamen de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016, donde señala:

“(...)”

### OPINIÓN

En nuestra opinión los Estados Financieros de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre -Manexka EPSI- con corte a 31 de diciembre de 2016, tomados de los libros de contabilidad, **no presentan razonablemente la situación financiera, económica y social de sus operaciones, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (artículo 6° de la Ley 43/90) y con la normatividad aplicable a Empresas Promotoras de Salud.**

### Párrafo de énfasis

Sin calificar mi opinión llamo la atención sobre los siguientes asuntos:

a) De acuerdo a las condiciones de habilitación financiera y de solvencia de que trata el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 100 de 1993 y la Resolución 1052 de 2013 emitida por la Superintendencia de Salud, al cierre del 31 de diciembre de 2016 la Entidad Promotora de Salud Indígena Manexka, no cumple con los requerimientos establecidos en dicha normatividad, presenta un defecto en la constitución de su patrimonio mínimo por valor de \$8.374 millones.

El anterior resultado conlleva a que la Entidad Promotora de Salud Indígena incumpla con las condiciones de habilitación financiera e indicadores de permanencia conforme a lo establecido en la Ley 691 de 2001 artículo 14, literal c); que establece taxativamente “c) Disponer de un patrimonio mínimo equivalente al valor de ciento cincuenta (150) smlmv (salarios mínimos legales mensuales vigentes) por cada cinco mil (5.000) subsidios administrados.

b) Las Entidades Promotoras de Salud deben garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Seguridad en Salud manteniendo la capacidad de atender todas sus obligaciones y las condiciones financieras y de solvencia del sistema único de habilitación, como resultado de la aplicación de las resoluciones 2094 de 2010 y 1052 de 2013, la EPSI Manexka a 31 de diciembre de 2016, presenta un déficit en el margen de solvencia por valor de \$ 5.316 millones aproximadamente incumpliendo así con este requisito de habilitación.

Estos factores, despiertan una duda importante de que la Entidad pueda continuar como un negocio en marcha, adicionalmente no fueron presentados a esta contraloría los planes de acción establecidos para enervar esta situación.

### Otros asuntos

#### I. Aspectos Técnico Científicos

Con relación a los aspectos técnico científicos, nos permitimos manifestar el alto grado de vulnerabilidad y riesgo que tiene la población menor de 5 años de la EPSI; debido a que presentó altas tasas de mortalidad perinatal, mortalidad por enfermedad respiratoria aguda (ERA), mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) y mortalidad por Neumonía en menores de 5 años; de igual forma la salud materna es un aspecto muy crítico que la EPSI tiene que impactar para disminuir la alta razón de mortalidad materna la cual en el año 2016 cerro en 105 muertes por cada 100.000 nacidos vivos estando 2,3 veces por encima de la línea base nacional, es importante resaltar que estos indicadores en un 90 a 95% son evitables y prevenibles con un adecuado modelo de gestión del riesgo en salud dirigido a la promoción y prevención, el cual la EPSI debe ajustar para mejorar la salud materno infantil de la población afiliada.

Lo anterior se vuelve mucho delicado (sic), teniendo en cuenta que los valores contratados con la red prestadora de servicios el monto destinado para la atención primaria no se compadece con los críticos resultados en salud que impactan negativamente en los factores Morbi-Mortalidad de la población afiliada a la EPS Indígena.

II. Medida de intervención de Vigilancia Especial la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre -Manexka EPSI-

Mediante Resolución número 2262 del 4 de agosto de 2016 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, se ordena medida preventiva de vigilancia especial de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre -Manexka EPSI-

Ahora bien, según el artículo segundo del resuelve de la resolución 2262 de 2016, Manexka EPSI, debe presentar y ejecutar Plan de Acción para subsanar los hallazgos o factores críticos que conllevaron la medida, el cual pese al envío a la Superintendencia Nacional de Salud no ha sido aprobado por este organismo, teniendo en cuenta que los objetivos estrategias e indicadores no apuntan a los factores críticos identificados.

No obstante, en nuestro informe como contralores con funciones de revisores fiscales, hemos realizado seguimiento a los hallazgos expuestos en la resolución por las inconsistencias en los aspectos legales, técnico científicos, financiero contables, administrativos y jurídicos; situaciones que pese a la toma de algunos correctivos, en su gran mayoría permanecen o presentan situaciones aún más críticas”.

Que la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, produjo informe técnico sobre el comportamiento y evolución de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre Manexka de los componentes de aseguramiento, seguimiento a indicadores de la Resolución 1552 de 2013, indicadores de red de prestación de servicios, los hallazgos de las auditorías de campo realizadas y los resultantes de la auditoría forense en el que presenta, entre otras, las siguientes conclusiones:

“4. Respecto a la población indígena que de acuerdo a lo establecido por la Ley 691 de 2001 debe ser del 60%, si bien Manexka EPSI en el registro BDUA del Ministerio de Salud cuenta con 75,48%, al consultar la fuente de información del Ministerio del Interior reporta 40,257 personas que corresponde a un 18,92%, cifras no coincidentes situación que constituye un incumplimiento normativo.

5. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado Manexka EPSI al tener deficiencias en la caracterización de su población Indígena presuntamente, podría haber recibido pagos indebidos por concepto de UPC diferencial.

(...)

7. Manexka EPSI, no cumple con la publicación de la información referente a los indicadores de asignación de citas, establecido mediante Resolución 1552 de 2013, para los meses enero a agosto de 2016; no permite determinar el grado de oportunidad en la prestación de servicios de salud a sus usuarios.

(...)

10. Es importante señalar que dentro de los hallazgos de las auditorías de la Sentencia T-760 durante las vigencias 2014 y 2015 la EPSI Manexka, NO cumplió con las obligaciones para asegurar la oportunidad de la atención, y de igual forma No cumplieron con la implementación de acciones de mejora, denotando por el contrario un alto riesgo en salud de la población afiliada al no contar con el acceso y oportunidad a los servicios de salud que requieren los afiliados, con mayor impacto en las poblaciones de especial atención y vulnerabilidad.

11. Se presenta afectación a los procesos del aseguramiento de la población afiliada, en razón a la captura de casi la totalidad de la planta directiva de la EPSI, dado que los cargos propios de las funciones misionales de la EPSI, a la fecha de la última visita, se encontraban siendo ejercidos por personas de los que no se entregó evidencia del tipo de nombramiento o vinculación con la vigilada por el cual se encontraban asumiendo dichas funciones, manifestando desconocimiento de las funciones, procesos y procedimientos de la vigilada para efectos de la entrega de la información solicitada por el grupo auditor.

12. Durante las vigencias Auditadas 2015 -2016 no se registró cumplimiento de acciones encaminadas a garantizar la oportunidad, suficiencia e integralidad en los procesos de autorizaciones y prestación efectiva de los servicios, lo cual mantuvo en riesgo a la población afiliada derivado de la no garantía de los servicios, con mayor impacto en la población de especial atención, vulnerable y con patologías de alto costo.

13. Se observa **exceso de gasto administrativo**, el cual supera el tope del 8% establecido en la ley 1438 de 2011. (\$522.826.000 vigencia 2015) (\$2.069.356.000 al primer trimestre de 2016).

14. Se evidenciaron **pagos no autorizados por Honorarios a Junta Directiva** (\$ 304.503.523).

15. Se encontraron por parte del vigilado prácticas Financieras Inseguras, para otorgamiento de Anticipos a proveedores, contraviniendo el manual de contratación de Manexka EPSI (Sumisalud de la Costa - \$1.178.406.962).
16. En la base de Autorizaciones, frente al suministro de los medicamentos a la población afiliada, el grupo auditor evidenció que la misma no cuenta con valor asociado que permita establecer si se están suministrando los medicamentos requeridos por los afiliados de la EPSI así como el valor de los mismos a efectos de efectuar la función de inspección, vigilancia y control sobre los recursos destinados para tal fin.
17. Cobros sin evidencia de la debida ejecución del contrato de capitación de la IPSI Manexka San Andrés, con una facturación radicada de enero a octubre de 2016 de \$10.057.267.024, con una causación en el periodo auditado de \$24.022.021.018 en registros contables.
18. Autorización de servicios de salud posteriores a la fecha de reporte de usuarios en la base de datos de fallecidos (\$733.928.031).

19. Estados Financieros no revelan información relevante sobre transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que sean cuantificables.
- E. RECOMENDACIÓN**
- Por lo anterior, teniendo en cuenta la situación operativa y financiera que se expone en el presente Concepto Técnico, lo cual implica la imposibilidad por parte de Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre “Manexka” de continuar ejerciendo su objeto social, y de conformidad con lo establecido en el numeral 17 del artículo 21 del Decreto 2462 de 2013, la Delegada para la Supervisión Institucional recomienda la adopción de alguna de las medidas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con la finalidad de proteger la adecuada y oportuna prestación de servicios de salud.”
- Que la Unión Temporal Auditoría Forense 024 -2016 presentó informe final de visita, en cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 206 de 2016, y, en concordancia con la comunicación 2-2016-099046 y los autos de visitas 000575 del 6 de octubre de 2016 y 000808 del 21 de noviembre de 2016, a continuación se relacionan los principales hallazgos:

#	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES	CUANTIFICACIÓN	PÁGINA HALLAZGO
1	Obligación de preparación de Estados Financieros bajo Principios de la Contabilidad Pública	<ul style="list-style-type: none"><li>• No se evidenció que se haya preparado, ni presentó el Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de cambios en la situación financiera ni del Estado Flujo de efectivo del 2015.</li><li>• La omisión de estos estados financieros, conlleva a que se revelen de una manera insuficiente o impropia, existiendo la imposibilidad de evidenciar errores importantes, vulnerando de esta manera el capítulo 9 – “NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS A LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES” del Plan General de la Contabilidad Pública, circulares e instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud e implica que las cifras de esta información financiera no sean confiables.</li></ul>	Indeterminada	140
2	Aprobación de estados financieros	La Asamblea General de Manexka EPSI viene incumpliendo su función de aprobación de estados financieros, toda vez que no hay evidencia de la aprobación de los Estados Financieros del 2015 en las Actas de Asamblea General (número 1 de 2015) y de Junta Directiva (Acta número 1 al 12 del 2015 y del No. 1 al 8 del 2016). El artículo 23 de los Estatutos de Manexka EPSI, al prever las funciones que de manera general corresponden al máximo órgano social establece en su numeral 6 “una de las funciones de la Asamblea General está la de examinar los informes tanto de los órganos de Administración y Vigilancia como los del Revisor Fiscal y aprobar o improbar los estados financieros del fin de ejercicio. Tales documentos se pondrán a disposición de los asociados en las oficinas de sede de la Asociación por lo menos 15 días antes de la reunión de la Asamblea”. Lo anterior denota prácticas financieras inseguras y omisión de control en el sector salud, donde se evidencia presunta vulneración a los Estatutos de Manexka EPSI.	Indeterminada	142
3	Preparación y presentación de notas a los Estados Financieros	Las notas a los estados contables básicos presentadas por Manexka EPSI en los periodos evaluados terminados en el año 2014 y 2015, son presentadas bajo normatividad del Decreto 2649 de 1993, señalando en su encabezado “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS”. Además, no revelan información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que sean materiales; la desagregación de valores contables en términos de precios y cantidades, así como aspectos que presentan dificultad para su medición monetaria que pueden evidenciarse en términos cualitativos, o cuantitativos físicos, los cuales han afectado o pueden afectar la situación de la entidad contable pública. Las notas a los estados contables básicos son de carácter general y específico, tal como lo describe el numeral 375 de las normas técnicas de contabilidad pública.	Indeterminada	143
4	Preparación y presentación de Estados de Situación Financiera de Apertura (ESFA)	No existe evidencia de la preparación y presentación del Estado de Situación Financiera de Apertura (por sus siglas ESFA) ni la adopción inicial en la Entidad en su programa contable, para que, de esta manera dé cumplimiento a la circular externa 003 y 004 de 2014, aun cuando la Entidad presenta un contrato celebrado y pagado con el señor Carlos Andrés Castellanos Brango, por valor de \$56.000.000. Conforme información recibida por parte de la Dra. Emma Cortés, Profesional Riesgos de la SNS, la Entidad no cumplió con los avances mínimos esperados, y no remitió información en el ID 7214072. El manual de contratación de la EPSI Manexka establece en su artículo 37.4 que para efectos de iniciar el proceso de contratación exige la constancia de idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área a contratar, no obstante se evidencia en el contrato número 003-E-2015, suscrito con el señor Castellano Brango Carlos Andrés, aprobado por la Junta Directiva según acta número 003 de 2015 para la Implementación Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), valor contrato \$56.000.000 que solo cuenta con experiencia profesional de 18 meses como auxiliar administrativo y auxiliar contable, más no acredita formación profesional como contador ni experiencia certificada en la implementación de NIIF en otras entidades.	Indeterminada	144
5	Ausencia de una estructura y cultura de control interno por parte de la Entidad	La Entidad no cuenta con una adecuada estructura y cultura de control interno, lo cual pone de manifiesto la posibilidad que se puedan materializar situaciones de riesgo frente a la ocurrencia de irregularidades administrativas, financieras y de gestión y que puedan afectar la estructura del SGSS y los resultados de la Entidad, hecho que no ha sido revelado por el Revisor Fiscal incumpliendo las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, contempladas en el artículo 7° de la ley 43 de 1990, con lo establecido en el artículo 209 del Código de Comercio y, en los casos que aplique, la Norma Internacional de Auditoría 400, relacionadas con la evaluación del sistema de control interno y de revelación plena.	Indeterminada	146
6	Ausencia de Control en el Suministro de Información sobre Afiliados (LMA)	En el mes de enero de 2015, se observa un movimiento inusual en el número de afiliados reportados en BDUA, ya que supera el promedio de los otros meses, lo que evidencia la ausencia de control por parte de la Entidad en el suministro de información, por lo cual fue requerida nuevamente por el grupo auditor sin que la Entidad hubiera entregado este nuevo requerimiento.	Indeterminada	155
7	Incumplimiento de la capacidad de afiliación autorizada.	La Entidad no está dando cumplimiento a la capacidad de afiliación autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud definidas en la resolución 264 de fecha junio de 2009 en donde se establece que se autoriza 175.000 afiliados de capacidad autorizada de la EPS del Régimen Subsidiado. Se consultó la información sobre usuarios afiliados correspondiente a la base de datos de LMA y se evidenció que la Entidad ha superado esta capacidad autorizada, especialmente para el mes de abril de 2015 fecha del primer corte de nuestra auditoría, considerando que la Superintendencia no ha generado un proceso de actualización de la información contenida en la página oficial acorde con solicitud oficial emitida por la Entidad para ampliación de capacidad de afiliación y que puede conllevar a una posible modificación de la capacidad autorizada en periodos posteriores a esta fecha.	Indeterminada	156
8	Registro de ingresos por recuperaciones de glosas en forma anticipada a su conciliación con la IPS.	A partir del movimiento de la cuenta de otras recuperaciones 48100809 y su dinámica de registro en Manexka EPSI se puede establecer que Manexka EPSI a partir de los movimientos de la cuenta de glosas por eventos está efectuando el registro de un ingreso en forma anticipada, no debida, al proceso de reconocimiento entre las partes originado en una conciliación de cuentas. Este proceso de registro debe efectuarse en forma diligente y profesional en donde media la conciliación de cuentas de glosas pendientes por reconocimiento por parte de la Entidad a los prestadores y de la cual se debe dejar constancia en acta suscrita entre las partes; documentación que fue omitida de entrega por la Entidad en los requerimientos de información realizados por la auditoría, como consta en actas según anexos, las cuales se constituyen en soporte para el ingreso de la conciliación de la cuenta de glosas. Posible falsedad ideológica en documento público. Estado Financiero. Adicionalmente que durante el periodo de enero a marzo de 2016, La Entidad efectuó la reversión de los ingresos por recuperaciones registrándolos como cuentas por cobrar en cabeza de cada uno de los prestadores de servicios, tal y como se describe en el auxiliar por tercero suministrado por la Entidad.	\$10,272,735,518	167



#	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES	CUANTIFICACIÓN	PÁGINA HALLAZGO
9	Incumplimiento del gasto administrativo autorizado y su adecuado registro.	Frente al reconocimiento de los costos por servicios de salud al cierre del 31 de diciembre de 2015, se observan registros en la cuenta 640207 – Contratos de capitación régimen subsidiado, que dichos registros corresponden a la causación de gastos de nómina, específicamente en la cuenta 640207710202 por un valor total de \$1.428.641.690. Posible peculado por aplicación oficial diferente de recursos de la Seguridad Social dada la utilización de recursos del 92% destinados al pago de la prestación de servicios de salud en el pago de servicios administrativos de la Entidad Vigilada. Posiblemente apropiación de recursos públicos a favor de terceros. Se verificaron los terceros que componen esta cuenta, se evidenció que corresponden a funcionarios de la EPSI quienes laboran en la parte administrativa y financiera, que no tienen ninguna relación con el costo de prestación directa del servicio de salud.	\$1,428,641,690	175
	Exceso de gasto administrativo que superan el tope del 8% establecido en la Ley 1438 de 2011	La EPSI Manexka presenta un incumplimiento del artículo 23 de la ley 1438 de 2011, la cual indica que el total de los gastos de administración no deben superar el 8% de valor de la UPC, se observa en todos los periodos de nuestro análisis que se superó el porcentaje de ingresos por UPC para la destinación específica en costos de salud, lo cual ubica a la Entidad por debajo de la destinación del 92% del ingreso para gastos en salud. Es importante tener presente que este resultado se debe ver afectado por el reconocimiento de gastos de personal en el costo de salud, lo cual puede evidenciar un mayor valor incrementado la destinación del ingreso en gastos para la administración del régimen subsidiado en un margen del 9.5% al 31 de diciembre de 2015.	\$522.826.000 (2015) \$2.069.356.000 (2016)	190
10	Pagos no autorizados por honorarios a Junta Directiva	Pagos a la junta directiva por honorarios con cargos al gasto cuenta 51114902, por conceptos adicionales como viáticos, transporte y servicio de cafetería que ascienden a \$304.503.523, de los cuales no hay evidencia por parte de la junta de aprobación cargos al gasto por conceptos adicionales como viáticos, transporte y servicio de cafetería.	\$304,503,523	190
11	Ausencia de control en el manejo de cuentas bancarias de la Entidad.	<b>Cuentas bancarias reportadas como activas, no reveladas en estados financieros de la EPSI.</b> • La cuenta corriente número 936041640-9 es reportada como activa por el entonces Director Financiero Rober Humberto Sierra Márquez; Sin embargo, no hay evidencia de su existencia en estados contables, ni reportes en archivo tipo 007. • Cuenta de Ahorros 28012593-1, Banco BBVA, es reportada como activa por el entonces Director Financiero Rober Humberto Sierra Márquez; Sin embargo, no hay evidencia de su existencia en estados contables, ni reportes en archivo tipo 007. <b>Cuentas bancarias inactivas no reportadas por la EPSI ni por las entidades bancarias.</b> En revisión física a las carpetas correspondientes a conciliaciones bancarias, se evidenciaron dos cuentas inactivas, (Banco Agrario de Colombia 0-2703-000195-5 y Banco BBVA 0200066713), las cuales no fueron reportadas en el oficio # A230-OF0A00-2016 emitido por el entonces Director Financiero Rober Humberto Sierra Márquez, ni por la Gerente del Banco BBVA Sucursal Chinú, señora Luz Mary Villadiego Medina, y por el señor Adalberto Cuadrado Gerente del Banco Agrario – San Andrés de Sotavento	Sin determinar	203
12	Ausencia de control en el manejo de cartera por recobros	Falta de control frente a la información detallada manejada por la Entidad, al presentar diferencias entre lo reportado en los estados financieros contra listados de cartera por edades, listado con el detalle de los recobros radicados, pendientes por radicar e informe de gestión. • Se observa en el archivo de cartera por edades en la cuenta cuentas por cobrar radicados a diciembre de 2015 (cuenta contable 141118) presenta dos registros por \$1.855.633.908 y que corresponden a ajustes por reclasificaciones, situación que puede estar causando sobreestimación de las cuentas por cobrar por estos valores, estos ajustes representan el 70% del total de la cuenta por cobrar por recobros radicados a diciembre de 2015. • En los recobros pendientes de radicar a diciembre de 2015 aparecen conceptos generales por un valor neto de \$337.571.017 cuyo concepto general es cuenta de cobro o reclasificación, no se especifica claramente el detalle de estas cuentas, incurriendo en posible sobreestimación de estas cuentas por cobrar. • Para los recobros radicados con corte a junio de 2016, los cuales según relación detallada de la Entidad y estados financieros valorizan \$11.945.886.103, se presentan en el detalle de la cartera por edades reclasificaciones por un valor de \$2.106.427.719 que equivalen al 18% del total por cobrar. La Entidad no entrega manual de tesorería, tampoco cuentan con política de provisión aprobada por Junta Directiva, entregan comunicado informando parámetros que aplican en la Entidad. Punto 5.10 solicitud de información	\$4,299,631,000	217
	Sobrevaloración de activos y afectación de la estructura patrimonial	Recobros con edades de más de 360 días incrementando riesgos de incobrabilidad de los mismos. Se identificó que la EPSI presenta como parte de sus activos en el rubro de deudores, recobros que presentan una antigüedad superior a 360 días, por un valor que asciende a \$1.875.633.908, situación que denota la existencia de posibles devoluciones o glosas realizadas por el ente territorial y Fosyga que no han sido objeto de ajuste en los estados financieros de la Entidad, posiblemente con el objetivo de mejorar los indicadores y las condiciones financieras de sus activos. De igual forma resulta inconsistente la información reportada por la Entidad referente a los recobros radicados y pendientes de radicar, ya que no se especifican claramente los periodos solicitados y que son objeto de la auditoría ni tampoco la naturaleza del recobro (pendiente radicación o radicado). Se realizó cuadro consolidado de la información que entregó la entidad, observando un total de recobros por \$14.135.478.321, cifra que difiere de la presentada en los estados financieros. La Entidad no cuenta con una política de provisión aprobada por Junta Directiva.	\$1,875,633,908	217
13	Prácticas financieras inseguras para el otorgamiento y posterior manipulación de la información de anticipos a proveedores.	El Manual de Contratación de la EPSI Manexka establece en su artículo 33 que no se permite el pago de anticipos en los contratos de suministro de medicamentos. En revisión a la cuenta 14201202 – Anticipos Régimen Subsidiado, se evidenció, un anticipo por valor de \$1.178.406.962 entregado a la Entidad IPS Sumisalud de la Costa S. A. S., Sociedad contratada para el suministro y dispensación de los medicamentos a los afiliados de la EPSI. La cuenta 14201201- “anticipos”, presentados por Manexka EPSI según estados financieros detallados por tercero al corte diciembre 31 de 2015 y junio 30 de 2016, presenta un saldo por la suma los cuales corresponden a la Entidad IPS Sumisalud de La Costa S.A.S., por la suma de \$1.178.406.962. La Entidad no cuenta con políticas de anticipos.	\$1,178,406,962	221
14	Ocultamiento de soportes documentales y financieros de la construcción Sede administrativa Manexka EPSI.	No se entregaron al Grupo Auditor los documentos originales que dan cuenta del proceso de contratación de la construcción de la Sede Administrativa de Manexka EPSI de San Andrés de Sotavento, toda vez que se manifestó al equipo auditor que se habían extraviados los soportes en manos de la señora Siria Sabina Pérez, exgerente de la Entidad y de la señora Senith de la Cruz, abogada, y quienes se encuentran privadas de la libertad, dicha información fue suministrada por el Director de Contabilidad (señor Rober Humberto Sierra Márquez , quien a la fecha se encuentra igualmente privado de la libertad) sobre una base de información de la cual la auditoría desconoce su origen pero que es fiel copia de un original según lo certificado por el mismo Director de Contabilidad en constancia emitida el 4 de noviembre de 2016, el cual se adjunta como anexo al hallazgo. Según esta certificación, indica que las fotocopias suministradas a esta auditoría (copias de identificación personal del contratista, documentos jurídicos del proponente, contratos y otros sí, pólizas, actas de inicio de obra, facturas del cliente, cuentas de cobro, órdenes de pago, comprobantes de egreso, y demás documentos inherentes a contrato), son recuperadas dada la gestión que él mismo realizó, tomadas de los documentos originales pertenecientes al contratista señor Andrey Montes Jaramillo. Frente a lo anterior, se evidencia que la Entidad tiene registrados por esta operación construcciones en curso por valor de \$2.007.394.016, sobre el cual no versa documentación soporte de la transacción ni del registro de pagos efectuados, de forma que permita validar su origen y/o procedencia de los recursos, o en su efecto si hay una indebida destinación de los recursos destinados al aseguramiento en salud de los afiliados de la EPSI en conceptos diferentes, tal como la construcción de bienes inmuebles. La Entidad ha omitido la entrega de la información solicitada por esta Auditoría para determinar la procedencia de estos recursos, así como la escogencia del contratista, la ejecución del proceso de contratación y los desembolsos asociados a dicho contrato. No se obtuvo evidencia válida y suficiente de la existencia de un inventario físico. La Entidad no realiza inventario periódico de la Propiedad Planta y Equipo, en el que evidencie su identificación o descripción, su ubicación, responsable, el costo, fecha de adquisición y vida útil estimada, entre otra información. Tampoco, se evidencia la existencia de un expediente físico de dichos activos la cual incluya (la ficha técnica, el historial, las adiciones o mejoras, el estado general del activo, el avalúo técnico comercial, las escrituras públicas, los certificados de tradición y libertad, el estado de cumplimiento de los impuestos). La Entidad ha omitido la entrega de la información solicitada por esta Auditoría para determinar la procedencia de estos recursos, así como la escogencia del contratista, la ejecución del proceso de contratación y los desembolsos asociados a dicho contrato.	\$5,873,672,216	223

#	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES	CUANTIFICACIÓN	PÁGINA HALLAZGO
15	Registro de compra y adiciones de la planta eléctrica y la planta de tratamiento como mejoras a la edificación de la EPSI para su posterior venta.	Entre enero de 2015 y junio de 2016, presenta adiciones en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo por valor aproximado de \$762.701.302, representadas principalmente en activos contabilizados bajo el concepto de Plantas Eléctricas y Plantas de tratamiento de agua potable; objeto de un avalúo. Con lo anterior puede evidenciarse que la Entidad ha registrado el valor de los avalúos mejorando sus indicadores de capital de trabajo y activos fijos y como ya se indicó, no ha realizado un inventario de activos fijos para determinar su propiedad y valor real, generando una sobreestimación en el valor de los mismos, situaciones que advierten la adopción de prácticas financieras no seguras y que dan indicios de manipulación de las cifras de los estados financieros. De otro lado, con el fin de verificar posibles irregularidades relacionadas con la venta o baja de activos fijos que afecten los intereses de la Entidad en forma adversa durante el período 2015 y 2016, se solicitaron las actas correspondientes a los activos dados de baja, para lo cual se recibió por parte de la Entidad fotocopia de las actas.	\$762.701.302	227
16	-Posible apropiación indebida de recursos por valor de \$600.000.000. -Posible omisión de control, posible administración desleal. -Posible favorecimiento a la IPS Manexka, quien es el comprador, en ocasión a las mejoras realizadas al activo dado por adecuaciones y mantenimiento por valor de \$240.000.000,00 -Inexistencia de registros contables de la transacción de venta. -Sobreestimación del valor de los ingresos en los estados financieros	Suscripción de una promesa de compraventa del bien inmueble ubicado en la calle 12 No 8-39 Barrio Buenos Aires, El 02 de septiembre de 2014, donde funciona la Sede del comprador IPS Manexka por valor de \$600.000.000,00., la junta directiva autoriza mediante Acta número 3 de fecha 11 de marzo de 2015, suscripción de un contrato para la adecuación y mantenimiento de dicho bien por valor de \$240.000.000; no obstante, que dicho bien ya estaba en proceso de venta seis meses antes. El 27 de abril de 2015, la Representante Legal de la EPSI Manexka, protocolizó la venta de este bien con la firma de la Escritura Pública número 153 de la Notaría Única del Circuito de San Andrés de Sotavento Córdoba por valor de \$600.000.000, es de anotar que el artículo segundo de esta escritura indica ... ” <i>Suma que el vendedor declara haber recibido a su entera satisfacción en manos del Representante Legal de Manexka IPS (...)</i> ”; No obstante, en los registros contables de la EPSI Manexka, no hay evidencia del ingreso de dichos recursos. Es de anotar que el valor de la venta, representa aproximadamente 12 veces el valor del activo, si se toma como referencia el certificado emitido por el Tesorero General del Municipio de San Andrés de Sotavento, con fecha 9 de abril de 2015 donde acredita que esta propiedad presenta un avalúo por \$49.722.000. Transacción significativa que además no presenta ninguna evidencia del origen de los fondos por parte del comprador. No hay evidencia en registros contables de manera expresa la transacción de venta. No hay evidencia que haya sido un bien dado en donación. De acuerdo a oficios entregados por la entidad ellos no han recibido ninguna donación. (Punto 2.16 requerimiento información).	\$840,000,000	229
17	Sancciones por pago extemporáneo de impuestos a vehículos.	Se pudo evidenciar que la Entidad al 19 de octubre de 2016, fecha en que se solicitaron los formularios del impuesto sobre vehículos automotores conforme solicitud de información adicional en el numeral 1.49, no había declarado y pagado los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015, toda vez que los formularios tienen fecha de cancelado y timbre de pago el 20 de octubre de 2016. Por lo cual debió cancelar un mayor valor del impuesto a cargo por sanciones e intereses de mora por valor de \$ 1.984.800 En revisión a los registros contables en los Estados financieros de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se evidenció la contabilización de la provisión correspondiente a los impuestos de vehículo que debieron ser pagados en los respectivos periodos, como tampoco la creación de una cuenta por pagar a la Gobernación por concepto de impuestos por pagar. Entidad a un detrimento patrimonial por sanciones e intereses por valor de \$1.984.800.	\$1,984,800	246
18	Manipulación en el reconocimiento de embargos judiciales en los Estados Financieros de la EPSI.	La Entidad, no registra las obligaciones correspondientes a los litigios y demandas correspondientes a Fundación María Reina Sincelejo, ni de César Augusto Londoño por valor de \$2.260.633.298 Con ocasión al embargo Judicial de Fundación Reina María de Sincelejo. No hay evidencia del registro contable en Cuentas de Orden del reconocimiento de las pretensiones a cargo de la Entidad por valor de \$1.600.000.000. - No hay evidencia de la obligación por parte de la Entidad de registrar contablemente el pasivo estimado reconociendo a la Fundación María Reina la suma de \$1.600.000.000. - No hay evidencia que la Entidad haya registrado contablemente la obligación por valor de \$1.600.000.000 reclasificando el pasivo estimado a un pasivo real. - Según registros contables, la operación se legalizó activando una cuenta por cobrar (14250302 – Depósitos Judiciales) por valor de \$1.600.000.000 y acreditando por el mismo valor el banco y no a través de la cuenta por pagar. • En cuanto al tercero Londoño Molina César Augusto, el saldo pendiente de pago por embargos judiciales asciende a \$660.633.298 y de los cuales tampoco existen registros contables que acrediten esa deuda.	\$2,260,633,298	255
19	Ausencia de reporte de obligaciones Legales en Formato Tipo 017	La Entidad, no reporta las obligaciones correspondientes a los litigios y demandas correspondientes a Fundación María Reina Sincelejo, ni de César Augusto Londoño por valor de \$2.260.633.298, ni en Formato Tipo 017. No se reporta Formato Tipo 017, en ningún período eventos con mora superior a los 90 días por valor de \$91.458.668, los cuales si se cuentan con saldo en estados financieros a 31 de diciembre de 2015.	\$ 2,260,633,298	256
20	Inconsistencias en información de Embargos y procesos judiciales reportados por la Entidad	Se estableció que no fueron reportados la totalidad de los procesos judiciales en los que es parte la EPSI. A continuación, la relación de procesos localizados en la ciudad de Sincelejo y Montería por jurisdicciones, donde Manexka EPSI, es el demandado.	Sin determinar	257
21	Utilización de intermediarios para la organización y administración de la red de prestadores de servicios, contraviniendo literal d) del numeral 1 del artículo 2.5.2.3.14 del Decreto 780 de 2016.	Contrato de Prestación de Servicios CPS- No. 01 del 04-01-2016 suscrito entre Montes Quality Group S. A. S. y Manexka EPSI por \$2.384.978.000. Se evidencia en la Cláusula Sexta a folio 4 y siguientes del citado contrato dentro de las obligaciones específicas de la sociedad Montes Quality Group S. A. S. que esta se obliga entre otros puntos, a: - Verificar la oportunidad del servicio ofrecido a los usuarios de Manexka EPSI - Verificar la calidad de las historias clínicas según las normas legales vigentes. - Realizar visitas durante la hospitalización del paciente y verificar que los servicios ofrecidos a los usuarios se presten con la suficiencia, pertinencia y pericia necesarias, según los protocolos aceptados por la comunidad científica mundial o los protocolos adoptados por la entidad que presta el servicio. - Determinar con la verificación el cumplimiento de las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad decreto 1011 de 2006. - Realizar la verificación de derechos a los afiliados a través de los mecanismos establecidos por la EPSI para tal fin. Lo anterior evidencia Indebida gestión y control del proceso de Aseguramiento en la EPSI. Incumplimiento de los requisitos de habilitación concernientes a la Capacidad tecnológica y científica para EPS-S establecidos en el numeral 4 del Artículo 2.5.2.3.8 del Decreto 780 de 2016.	\$ 2,384,978,000	263
22	Celebración indebida de contratos establecido en el artículo 409 de la ley 599 del 2000. – C. P. C., y el tipo penal de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales artículo 410 del C. P. C. Artículo 325-B. Código Penal Colombiano. -Omisión de Control en el Sector de la Salud.	El Manual de Contratación de la EPSI Manexka establece en su artículo 37.4 para efectos de iniciar el proceso de contratación exige la constancia de idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área a contratar, no obstante se evidencia que el contrato suscrito con Montes Quality Group S. A. S. se celebró el 5 de enero de 2015, cuando solo habían transcurrido 12 días calendario desde la constitución de la sociedad ante la Cámara de Comercio de Montería, lo cual ocurrió según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Montería de fecha 25 de noviembre de 2016, el 24 de diciembre de 2014. En la carpeta no se evidencia existencia de invitación o solicitud de oferta con el lleno de los requisitos contenidos en el numeral 37.7 del Manual de Contratación de la EPSI. No se evidencia en la carpeta del contrato celebrado con Montes Quality Group S. A. S., pluralidad de ofertas ni análisis de las mismas para la contratación del servicio de auditoría de cuentas médicas en cumplimiento del artículo 37 y 61.2 del Manual de Contratación de la EPSI.	\$ 2,082,124,000	264
23	Celebración indebida de contratos establecidos en el artículo 409 de la Ley 599 del 2000. – C. P. C., y el tipo penal de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales artículo 410 del C. P. C. Artículo 325-B. Código Penal Colombiano. -Artículo 325-B. Código Penal Colombiano. -Omisión de Control en el Sector de la Salud.	En el Contrato No. S-CE-005-13 suscrito entre IPS Sumisalud de la Costa S.A.S. y Manexka EPSI de fecha 1º de enero de 2013 se observa que el mismo se celebró antes de que la sociedad contratista se registrara ante la Cámara de Comercio de Sincelejo, lo cual ocurrió el 24 de enero de 2013 bajo el número 016558 del Libro IX, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Sincelejo de fecha 25 de noviembre de 2016. El 1º de enero de 2013, se suscribió contrato de suministro y dispensación de medicamentos entre la IPS Sumisalud de la Costa S.A.S. y Manexka EPSI. Toda vez que entre la fecha de constitución de la IPS y la suscripción del contrato no superan los 23 días, se evidencia claramente que no era posible que la IPS Sumisalud de la Costa S.A.S., acreditara idoneidad ni experiencia directamente relacionada con el objeto de dicho contrato.	Indeterminada	265



#	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES	CUANTIFICACIÓN	PÁGINA HALLAZGO
		Con el fin de validar los servicios habilitados para esta IPS, se realizó consulta en la página “Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)” del Ministerio de Salud, para lo cual no se encontró registro alguno de habilitación.		
24	Celebración indebida de contratos establecidos en el artículo 409 de la Ley 599 del 2000. – C. P. C., y el tipo penal de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales artículo 410 del C. P. C. Artículo 325-B. Código Penal Colombiano. -Omisión de Control en el Sector de la Salud.	El artículo 61.2 del Manual de Contratación de la EPSI establece que para efectos de la contratación del suministro de medicamentos deben mediar mínimo 3 ofertas, lo cual no se evidenció en la carpeta del contratista IPS Sumi-salud de la Costa S.A.S. En las carpetas de los contratos por capitación celebrados con las diferentes Entidades prestadoras de servicios de salud no se evidencia cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 38 del Manual de Contratación de la EPSI No se evidenció dentro de la carpeta del contratista IPS Sumisalud de la Costa S.A.S. que el proceso de selección del contratista para el suministro de medicamentos para los afiliados de la EPSI haya tenido un proceso de prese-lección con pluralidad de oferentes y que el mismo hubiera sido publicado en la página web de la Entidad ni en la cartelera institucional.	Sin determinar	266
25	Ausencia de registro y trazabilidad de procedimientos estéticos con el prestador Oftalmólogos Asociados de Sucre.	Conforme al informe de ejecución del contrato de auditoría de cuentas médicas elaborado por el contratista Montes Quality Group, con corte de enero a octubre de 2016, en el Folio 38 indican la existencia de facturación de proce-dimiento estético Mamoplastia Reductora y Blefaroplastia en el periodo de radicación de julio de 2016 por parte del prestador Oftalmólogos Asociados de Sucre. Asimismo, se evidencia facturación de procedimientos estéticos con autorización de la EPS Manexka para tales servicios realizados. Es de anotar, que para este contrato no se realizó el proceso de trazabilidad, no se solicitó contrato de este prestador por cuanto no existen registros contables, ni registros de radicaciones, ni de autorizaciones, ni glosas, tampoco se encuentra en la relación de contratos entregados.	Indeterminada	267
26	<b>Celebración de contratos de capitación incumpliendo el Manual de Contratación de la EPSI y en el artículo 409 de la ley 599 del 2000. – C. P. C., y el tipo penal de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales Artículo 410 del C. P.C. Art. 325-b Omisión de Control en el Sector de la Salud. C. P.C.</b>	En visita realizada a las instalaciones de la EPSI el 23, 24 y 25 de noviembre de los corrientes, se solicitó a la doctora Diana Bertel Pestana se sirviera suministrar al grupo auditor carpetas con los originales de la totalidad de los contratos por capitación celebrados por la EPSI durante las vigencias 2015 Y 2016, solo fueron entregados al grupo auditor las carpetas correspondientes a los siguientes contratos: • ESE Hospital San Rafael de Chinú • IPSI Chima, Ese Camú Canalete • ESE Camú Momil • ESE Unidad de Salud San Francisco de Asís de Sincelejo • ESE Hospital Local de San Onofre • ESE Centro de Salud San José de Toluviejo • ESE Hospital San Francisco de Ciénaga de Oro • ESE Camú Iris López Durán de San Antero • ESE San José de Tierralta • ESE Hospital San Andrés Apóstol. En las carpetas de los contratos por capitación suministradas no se evidencia cumplimiento de los requisitos con-tenidos en los numerales 12 a 28 del artículo 38 del Manual de Contratación de la EPSI y parágrafo primero del artículo 2.3.2.1.14. del Decreto 780 de 2016. No obstante, en el informe de ejecución del contrato de auditoría de cuentas médicas elaborado por el contratista Montes Quality Group, por el periodo de análisis de enero a octubre de 2016, se evidencia la existencia de múltiples contratos por capitación celebrados en la vigencia 2016 y no reportados al grupo auditor por la funcionaria de la EPSI, entre los que se cuentan el contrato con la IPSI Manexka San Andrés de Sotavento, sobre la cual no se aporta documentación soporte, y de acuerdo con el análisis realizado por el Grupo Auditor se han causado en la cuenta de costos para la IPSI Manexka durante el periodo de auditoria de enero a diciembre de 2015, un valor total de \$138.882.871.484 y para el periodo de enero a junio de 2016 un valor total de \$21.629.51.609.	Indeterminada	267
27	<b>Autorizaciones médicas con Prestadores de Servicios Médicos sin costos asocia-dos.</b>	Para el tercero Sumisalud de la Costa, entre enero y diciembre de 2015, el tercero, no presenta evidencia de auto-rizaciones donde se pueda validar el valor del servicio autorizado y al mes de junio de 2016, el valor de costo del servicio es de \$120 (ciento veinte pesos). Los archivos entregados por la Entidad correspondientes a la base de datos con el resultado del proceso de auditoría de cuentas médicas el cual incluye número de facturas, nombre del proveedor, número de autorización, fecha de autorización, valor autorizado, valor glosado, tipo de glosa, estado de la glosa, aprobación final, clase de contratos, y número de contratos, entre otros, no contenía información alguna. Por lo que tampoco se pudo validar la veraci-dad de la información reportada. Ver Anexo No. 37	Indeterminada	264
28	Favorecimiento en la contratación por capitación con Montes Quality Group.	A folio 5 del informe de ejecución del contrato de auditoría de cuentas médicas elaborado por el contratista Montes Quality Group, con corte de enero a octubre de 2016, llama la atención que el principal facturador por Capitación sea la IPSI Manexka San Andrés, con una facturación radicada de enero a octubre de 2016 de diez mil cincuenta y siete millones doscientos sesenta y siete mil veinticuatro pesos (\$10.057.267.024) moneda corriente, facturación muy superior a la generada en el mismo periodo de tiempo en instituciones de III nivel de complejidad en la misma zona de influencia, como es el caso de la Clínica Especializada la Concepción, tal y como se evidencia a folio 12 del citado informe. Es de anotar que en el informe se observa que esta IPSI tiene causado en el periodo auditado 24.022.021.018 en registros contables.	\$ 10,057,267,024	272
29	<b>Autorización de servicios de salud posteriores a la fecha de reporte del usuario en la base de datos de fallecidos.</b>	Se cruzaron las bases de datos de autorizaciones entregada por Manexka EPSI, con la base de datos de personas fallecidas emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como resultado de este cruce se identificaron 1.479 autorizaciones por valor de \$733.928.031 emitidas a 513 afiliados posteriormente a la fecha de su fallecimiento, lo que denota posible desviación de recursos del SGSSS mediante el pago de servicios autorizados y no prestados a los afiliados de la vigilada.	733,928,031	268
30	<b>Contratación indebida del Proceso de Convergencia NIIF.</b>	Contratación personal que no acredita idoneidad para el desarrollo del objeto del contrato, aprobado por Junta Directiva según Acta No. 003 de 2015. – Contrato No. 003-E-2015, Castellano Brango Carlos Andrés, contratado para la Implementación Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), valor contrato \$56.000.000. De conformidad con lo dispuesto por el manual de contratación interno, la Entidad puede contratar directamente la persona natural o jurídica que esté en capacidad y cuente con el perfil para ejecutar el objeto y la necesidad del servicio, siempre y cuando demuestre la idoneidad y experiencia directamente relacionada del área de que se trate. Según hoja de vida del contratista, cuenta con la siguiente experiencia Profesional: Auxiliar administrativo, auxiliar contable, auxiliar de auditoría. Tiempo de experiencia profesional, 18 meses. No hay evidencia de la ejecución de contrato, toda vez que no hay evidencia de registros contables ni balances iniciales en un programa contable, pese a certificación del Director de Contabilidad de haber llevado a cabo el contrato. Teniendo en cuenta la anterior situación contractual, se infiere que los administradores de la EPSI Manexka, po-drían verse incurso en los tipos penales consagrados en los artículos 325 B y 410 de la Ley 599 del 2000. – Código Penal. “Artículo 325 B. <i>Omisión de control en el sector de la salud.</i> El empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud, que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, incurrirá, por esa sola conducta, en la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 599 de 2000.” “Artículo 410. <i>Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.</i> Modificado por el artículo 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años”.	\$ 56,000,000	280

#	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES	CUANTIFICACIÓN	PÁGINA HALLAZGO
31	Limitación en el alcance y calidad en la entrega de la información.	Acorde con el desarrollo del trabajo de auditoría forense y dando alcance a las limitaciones expuestas en el capítulo 5.6. Limitación de alcance, se observa que la Entidad no entregó a la auditoría forense 39 requerimientos los cuales se encuentran solicitados en el Auto N° 575 y Oficio N° 2-2016-099046 con archivo adjunto de Excel: Requerimiento información Manexka EPSI.xlsx. De acuerdo a lo anterior, se observa incumplimiento de Manexka EPSI” en suministrar la información en la forma que sea exigida, garantizando la confiabilidad de la misma, así como los soportes documentales requeridos para la realización de la auditoría. Es de resaltar que el proceso de auditoría se vio obstaculizado permanentemente por los funcionarios de la EPSI debido a la entrega de información en forma incompleta, tal como quedó consignado en las actas de visita de fechas octubre 18, octubre 21, octubre 31 y noviembre 4 de 2016. El 15 de noviembre de 2016 aún había información y documentación pendiente de entrega por parte de la EPSI, la cual se considera como de gran importancia para la conclusión de los procedimientos de auditoría, por lo cual y de acuerdo a su naturaleza, requerirían de una reapertura de visita. Entre la información solicitada no suministrada estaban los archivos de la base de datos con el resultado del proceso de auditoría de cuentas médicas el cual debía incluir: No. de Facturas, nombre del proveedor, No. de autorización, fecha de autorización, valor autorizado, valor glosado, tipo de glosa, estado de la glosa, aprobación final, clase de contratos, y No. de contratos, entre otros.	Indeterminada	281

Que adicionalmente, la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos, en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia de supervisión basada en riesgos, produjo informe técnico, en el cual concluye:

“Una vez analizados los aspectos reseñados en los numerales anteriores, respecto de Manexka EPS se puede manifestar lo siguiente:

1. Riesgo legal

Con base en la información reportada por “Manexka EPSI” mediante el Sistema Recepción y Validación de Archivos (RVCC), en cumplimiento de la Circular Única, así como la información de procesos administrativos del Sistema de Procesos Administrativos de la SNS (SIAD), se concluye que actualmente se configura un riesgo legal derivado de las eventuales pérdidas asociadas a sanciones interpuestas por la Superintendencia Nacional de Salud o procesos en contra instaurados por autoridad competente frente a incumplimientos relacionados con la atención médica, en el marco de los Planes de Beneficio.

La SNS en ejercicio de sus facultades de Inspección, Vigilancia y Control puso en conocimiento tanto de la Fiscalía General de la Nación en comunicación radicada el 23 de mayo de 2015 e identificada con NURC 2-2016-046060, como de la Contraloría General de la Nación mediante comunicación radicada el 31 de mayo de 2016 identifica al interior de la SNS con NURC 2-2016-046650, una serie de presuntas irregularidades relacionadas con los recursos que se transan entre Manexka EPSI y sus proveedores, así como los orígenes y las fuentes de financiación de las operaciones que respaldan algunas de las cuentas que hacen parte de sus estados financieros.

2. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT

Con el fin de detectar circunstancias o características particulares de las personas que componen la Alta Gerencia y Miembros Principales de Junta Directiva de Manexka EPSI, que conlleven una posible vinculación o correspondencia con operaciones sospechosas en materia de LA/FT, procedió verificación en la herramienta Hoja Electrónica de Control Compliance - información – Sarlaft. Sin embargo, no se encontró señal de alerta en relación con las circunstancias y características de las personas consultadas que hacen que exista una mayor posibilidad de correspondencia respecto de operaciones sospechosas de LA/FT.

Si bien actualmente no figuran antecedentes en materia de sanciones vigentes en la Procuraduría General de la Nación y responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República, ni antecedentes de delitos o judiciales, entre otros, actualmente pesan denuncias expuestas públicamente<sup>1</sup>, contra el Gerente de la EPS José Gerónimo Roqueme y la ex Gerente Siria Sabina Pérez Riondo, a quienes se les imputan los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y privado, falsedad ideológica y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado en conexión con la defraudación en 2014 de dineros de la salud de la etnia Zenú de Córdoba y Sucre, por más de 40 mil millones de pesos<sup>1</sup>.

Para finalizar es importante mencionar que Manexka EPSI no ha cumplido ninguna de las instrucciones contenidas en la Circular Externa 009 de 2016, a saber:

Reporte del Archivo Tipo 192, Oficial de cumplimiento

Reporte del Archivo Tipo 191, Políticas de prevención frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Reportes de Transacciones Individuales, Transacciones Múltiples u Operaciones Sospechosas a través del Sirel, sistema de reporte de la UIAF, para los meses de enero y febrero de 2017.

3. Riesgo reputacional

La EPS presenta problemas relacionados con la operatividad y disponibilidad de la red de prestación de servicios, así como su capacidad resolutive para los procesos de atención; evidenciado en que el principal motivo por el cual los usuarios interponen reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud es la restricción en el acceso a los servicios de salud, el cual presentó aumento en cada uno de los años analizados, presentándose un mayor aumento entre los años 2015 y 2016, llegando a doblar la cifra de reclamos.

Se evidencia que los reclamos presentados por los usuarios según patología se concentran en las enfermedades maternoinfantiles, las cuales presentaron una tendencia estable para los dos semestres del año 2016 con 3 casos cada semestre. Seguidas se ubican las

enfermedades crónicas no transmisibles cardiovasculares con un aumento significativo para el año 2016.

4. Riesgo en salud y operativo

Manexka EPSI presenta un comportamiento distinto al esperado en los indicadores analizados, evidenciando posibles fallas que deben ser consideradas por la EPS a fin de establecer los correctivos necesarios y así evitar la materialización de riesgos. A continuación, los principales hallazgos:

Tanto la concentración de población adulta joven afiliada a Manexka EPSI (entre 15 y 29 años, n=59.503), como los resultados de indicadores de promoción y prevención, particularmente los relacionados con salud sexual y reproductiva sugieren que se debe enfatizar en prácticas saludables de autocuidado para la prevención de enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles (nutrición, ejercicio, salud mental, entre otros) de la población afiliada; adicionalmente, los casos de transmisión de VIH y la baja cobertura de tamización en gestantes, son un indicador para reforzar las acciones de detección temprana por parte de la entidad.

Revisten especial importancia, los menores de 5 años que en Manexka EPSI que es de 18.913 y a los cuales están dirigidas diversas acciones de protección específica y detección temprana, a fin de disminuir los casos de mortalidad infantil derivada de condiciones nutricionales y enfermedades transmisibles que pueden ser prevenibles.

La patología más frecuente de reclamación por riesgo de vida fue cáncer, mostrando para el año 2016 un aumento de 3,0 veces con respecto al año anterior. Para los dos semestres de 2016, se mantuvo el número de reclamos realizados por los usuarios. En general para el primer semestre 2016 se presentó un aumento de reclamos con riesgo de vida según patología con respecto a periodos anteriores.

Se alerta frente a las coberturas de detección de cáncer de cuello uterino, al observar bajos porcentajes en todos los periodos (66.7% de cumplimiento en el primer semestre de 2015), lo cual evidencia posibles debilidades en el desempeño de los servicios de salud que oferta la EPS mediante su red prestadora, lo cual, a su vez genera altos costos en el sistema de salud en el cubrimiento de la atención de estadios avanzados del cáncer.

Aumento de tiempos de oportunidad para la asignación de citas en la consulta de Ginecobstetricia: 3.95 días en 2015-II vs 7.11 días en 2016-II. Lo anterior puede llevar a la EPS a presentar problemas de calidad en la atención durante todo el proceso de gestación (controles prenatales y atención del parto). Esto requiere evaluar disponibilidad de servicios de ginecobstetricia dentro de la red de prestadores y adicionalmente la disponibilidad de insumos básicos para la resolución oportuna de urgencias obstétricas, articulación institucional, suficiencia de red de referencia y contrarreferencia.

Frente a lo anterior, MANEXKA EPSI muestra una clara exposición a la materialización de factores de riesgos en salud – resultados en salud y operativos como los siguientes:

MANEXKA EPSI no realiza reporte de 9 Indicadores de Resolución 1446 de 2006, para el primer semestre de 2016.

MANEXKA EPSI no cuenta con estrategias de captación temprana de la población gestante con coberturas para el 2015 y 2016 por debajo del 41%. Como consecuencia y asociado a esta baja captación, se evidencia que la cobertura de exámenes de tamizaje de enfermedades de transmisión sexual no supera el 63% para VIH, Sifilis y Hepatitis B, traducándose esto en gestantes de alto riesgo con una probabilidad importante de requerir manejo en alto nivel de complejidad y con tasas de Mortalidad y Morbilidad materno-perinatal importantes.

MANEXKA EPSI no evidencia dentro de sus indicadores de Impacto la implementación adecuada de su programa de Atención Materno-Perinatal.

5. Riesgos financieros

Persiste a la fecha, incertidumbre respecto a la calidad sobre la información transmitida, por lo que es relevante mencionar que este análisis se efectúa la información reportada por la entidad en el Sistema de Recepción y Validación de Archivos (RVCC), de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual en cualquier momento puede ser sujeta de modificación dado que una de las actividades propuestas por la entidad en el plan de acción presentado, en el marco de la Medida de Vigilancia Especial ordenada a través de Resolución 2262 del 4 de agosto de 2016, se enfoca en un saneamiento contable en cuentas de balance y estado de resultados.

La Resolución 1052 del 2013 que modifica la Resolución 2094 de 2010, por medio de la cual se establece el cálculo de Margen de Solvencia, para las entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado, busca acreditar y mantener el margen de solvencia definido en el Decreto 3556 del 2008 artículo 2°, que le permita a la entidad responder de forma adecuada y oportuna sus obligaciones con terceros, sean estos proveedores de bienes o prestadores de servicios y los usuarios en los términos establecidos en el Decreto 882 de

<sup>1</sup> Fuente Diario El Heraldo 16 de noviembre de 2016. <https://www.elheraldo.co/judicial/desarticulan-banda-que-defraudo-dineros-de-la-salud-de-la-etnia-zenu-302645>  
<https://www.elheraldo.co/magdalena/juez-adelanta-audiencias-contra-banda-que-defraudo-dinero-de-salud-de-los-zenu-302683>  
<https://www.elheraldo.co/sucre/la-dijin-captura-funcionarios-de-la-eps-manexka-en-sincelejo-y-cordoba-302321> (15 de noviembre de 2016).



1998. Según el cálculo efectuado a la EPSI MANEXKA, a noviembre del 2016, la entidad muestra un deterioro en el indicador mostrando una Insolvencia de \$6.272 millones.

El deterioro mostrado entre diciembre del 2015 y noviembre del 2016, es atribuible a que el pasivo de la entidad crece en un 132%, mientras que el crecimiento del activo es del 70%. Dicho comportamiento fue generado por el cambio en las Provisiones por Obligaciones Potenciales que, de acuerdo a lo manifestado por la entidad en comunicación identificada con NURC I-2016-046143, se compone de glosas por evento y recobros por capitación.

A noviembre del 2016, la entidad posee un capital mínimo \$3.455 millones, inferior en \$949 millones, al patrimonio esperado \$4.309 millones. Lo que la lleva al incumplimiento de la condición financiera. Las variables con mayor impacto sobre este indicador son: el capital fiscal, el cual aumenta, mejorando los resultados, pero no es suficiente para absorber la pérdida del ejercicio lo que genera el deterioro del indicador.

No se cuenta con una información en las condiciones previstas de la Ley 1122 de 2007 artículo 37 numeral 6, que incluye “la información como uno de los ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control para el ejercicio de las funciones atribuidas en la Superintendencia Nacional de Salud, señalando que este consiste en “Vigilar que los actores del Sistema garanticen la producción de los datos con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia”.

Que en virtud de lo anterior, el Superintendente Delegado para la Supervisión de Riesgos, recomienda:

“De acuerdo con las diferentes categorías de riesgo descritas para MANEXKA EPSI, se evidencia una alta exposición de la población asegurada a riesgos en salud, operativos y financieros, principalmente; en virtud de la cual, se recomienda la adopción de la medida a que haya lugar, según lo dispuesto en los artículos 114 y/o 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por los artículos 19 al 20 de la Ley 510 de 1999, teniendo en cuenta todos los criterios técnicos complementarios emitidos por las diferentes dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de las funciones establecidas en el Decreto 2462 de 2013”.

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de esta Superintendencia, en ejercicio de la facultad de seguimiento y monitoreo a las entidades vigiladas bajo medida especial, concluyó lo siguiente:

#### “CONCLUSIONES

Una vez analizado el informe de Plan de Acción y en concordancia con el informe del contralor y la información reportada por la Entidad podemos manifestar que:

A diciembre de 2016, MANEXKA EPS-I no cumple con los requisitos exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud en cuanto a la formulación y el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción, al revisar la matriz MEFT 14 del plan de acción y su documento complementario, se evidencia que hay varios hallazgos para los cuales la vigilada apenas propone actividades preliminares de diagnóstico, sin que establezca acciones concretas para enervar las causales que dieron origen a algunos hallazgos.

La carencia de información acerca de las causales de varios de los hallazgos es preocupante, si se considera que no se trata de una EPS-I nueva, sino de una entidad que lleva varios años de trayectoria en el mercado asegurador de servicios de salud y, que por lo tanto, debería tener detectadas las falencias mencionadas en los hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud con anterioridad a la fecha de adopción de la medida de vigilancia especial.

Los estados financieros de MANEXKA EPSI, no muestran razonablemente la realidad económica de la EPS, teniendo en cuenta que múltiples partidas presentan subestimación en sus cifras (Cuentas por pagar a prestadores de servicios de salud, costos en salud, provisiones de deudores, provisiones de servicios médicos, etc.).

Se evidencia negligencia desde el punto de vista administrativo por parte de la entidad vigilada cuando reconoce dentro de las causales de algunos hallazgos que no habían remitido informes de seguimiento a la Supersalud porque “la EPS no había conformado un equipo para dar cumplimiento con las obligaciones normativas (...)”, o cuando reconocen la “ausencia de un modelo de gestión del riesgo en salud con enfoque preventivo y diferencial que permita intervenir oportunamente los riesgos detectados y evite costos financieros y sociales por el manejo tardío de enfermedades”.

#### Componente Financiero

• Manexka EPSI, incumple a corte 30 de noviembre de 2016 con el patrimonio mínimo que debe acreditar de conformidad con el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 100 de 1993, el literal C del artículo 14 de la Ley 691 de 2001, y el artículo 2.5.2.4.4 del Decreto 780 de 2016, toda vez que presenta un déficit de patrimonio mínimo de aproximadamente \$-949 millones, pese a que en sus estados financieros existen partidas sin contabilizar que aumentarían ostensiblemente el defecto indicado.

• A corte 30 de noviembre MANEXKA EPSI, presenta incumplimiento del margen de solvencia que debe acreditar para asumir sus obligaciones, teniendo en cuenta que presenta déficit en el Margen de Solvencia por valor de \$6.272 millones e incumpliendo con el requisito de habilitación financiera para Entidades Promotoras de Salud Indígenas consagrado 2.5.2.4.1.1 Decreto 780 de 2016.

• MANEXKA EPSI, presenta a 30 de noviembre de 2016, en la cuenta de efectivo partidas conciliatorias superior a 720 días de antigüedad, adicionalmente existe restricción en el manejo de recursos de la cuenta maestra del régimen subsidiado del Banco BBVA de la EPSI, toda vez que se encuentra embargada.

• Las pérdidas acumuladas en el presente ejercicio por valor de \$4.851 millones inciden en el defecto patrimonial observado.

• La provisión de deudores (cuentas por cobrar), se encuentra subestimada, teniendo en cuenta que existen aproximadamente \$6.460 millones de pesos en recobros con vencimiento superior a 720 días sin que curse ningún proceso jurídico.

• La cuenta Recuperaciones durante la vigencia 2015 ascendió a \$13.203.298.369, a corte 30 de noviembre sólo suministró los soportes que evidencia la aceptación de los prestadores que concedieron descuentos financieros, y aceptación de glosas a la Entidad, por valor de \$3.013 millones de pesos, sin soportes y pendientes por justificar \$10.190 millones de pesos que corresponden al 22% del valor total de los ingresos por recuperación registrados.

• MANEXKA EPSI presenta una subestimación de costo médico por valor de \$16.000 millones de pesos aproximadamente e inadecuada causación contable del costo al registrar las partidas tiempo posterior a la radicación de la factura por servicios médicos.

• Las cifras reportadas en cumplimiento de la Circular 030 de 2013, por Manexka EPSI, como Entidad Responsable del Pago ERP, con corte a septiembre 30 de 2016, refleja \$5.727.912.037 pesos, mientras que las Empresas Beneficiarias del Pago EBP, la suma de \$115.866.290.951 pesos, lo que evidencia la ineficiencia en el proceso de registro de facturación por parte de la EPSI.

• La entidad no cuenta con un Sistema de Control Interno confiable que asegure la preparación de los Estados Financieros y el registro de las transacciones, lo que muestra deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control al sistema de información y en la protección de los recursos de la Entidad, en la administración del riesgo, con carencia de mecanismos de autocontrol y autogestión que lleven a garantizar la eficiencia, la eficacia y economía en todas las operaciones.

• El aumento del Capital de la EPSI MANEXKA, que a diciembre de 2011 pasó de tener un capital fiscal de \$843 millones a \$7.562 millones en diciembre de 2015, no ha sido debidamente sustentado.

• Las operaciones que sustentan la cuenta de edificaciones en el Balance de la EPSI MANEXKA, la cual asciende a la suma de \$4.016 millones, sobre los cuales esta Superintendencia ha solicitado la información relacionada con la manera como se financió la adquisición no ha sido adecuadamente documentada.

#### Conclusiones Componente técnico-científico

• Las PQR, presentan un incremento en un 130,6% con respecto al año 2015. El macromotivo con mayor participación porcentual corresponde a “restricción en el acceso a los servicios de salud”, con una participación del 74.1%, seguido por “insatisfacción del usuario con el proceso administrativo” (16,5%) y “deficiencia en la efectividad de la atención en salud” (8,1%), situaciones que impiden un adecuado proceso de atención en salud en sus diferentes fases (diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), con miras al mejoramiento de la condición de salud y calidad de vida del afiliado, y que además entorpece la eficiente gestión del riesgo en salud del asegurador.

• Con respecto al hallazgo “incremento de a tasa de traslados de usuarios desde la EPSI” que motivó la resolución inicial. Todavía no se evidencian resultados de acciones concretas adelantadas por la EPS-I para subsanar este hallazgo durante el tiempo que lleva en medida preventiva de vigilancia especial.

• Continúa presentándose la sobreutilización de la capacidad de afiliación autorizada en los departamentos de Córdoba (119,87%) y Sucre 121,93 con corte a 30 de noviembre de 2016.

• No existe evidencia reportada por MANEXKA EPSI en cumplimiento del plan de acción para el cumplimiento de la suficiencia de red en los diferentes niveles de atención, con especial énfasis en los servicios alta complejidad: (Hematología Oncológica, Oncología Pediátrica, Radioterapia, Hematología, Quimioterapia, Nefrología, Diálisis, Inmunología, Reumatología, Laboratorio Clínico de Alta Complejidad); aspecto que coloca en alto riesgo, en especial la salud de la población con patologías de alto costo”.

• Persisten graves deficiencias de la entidad vigilada en el cumplimiento de indicadores de gestión relacionados con las actividades de salud sexual y reproductiva, en los indicadores en salud pública trazadores de Morbimortalidad para ciclo de vida primera infancia, en los indicadores de salud materna y en las Coberturas de los Programas de Protección Específica y Detección Temprana, los cuales ponen en riesgo la salud de la población de usuarios afiliados a la EPS-I. Entre los cuales podemos mencionar:

○ “La tasa de mortalidad perinatal fue de 20,9 x 1.000 nacidos vivos”. (Línea base de 12 x cada 1.000 nacidos vivos).

○ “La tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años fue de 31,5 x cada 100.000”. (Línea base de 11,5 x cada 100.000 niños menores de 5 años).

○ “La tasa de mortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda en menores de 5 años fue de 31,5 x 100.000”. (Línea base de 25,13 x cada 100.000 niños menores de 5 años).

○ “La tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años fue de 10,5 x100.000”. (Línea base de 1 x cada 100.000 niños menores de 5 años).

○ La incidencia de sífilis congénita fue de 1,8 x 1.000 nacidos vivos (línea Base de 0,5 x cada 1.000 nacidos vivos).

○ MANEXKA EPS-I no completó esquemas de vacunación en terceras dosis de polio y pentavalente en menores de un año, ni triple viral y fiebre amarilla en niños de un año”.

○ “La Razón de Mortalidad Materna para el año 2016 fue de 105 muertes por cada 100.000 nacidos vivos”. En el segundo semestre del año 2015 se encontraba en 89 por cada 100.000 nacidos vivos, poniendo en evidencia un deterioro de la misma.

○ “Durante el año 2016 continuaron las bajas coberturas de detección de cáncer de cuello uterino, donde la oportunidad a diciembre 31 de 2016 llegó al 60%, siendo este dato permanente durante todo el periodo de 2016”.

○ “De igual forma la tamización para la detección de cáncer de cérvix en la EPSI durante el año 2016 presentó una baja cobertura alcanzando tan solo un 41.5% encontrándose alejada de la meta nacional de 79%”.

○ “Baja cobertura de tamización de mamografía para las mujeres mayores de 50 años (3.1%)”.

○ “El porcentaje de mujeres de 10 a 49 años de edad que utilizan algún método de planificación familiar fue 8,3%.



○ “De acuerdo con los datos reportados para el año 2016 la EPSI no alcanzó a cumplir la meta de superar el 85% de cobertura para ingreso temprano a control prenatal. Solamente llegó al 80% y gestantes con cuatro a más controles alcanzó el 65% en mujeres de 29 a 59 años y el 83% en mujeres de 14 a 19 años”.

○ “La EPSI presenta bajas coberturas de programas de control de joven, consulta de planificación familiar, toma de citología vaginal y agudeza visual se encuentran por debajo de 50%”.

○ “Para el corte de octubre y noviembre de 2016 MANEXKA EPS-I realizó una entrega promedio de 2 medicamentos de 3 prescritos por usuario, lo que representa un cumplimiento de apenas un 67% de los medicamentos solicitados”.

• MANEXKA EPSI, no cumple con la entrega completa de medicamentos prescritos por usuario y a su vez no evidencia el acatamiento por parte de la EPSI, en cuanto a lo dispuesto en la Resolución 1604 de 2013.

#### **Componente Jurídico**

• *La información que reporta la Oficina Jurídica de Manexka frente a los procesos Administrativos, Ordinarios, Acciones de Reparación Directa y Ejecutivos y demás, no es confiable. No existe certeza de cuántos procesos tienen en contra, no existen expedientes confiables de los procesos con todas sus actuaciones.*

• *Inexistencia de ciclo de defensa, ausencia de medidas tendientes a evitar que se genere un daño antijurídico.*

• *La Oficina Jurídica, no tiene control de todas las actuaciones que se presentan en los procesos por parte de los asesores externos.*

• *Manexka EPSI no tiene determinado en sus estados financieros un pasivo contingente, máxime cuando tienen conocimiento de las acciones judiciales en su contra.*

• *La información reportada a corte 2016 sobre acciones de Tutelas tiene inconsistencias significativas, que no guarda relación con el comportamiento histórico que mantiene la Entidad.*

• *La entidad no hizo entrega de la información relacionada con la contratación de la entidad a fin de realizar la evaluación.*

#### **RECOMENDACION**

*De acuerdo al análisis desarrollado en el presente informe, no se observan avances significativos en las actividades desarrolladas por la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre “MANEXKA EPSI”, durante el término de la medida de Vigilancia Especial que impacten la situación financiera y los procesos de accesibilidad, oportunidad y continuidad en la atención que requiere la población afiliada, aunado al comportamiento negativo de indicadores financieros; y teniendo en cuenta los informes presentados por el Contralor designado, se recomienda adoptar la medida de intervención forzosa administrativa para liquidar de que tratan los artículos 116 y 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo anterior de conformidad con el numeral 8 del artículo 26 del Decreto 2462 de 2013”*

Que, de los informes presentados por las diferentes Superintendencias Delegadas, el informe de auditoría forense y el informe del Contralor Designado es notoria la crítica situación por los riesgos operativos, legales y financieros de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre -MANEXKA.

Que los anteriores hallazgos sobre la situación actual de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre -MANEXKA, ponen en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud a la población beneficiaria e implican un riesgo en el aseguramiento que no puede ser subsanado.

Que de conformidad con las conclusiones y recomendaciones relacionadas en los anteriores considerandos, dada la situación financiera y operativa de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre -MANEXKA, la misma no se encuentra en condiciones de ejercer su actividad social y, por lo tanto, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 113 a 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificados por los artículos 19 a 22 de la Ley 510 de 1999, debe procederse con su liquidación.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 3° de la Resolución 461 de 2015 y según consta en el Acta 181 de 2017, el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud sesionó el 24 de marzo de 2017 y recomendó adoptar la medida especial que se ordena en el presente acto administrativo.

Que la Corte Constitucional ha resaltado la necesidad de considerar las funciones de inspección, vigilancia y control como un elemento mismo del derecho fundamental a la salud y, específicamente, ha indicado que “*Los procedimientos y demás medidas administrativas dirigidas a promover la eficacia y eficiencia del sistema, como por ejemplo los mecanismos de inspección, vigilancia y control, siempre deben tener en la mira la satisfacción del derecho a la salud, como fin último del SGSSS. Esto significa que los procedimientos administrativos y las medidas de vigilancia y control deben ser siempre considerados como instrumentos al servicio de la realización del derecho y no como fines en sí mismos (...)*”. (Sentencia C-936 de 2011).

Que la medida de toma de posesión e intervención ordenada en el presente acto administrativo, busca proteger los derechos de los usuarios y garantizar la continuidad en la prestación del servicio, en condiciones de calidad y oportunidad, para lo cual la Superintendencia Nacional de Salud autorizará y supervisará los mecanismos necesarios para que no se produzcan suspensiones graves en la prestación de servicios a la población afiliada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 293 del Decreto-ley 663 de 1993, “*el proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad vigilada por la Superintendencia (...) es un proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad*

*entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos*”.

Que de acuerdo con lo anterior, se considera necesario ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la **Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre -MANEXKA**.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho,

#### **RESUELVE:**

Artículo 1°. **Ordenar** la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la **Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre –MANEXKA**, identificada con NIT 812.002.376-9, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución, por el término de dos (2) años.

Artículo 2°. **Comisionar** al Superintendente Delegado de Medidas Especiales para ejecutar en nombre de la Superintendencia Nacional de Salud la medida adoptada en el presente acto administrativo, quien podrá solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de la toma de posesión.

Artículo 3°. **Ordenar** el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:

a) La inmediata guarda de los bienes de la intervenida y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables;

b) La orden de registro del acto administrativo que dispone la Toma de Posesión en la Cámara de Comercio del domicilio de la intervenida o en la entidad competente y en las del domicilio de sus sucursales y, si es del caso, la de los nombramientos de los administradores y del revisor fiscal;

c) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida;

d) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al Agente Especial Liquidador, so pena de nulidad;

e) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante circular ordene a todos los Registradores de Instrumentos Públicos que dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión, se sujeten a las siguientes instrucciones:

i) Informar al Agente Especial Liquidador sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la intervenida; cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la intervenida; y cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la intervenida a solicitud elevada sólo por el Agente Especial Liquidador mediante oficio.

ii) Se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial Liquidador; así como de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión;

f) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente o mediante solicitud a todas las Secretarías de Tránsito y Transporte proceda a realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de automotores correspondiente o en el Registro Único Nacional de Tránsito; para que cancelen los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los vehículos de la intervenida; para que cancelen los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la intervenida a solicitud unilateral del Agente Especial Liquidador, mediante oficio; para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de la intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial Liquidador; y para que se abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada;

g) La prevención a todo acreedor y, en general, a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al Agente Especial Liquidador;

h) La advertencia de que el Agente Especial Liquidador está facultado para poner fin a cualquier clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa;

i) La prevención a los deudores de la intervenida que sólo podrán pagar al Agente Especial Liquidador, advirtiéndolo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la adopción de la medida, para que procedan de conformidad;

j) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, que deben entenderse exclusivamente con el Agente Especial Liquidador, para todos los efectos legales;

k) Se ordena la suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión;

l) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial Liquidador designado. Así mismo, los registradores no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la



intervenida, so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por la persona antes mencionada;

m) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión y de intervención forzosa administrativa para liquidar por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006, y cuando allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma de posesión y de intervención forzosa administrativa para liquidar. La actuación correspondiente será remitida al Agente Especial Liquidador;

n) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión y de intervención forzosa administrativa para liquidar, que afecten bienes de la entidad;

o) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de la toma de posesión y de intervención forzosa administrativa para liquidar;

p) El que todos los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión y de intervención forzosa administrativa para liquidar, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de intervención forzosa administrativa para liquidar y de conformidad con las disposiciones que lo rigen.

Parágrafo. El Agente Liquidador podrá disponer de las medidas preventivas facultativas consagradas en el numeral 2 del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Artículo 4°. **Disponer** que los gastos que ocasione la intervención ordenada estarán a cargo de la entidad intervenida en los términos de ley.

Artículo 5°. **Designar a Gildardo Tijaro Galindo**, identificado con la cédula de ciudadanía número 19092858, como Agente Liquidador de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre –MANEXKA, quien ejercerá las funciones propias de su cargo de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que le sean aplicables. Para el efecto, podrá solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la toma de posesión. Así mismo, ejercerá las funciones de representante legal de la entidad objeto de la medida especial que se ordena en la presente resolución.

Parágrafo 1°. El Agente Liquidador designado deberá tomar posesión ante el Superintendente Delegado para Medidas Especiales, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del presente Acto Administrativo.

Parágrafo 2°. El Agente Liquidador designado ejercerá las funciones propias de su cargo, previa posesión del mismo y tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la entidad, junto con los demás deberes y facultades de ley. También deberá garantizar la prestación del servicio de salud a la población afiliada hasta tanto no se lleve a cabo el traslado de los afiliados.

Parágrafo 3°. De conformidad con lo previsto el numeral 6 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Liquidador y el Contralor continuarán siendo auxiliares de la justicia y, por tanto, para ningún efecto podrán reputarse trabajadores o empleados de la entidad en liquidación o de la Superintendencia Nacional de Salud. Adicionalmente, de conformidad con el numeral 10 del citado artículo los liquidadores responderán por los perjuicios que por dolo o culpa grave causen a la entidad en liquidación o a los acreedores, en razón de actuaciones adelantadas en contravención de las disposiciones especiales que regulan el proceso de liquidación forzosa administrativa.

Parágrafo 4°. Según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del Liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimir las a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los actos administrativos del Liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio.

Así mismo, según lo dispuesto en el numeral 3 ibidem las controversias o litigios que se originen en hechos o actos de gestión del Liquidador o en los contratos que celebre, serán resueltas por la Jurisdicción Ordinaria mediante el procedimiento que en cada caso corresponda, según la naturaleza del litigio.

Parágrafo 5°. El Agente Liquidador deberá remitir la información de que trata el numeral segundo del Capítulo Tercero, Título IX de la Circular Única y el literal k) del numeral 4.1 de la Circular 000016 de 2016, “*por la cual se hacen adiciones y modificaciones y eliminaciones a la Circular 047 de 2007 – Información Financiera para efectos de Supervisión*”, expedidas por esta Superintendencia, en los términos y tiempos allí señalados y demás informes requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud para el seguimiento y monitoreo de la medida especial que se ordena en el presente acto administrativo.

Artículo 6°. **Ordenar** al Agente Liquidador que una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, comience a realizar los traslados de los afiliados conforme a las normas vigentes sobre la materia.

Artículo 7°. **Designar a la Sociedad de Auditorías & Consultorías SAS - SAC Consulting SAS**, identificada con NIT 819.002.575-3, representada legalmente por **Never Enrique Mejía Matute**, identificado con cédula de ciudadanía número 15681157, como Contralor para la medida especial de intervención forzosa administrativa para liquidar de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre – MANEXKA, quien ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que le sean aplicables.

Parágrafo 1°. La persona jurídica designada como Contralor, acorde a lo dispuesto en el inciso 1°, numeral 3, Capítulo Segundo, Título IX de la Circular Única expedida por esta

Superintendencia, ejercerá las funciones propias de un Revisor Fiscal, conforme al Código de Comercio y demás normas aplicables a la revisoría fiscal y responderá de acuerdo con ellas.

Parágrafo 2°. Conforme a lo establecido en el numeral 3 del Capítulo III del Título IX de la Circular Única, el Contralor deberá remitir un informe preliminar en medio físico a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la posesión. Así mismo, durante el proceso liquidatorio deberá dar cumplimiento al reporte de la información contenida en la citada Circular, para tal efecto, deberá ejercer las funciones propias de revisoría fiscal o contraloría frente a la información financiera y administrativa que reporte el Liquidador en atención a los anexos técnicos de dicha Circular y su modificatoria Circular 000016 de 2016, “*por la cual se hacen adiciones y modificaciones y eliminaciones a la Circular 047 de 2007 – Información Financiera para efectos de Supervisión*”, expedidas por esta Superintendencia, en los términos y tiempos allí señalados y demás informes requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud para el seguimiento y monitoreo de la medida especial que se ordena en el presente acto administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución será de efecto inmediato y se notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en concordancia con los artículos 9.1.1.1.3 y 9.1.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Parágrafo. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en efecto devolutivo, en consecuencia, no suspenderá la ejecución de la medida de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para liquidar la cual procederá inmediatamente, de conformidad con el inciso 3° del artículo 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016. Dicho recurso podrá interponerse en el momento de la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, ante el despacho del Superintendente Nacional de Salud.

Artículo 9°. **Comunicar** el contenido del presente acto administrativo al Ministerio de Salud y Protección Social, al Director de la Cuenta de Alto Costo, al Administrador Fiduciario del Fosyga “Consortio SAYP”, o la entidad que ejerza sus funciones y a las Entidades Territoriales donde la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre –MANEXKA, tenga cobertura geográfica y poblacional.

Artículo 10. **Facultar** al Superintendente Delegado para las Medidas Especiales para que lleve a cabo las labores de notificación del presente acto administrativo.

Artículo 11. **Publicar** el contenido del presente acto administrativo en el *Diario Oficial* y en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de marzo de 2017.

El Superintendente Nacional de Salud,

Norman Julio Muñoz Muñoz.  
(C. F.).

CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000003 DE 2017

(marzo 30)

<b>Para:</b>	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud y Entidades Territoriales.
<b>De:</b>	Superintendente Nacional de Salud.
<b>Asunto:</b>	Instrucciones Respecto a la Ruta Integral de Atención en Salud y Rehabilitación Funcional para las Víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y de Municiones sin Explotar (MUSE).

**OBJETO:**

Impartir instrucciones a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud, y Entidades Territoriales, respecto de la ruta integral de atención en salud y rehabilitación funcional para las víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y de Municiones Sin Explotar (MUSE).

**FUNDAMENTO LEGAL:**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia, El Estado debe garantizar el acceso a la seguridad social como derecho irrenunciable y a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, para lo cual se reglamenta la prestación de dicho servicio con la adopción de políticas claras para las entidades públicas y privadas que lo suministren, quienes son sujetos de las acciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por la Superintendencia Nacional de Salud, en atención a la naturaleza e importancia del servicio que prestan.

La Superintendencia Nacional de Salud, en virtud de los mandatos establecidos en la Ley 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011 y en el Decreto número 2462 de 2013, es el máximo órgano de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como una de sus funciones garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los deberes por parte de los diferentes actores del Sistema.

Dentro de los usuarios del Sistema, existen algunos a quienes la Constitución, la ley y la Jurisprudencia han reconocido una protección especial, dada la existencia de situaciones que los ponen en desigualdad respecto del resto de la colectividad. Es así como el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, relativo a los principios que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su numeral 6, establece el principio de enfoque diferencial, el cual “*reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales*



el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación”.

En este sentido la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa en reconocer que existen grupos poblacionales que por situaciones particulares se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, lo cual demanda del Estado una protección especial y reforzada a través del despliegue de una política pública garante de sus derechos constitucionales.

Es así como, la ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 1º consagra:

**“Artículo 1º. Objeto.** La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Por otro lado, el artículo 13 de la mentada ley, resalta el trato especial que deben recibir las víctimas, en los siguientes términos:

**“Artículo 13. Enfoque diferencial.** El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.

El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.

Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte del Gobierno nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales.

Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes”.

Así mismo, en el artículo 25 *ibídem*, se consagra el derecho que les asiste a las víctimas de recibir una reparación integral con ocasión al daño causado, así:

**“Artículo 25. Derecho a la reparación integral.** Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente ley.

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante. (...)”.

Por otro lado, el Decreto número 1084 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación”, respecto a la Asistencia en Salud para las víctimas, dispone:

**“Artículo 2.2.6.1.1. Afiliación de víctimas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.** El Ministerio de Salud y Protección Social, cruzará el Registro Único de Víctimas a que hace referencia el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011, que certifique la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), o la que haga sus veces, y con las bases de datos de los regímenes especiales. La población que se identifique como no afiliada, será reportada a la entidad territorial de manera inmediata para que se proceda a su afiliación a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, preservando la libre escogencia por parte de la víctima, de acuerdo con la presencia regional de estas, según la normatividad vigente, en desarrollo del artículo 52 de la Ley 1448 de 2011, siempre y cuando cumpla con las condiciones para ser beneficiario de dicho Régimen. Esto último se garantizará mediante la aplicación de la encuesta Sisbén por parte de la entidad territorial.

En caso de que transcurridos tres (3) meses no se haya realizado la afiliación, se procederá a realizar una afiliación inmediata a la Entidad Promotora de Salud de naturaleza Pública del orden Nacional, y en caso de que esta EPS no cuente con cobertura en la zona, se realizará la afiliación a la EPS con el mayor número de afiliados.

**Parágrafo 1º.** Dentro de la Base de Datos Única de Afiliados, o la que haga sus veces, debe identificarse la condición de víctima a través de un código, con el objeto de facilitar la atención en salud de manera efectiva, rápida y diferencial a través de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud. Para ello el Ministerio de Salud y Protección Social adoptará los mecanismos e instrumentos que considere pertinentes.

**Parágrafo 2º.** La interoperabilidad de los sistemas de información que soportan el Sistema General de Seguridad Social en Salud con el Registro Único de Víctimas se efectuará de conformidad con los criterios y estándares establecidos por la Red Nacional de Información.

(Decreto número 4800 de 2011, artículo 87)”.

**“Artículo 2.2.6.1.2. Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial.** El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social diseñará y/o ajustará, con la participación de los demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferencial teniendo en cuenta las necesidades específicas de la víctima, el hecho victimizante, y las

consecuencias de este sobre la población víctima de que trata el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Se tendrá en cuenta la actualización de los planes de beneficios según lo dispuesto por la Ley 1438 de 2011.

**Parágrafo.** El protocolo de atención integral en Salud con Enfoque Psicosocial a que hace referencia este artículo, deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las redes de servicios de salud y otras redes definidas por la Unidad Administrativa Especial de Víctimas que presten asistencia a la población de la que trata la Ley 1448 de 2011.

(Decreto número 4800 de 2011, artículo 88)”.

**“Artículo 2.2.6.1.3. Cubrimiento de servicio de la atención en salud.** El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito -ECAT- del Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga- o quien haga sus veces, cubrirá el reconocimiento y pago de los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria en los términos del parágrafo del artículo 54 de la Ley 1448 de 2011, que no estén cubiertos por los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni por regímenes especiales o cualquier tipo de seguro en salud de que sea titular o beneficiaria la víctima.

La garantía de la prestación de los servicios a que se refiere el presente artículo estará a cargo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tanto del régimen contributivo como del subsidiado y el trámite de solicitud y pago de los mismos se regirá por las normas vigentes que regulan el procedimiento de recobros ante el Fosyga, lo anterior sin perjuicio de los mecanismos de financiamiento y pago establecido en el artículo 19 de la Ley 1448 de 2011.

El Ministerio de Salud y Protección Social adoptará las medidas que considere pertinentes para la implementación de esta medida.

(Decreto número 4800 de 2011, artículo 89)”.

**“Artículo 2.2.6.1.4. Monitoreo y seguimiento de la atención en salud.** El Ministerio de Salud y Protección Social debe desarrollar herramientas de seguimiento y monitoreo a la atención en salud brindada a la población víctima en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, de acuerdo con lo establecido en el protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial.

(Decreto número 4800 de 2011, artículo 90)”.

Ahora bien, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia nacional e internacional sobre violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.), e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), son víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MUSE), aquellas personas de la población civil o miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido perjuicios en su vida, su integridad personal, incluidas lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, así como el menoscabo de sus derechos fundamentales, pérdida financiera o deterioro en sus bienes, como consecuencia de actos u omisiones relacionados con el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de Minas Antipersonal (MAP).<sup>1</sup>

#### INSTRUCCIONES:

La Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de sus funciones, en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, modificada por las Leyes 1719 de 2014 y 1753 de 2015, y, sus Decretos Reglamentarios, imparte las siguientes instrucciones:

**Primera: Principios y atributos de la atención en salud.** Los destinatarios de la presente circular deberán interpretar y aplicar las instrucciones a la luz de los principios que rigen el SGSSS y, en especial los siguientes, con el fin de garantizar la debida atención en salud a las víctimas de MAP/MUSE:

- **Calidad:** Se debe garantizar que la atención que se preste a las víctimas de MAP/MUSE sea de calidad, y por lo tanto, la atención en salud debe ser: oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua, y, de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y prácticas profesionales.

- **Continuidad:** Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, el mismo no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas antes de la recuperación o estabilización del paciente.

- **Integralidad:** Los servicios y tecnologías de salud deben ser suministrados de manera completa, para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario.

En los casos en que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Plan de Beneficios en Salud se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada.

- **Oportunidad:** El usuario debe obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.

- **Resolutividad:** Los establecimientos de salud deben responder de manera integral y oportuna a una demanda de atención en salud, para lo cual deberán contar con los recursos físicos y humanos debidamente calificados.

- **Accesibilidad:** Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todas las víctimas de MAP/MUSE, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende: la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y, el acceso a la información.

<sup>1</sup> <http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx>



**Segunda: Servicios de salud a las víctimas de MAP/MUSE.** Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud y Entidades Territoriales de Salud, deberán garantizar a las víctimas de MAP/MUSE, los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria los cuales comprenden:

1. Atención de urgencias.
2. Atenciones ambulatorias intramurales.
3. Atenciones con internación.
4. Suministro de dispositivos médicos y material médico – quirúrgico.
5. Osteosíntesis, órtesis y prótesis. El proceso protésico incluye adaptación y recambio por razones de desgaste normal, crecimiento o modificaciones físicas.
6. Suministro de medicamentos.
7. Tratamientos y procedimientos quirúrgicos.
8. Traslado asistencial de pacientes.
9. Trasplantes.
10. Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico.
11. Rehabilitación física.
12. Rehabilitación mental.
13. Rehabilitación sensorial.
14. Rehabilitación bucal.
15. Examen de VIH/Sida y de enfermedades de transmisión sexual, en los casos en que la persona haya sido víctima de acceso carnal violento.
16. Servicio de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y/o la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima.
17. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las personas víctimas.
18. Todas las atenciones, valoraciones, evaluaciones e intervenciones incluyen las requeridas por médicos especialistas y por los diferentes profesionales de rehabilitación.

**Tercera: Atención prehospitalaria a las víctimas de MAP/MUSE.** Las Entidades Territoriales deben realizar un directorio de las autoridades locales competentes, con las cuales la comunidad debe comunicarse en caso de presentarse un accidente por MAP/MUSE; este directorio como mínimo debe contener la información correspondiente al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), a los hospitales públicos y/o privados del área de influencia y el número único de emergencias. El directorio deberá ser publicado y divulgado por la Entidad Territorial.

La víctima de MAP/MUSE tiene derecho a recibir atención pre hospitalaria en el sitio de ocurrencia del accidente y a ser trasladada a la Institución Prestadora de servicios de salud (IPS) más cercana, la cual está obligada a admitirla y a prestarle la atención en salud correspondiente.

En caso de requerirse movilización de la víctima desde el lugar de la ocurrencia del evento hasta la IPS más cercana, el Fosyga o quien haga sus veces, reconocerá a través de la subcuenta ECAT, el gasto de transporte en el que haya incurrido la persona o la Entidad que haya prestado el servicio de transporte. El valor que se reconocerá será un valor hasta de diez (10) smldv al momento del acaecimiento del accidente. El plazo para efectuar la reclamación será de 3 años.

**Cuarta: Atención de urgencias.** La víctima de MAP/MUSE tiene derecho a acceder a la atención de urgencias de manera inmediata, en cualquier Institución Prestadora de Servicios de Salud del territorio nacional, sea pública o privada, con independencia de la capacidad socioeconómica, sin que se requiera autorización previa de la EAPB o referencia.

La atención a la víctima debe realizarse en la Institución Prestadora de Servicios de Salud más cercana al lugar de los hechos, independientemente de si se encuentra inscrita a una EAPB o no. No podrá realizarse cobro de copago o cuotas moderadoras a las víctimas atendidas, así como tampoco podrá exigírsele fotocopias o autenticaciones de documentos.

En ningún caso podrá negarse la atención de urgencias a la víctima bajo el argumento de que no es una urgencia vital. La víctima deberá obtener la valoración médica, en la cual se debe especificar la condición de víctima MAP/MUSE.

La IPS debe garantizar a la víctima, la debida aplicación del Triage, la atención de urgencia correspondiente y su estabilización. El personal en salud que recibe a la víctima, debe hacer un reporte de valoración de todos los órganos y sistemas. En la valoración debe especificarse la condición de víctima MAP/MUSE.

La IPS deberá prestar apoyo y orientación a la víctima o a su familia, para gestionar según el caso, la afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud en caso de no estar afiliado o la declaración del hecho victimizante ante el Ministerio Público; esto es, el proceso de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Es responsabilidad de la IPS la atención oportuna de la víctima, lo que incluye la apropiada referencia cuando no cuenten con la tecnología necesaria para ello. Para esto la IPS deberá coordinar la atención a través de la red con la EAPB, en el caso de que la víctima se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, o con la Entidad Territorial, en el caso de que la víctima no se encuentre afiliada.

Así mismo, la IPS deberá reportar el evento diligenciando la ficha Sivigila número 452, en atención a que el accidente por MAP/MUSE es de interés en salud pública.

**Quinta: Negación de la atención de urgencias.** La Institución Prestadora de Servicios de Salud que niegue la atención de urgencias a una víctima MAP/MUSE, sin posibilidad de valoración posterior, deberá entregar a la víctima documento escrito, elaborado y firmado por la IPS, en el cual consten los motivos de la negación de la atención de urgencias y el derecho que le asiste de interponer la queja correspondiente ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General

de la Nación o la Personaría Municipal, para que estas, en el marco de sus competencias, realicen las acciones a que haya a lugar.

**Sexta: Atención en salud a víctima MAP/MUSE no inscrita en el RUV.** Cuando la víctima de MAP/MUSE no esté inscrita en el RUV, la IPS deberá realizar la reclamación conforme a los artículos 2.6.1.4.1 y siguientes del Decreto 780 de 2016, esto es por medio de la cuenta del ECAT del Fosyga, hasta tanto se incluya en el RUV o se excedan los topes de cobertura establecidos (800 smldv desde el momento de la ocurrencia del evento). Cuando se sobrepase el monto máximo de cobertura, la IPS deberá solicitar autorización a la EAPB a la que se encuentra afiliada la víctima o a la Entidad Territorial de Salud, para continuar con la atención o remitirla a una IPS de la red integral de prestadores de la EAPB.

**Séptima: Atención en salud a víctima MAP/MUSE inscrita en el RUV.** En este caso la atención debe garantizarse a través de la EPS a la cual se encuentre afiliada la víctima. Si la víctima cuenta con un Plan Voluntario de Salud que cubra las contingencias acaecidas, estas serán cubiertas por el mismo. En el evento que las atenciones en salud no estén cubiertas por el Plan Voluntario de Salud, serán remitidas a la EPS para su atención.

Cuando la víctima inscrita en el RUV requiera una tecnología en salud no incluida en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, el médico tratante, según su criterio, realizará la prescripción respectiva.

**Octava: Atención en salud a víctima MAP/MUSE inscrita en el RUV - No afiliado a una EPS.** En este caso, las atenciones en salud se realizarán con cargo a la Entidad Territorial, y se deberá proceder a la afiliación inmediata de la víctima.

En caso de que la víctima requiera ser referenciado a otro nivel de atención, la Entidad Territorial Municipal o Distrital de Salud deberá coordinar la atención a través de su red integral de prestadores.

**Novena: Atención hospitalaria.** Comprende todas aquellas acciones de salud (medicas, quirúrgicas, de rehabilitación u otras) que se requieren llevar a cabo con la víctima de MAP/MUSE en una condición de hospitalización.

La atención hospitalaria debe brindarse con un enfoque psicosocial y comprende el traslado a hospitalización, plan de atención integral (físico y mental), servicios médicos quirúrgicos y plan de egreso, seguimiento y manejo ambulatorio.

En caso de que la víctima requiera de ayudas diagnósticas, especialidades médicas o servicios que no se encuentren disponibles en la Institución Prestadora de Servicios de Salud donde está siendo atendida, deberá ser remitida acorde a sus necesidades en salud. Para esto la IPS deberá coordinar la atención a través de la red con la EAPB, en el caso de que la víctima se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, o con la Entidad Territorial, en el caso de que la víctima no se encuentre afiliada, quienes deberán decidir a qué Institución de Salud será trasladada.

Le corresponde a la EAPB generar las autorizaciones de servicios posteriores a la urgencia y de servicios no incluidos en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC. En ningún caso, ya sea para autorizaciones de atención hospitalaria o ambulatoria, las EAPB podrán trasladar la responsabilidad del trámite de autorización al usuario o al acudiente.

Para el ingreso a la institución de salud que continuará prestando los servicios, la víctima o su familia deben llevar un resumen de la historia clínica, junto con los resultados de los exámenes practicados.

El resumen de la historia clínica deberá ser entregado por la IPS donde fue atendida la víctima inicialmente y deberá contener como mínimo la siguiente información: i) primer nombre y primer apellido de la persona atendida, ii) tipo y número de identificación y/o número de historia clínica, iii) edad y sexo de la persona atendida iv) datos de contacto, v) servicio de ingreso, vi) fecha de atención, vii) motivo de consulta, viii) enfermedad actual donde debe indicarse la condición evidenciada, la relación con el evento que originó la atención y la interpretación médica de los paraclínicos y ayudas diagnósticas realizadas, ix) revisión por sistemas relacionada con el motivo que originó la atención, x) antecedentes, xi) examen físico, xii) diagnóstico, xiii) plan de tratamiento, xiv) cuando se hayan suministrado medicamentos deberá indicarse presentación, dosificación, frecuencia y tiempo de tratamiento, xv) primer nombre y primer apellido, firma y número de registro del médico que diligencie el documento.

Las Entidades Territoriales de Salud deberán realizar la inclusión en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), en los casos en que sea solicitado por las víctimas, con observación de las normas vigentes.

**Décima: Rehabilitación funcional posterior a la hospitalización.** En el caso en el que la víctima requiera rehabilitación posterior a la hospitalización, el médico tratante deberá entregar la orden para que sea valorada por el equipo interdisciplinar de rehabilitación funcional. Esta orden deberá ser autorizada por la EAPB a la cual se encuentre afiliada la víctima.

En caso de requerirse rehabilitación y que la víctima no esté afiliada al SGSSS, la víctima o su familia, con el apoyo de la IPS, deberá solicitar la afiliación a salud a través de la Entidad Municipal o Distrital de Salud.

El equipo interdisciplinar de rehabilitación funcional será quien defina si la víctima requiere rehabilitación funcional, que comprende la rehabilitación física, mental y sensorial. Esta rehabilitación funcional se deberá realizar sin el pago de cuotas moderadoras o copagos.

**Décima primera: Atención Psicosocial.** Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB, Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud-IPS, y Entidades Territoriales de Salud-ETS, garantizarán a las víctimas la atención psicosocial, mediante la implementación de programas o procesos articulados de servicios con la finalidad de favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales, acorde con lo definido en la ley, los programas y políticas de atención integral a las víctimas.

**Décima segunda: Certificación de incapacidad de la víctima MAP/MUSE para trámite de ayuda humanitaria.** En caso de incapacidad mínima de 30 días, el médico de la IPS deberá entregar a la víctima, la constancia de incapacidad médica para tramitar la ayuda humanitaria.

Dicho documento debe contar con información clara y legible acerca de la víctima, diagnóstico relacionado con la afectación directa del hecho victimizante, tiempo de incapacidad otorgado, fecha de expedición, nombre del médico tratante, número tarjeta profesional médico tratante o del funcionario responsable de la certificación.

**Décima tercera: Discapacidad de la víctima MAP/MUSE.** En caso de discapacidad, y hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social adopte acto administrativo referente a la certificación de discapacidad, el médico tratante adscrito a la EAPB de la víctima deberá entregar un certificado que contenga: diagnóstico clínico relacionado a las “limitaciones” ocasionadas por la discapacidad y relacionar el diagnóstico anterior con las CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) vigente.

**Décima cuarta: Niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP/MUSE.** Ningún hospital, Centro de Salud y demás instituciones dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño o niña que requiera atención en salud.

Los menores de 18 años podrán acceder de forma directa a la consulta especializada pediátrica, sin requerir referencia por parte del médico general.

Los servicios para la rehabilitación física y mental de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física o sexual y todas las formas de maltrato, serán gratuitos, sin importar el régimen de afiliación.

En el marco de la atención pre hospitalaria a niños, niñas o adolescentes víctimas, las IPS deberá reportar el evento al defensor de familia/ ICBF o comisario.

Además de las anteriores, las entidades destinatarias de esta Circular Externa, deberán observar las instrucciones respecto de la prestación del servicio de salud en niños y niñas emitidas por esta Superintendencia a través de la Circular Externa número 000010 del 30 de octubre de 2013.

**Décima quinta: Adultos mayores víctimas de MAP/MUSE.** Además de las instrucciones generales para atención de víctimas de MAP/MUSE emitidas en la presente circular, las entidades destinatarias deberán observar las instrucciones para la prestación de los servicios de salud a los adultos mayores emitidas a través de la Circular Externa número 00004 del 20 de marzo de 2015.

**Décima sexta: Carácter vinculante de la ruta integral de atención en salud y de rehabilitación funcional para víctimas del MAP/MUSE.** La Ruta de Atención Integral en Salud y de Rehabilitación Funcional para Víctimas de MAP/MUSE definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, hace parte integral de la presente Circular, por lo tanto, deberá ser observada por los destinatarios de la misma.

La inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas en la presente circular acarreará la imposición de sanciones previstas en la ley, tanto a título personal como institucional por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones y competencias.

**Décima séptima: Vigencia.** La presente Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Marzo 30 de 2017

El Superintendente Nacional de Salud,

Norman Julio Muñoz Muñoz.  
(C. F.).

## Superintendencia de Puertos y Transporte

### RESOLUCIONES

#### RESOLUCIÓN NÚMERO 7416 DE 2017

(marzo 28)

*por la cual se efectúa una delegación de funciones en el Superintendente Delegado de Puertos Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011, en concordancia con la Resolución número 11434 del 31 de octubre de 2011, Comisión Intersectorial del Operador Económico Autorizado.*

El Superintendente de Puertos y Transporte en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 1 de 1991, Decreto número 101 del 2000 modificado por el Decreto número 2741 del 2001, los artículos 6° y 7° del Decreto número 1016 del 2000, Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011 y Resolución número 11434 del 31 de octubre de 2011, Comisión Intersectorial del Operador Económico Autorizado,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme a lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispone que los Superintendentes podrán delegar la atención de los asuntos a ellos conferidos por la Ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos del nivel directivo, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

Que el artículo 4° del Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011 dispuso: “Autoridades de Control del Operador Económico Autorizado. Conforme con sus competencias serán responsables de la implementación, desarrollo operativo y mantenimiento del

Operador Económico Autorizado en Colombia, como autoridades que por mandato legal deben realizar labores de supervisión y control en las operaciones de comercio exterior, especialmente en el proceso operativo de ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional, las siguientes:

1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
3. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
4. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Parágrafo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección General Marítima (Dimar) y la Aeronáutica Civil y demás autoridades públicas relacionadas con las operaciones de comercio exterior, se vincularán como autoridades de apoyo o coordinación o control, de acuerdo a la actividad que realice el tipo de usuario solicitante en las respectivas fases y en el desarrollo del Operador Económico Autorizado, de conformidad con sus competencias”.

Que el artículo 3° de la Resolución número 11434 reglamentario del Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011 estableció: “**Autoridades de control.** De conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 3568 las autoridades de control encargadas de implementar y poner en marcha el programa Operador Económico Autorizado son:

5. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
6. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
7. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
8. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

La Dirección General Marítima (Dimar), la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Aeronáutica Civil, serán autoridades de control y por lo tanto tendrán las obligaciones de que trata el artículo 16 del Decreto número 3568 de 2011, de acuerdo con las instancias de ejecución definidas y con el esquema de gradualidad que se establezca de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Decreto número 3568 de 2011 en concordancia con el artículo 22 de la presente resolución.

Que el numeral 6 del artículo 21 del Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011 dispuso la conformación de la Comisión intersectorial del Operador Económico Autorizado designando entre sus integrantes al Superintendente de Puertos y Transporte.

Que el parágrafo del artículo 21 del Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011 contempla: Los integrantes de la comisión podrán ser representados por un delegado de conformidad con lo establecido con el artículo 9° de la Ley 489 de 1998.

Que mediante Resolución número 23334 del 16 de diciembre de 2014 se delegó en la Superintendente Delegada de Puertos las obligaciones contenidas en el Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011 y la Resolución número 11434 del 31 de octubre de 2011 Comisión Intersectorial del Operador Económico Autorizado.

Que mediante Resolución número 35014 del 23 de diciembre de 2014 se complementó y adicionó la Resolución número 23334 del 16 de diciembre de 2014 en la cual se delegó en la Superintendente Delegada de Puertos las obligaciones contenidas en el Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011 y la Resolución número 11434 del 31 de octubre de 2011, Comisión Intersectorial del Operador Económico Autorizado.

Que el Capítulo IV de los Órganos de Consulta, Coordinación y Decisión en sus artículos 20, 21 y 22 del Decreto número 3568 de 2011 contempla la creación, conformación y funciones de la Comisión Intersectorial del Operador Económico Autorizado encontrándose el Superintendente de Puertos y Transporte como uno de los integrantes de esta comisión.

Que en caso de que el Superintendente de Puertos y Transporte no pueda asistir a las sesiones de la Comisión Intersectorial del Operador Económico Autorizado, se hace necesario delegar esta función en el Superintendente Delegado de Puertos de conformidad con las normas antes mencionadas y las que regulen la materia de puertos.

En mérito de lo expuesto este despacho,

#### RESUELVE:

Artículo 1°. En ausencia del Superintendente de Puertos y Transporte, se delega en el Superintendente Delegado de Puertos, la competencia de todos los asuntos contenidos en el Capítulo IV de los Órganos de Consulta, Coordinación y Decisión en sus artículos 20, 21 y 22 del Decreto número 3568 de 2011, el cual contempla la creación, conformación y funciones de la Comisión Intersectorial del Operador Económico Autorizado, de conformidad con lo expuesto en parte considerativa del presente acto.

Artículo 2°. En desarrollo de la delegación, el Superintendente Delegado de Puertos deberá asistir y adelantar todos los trámites relacionados con la función que trata la normatividad antes citada.

Artículo 3°. El Superintendente de Puertos y Transporte conserva la facultad de revisar y revocar los actos del delegatario.

Artículo 4°. La presente resolución deroga las Resoluciones números 23334 del 16 de diciembre de 2014 y número 35014 del 23 de diciembre de 2014.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial**.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2017.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Superintendente de Puertos y Transporte,

Javier Jaramillo Ramírez.  
(C. F.).



CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000014 DE 2017	
(marzo 28)	
PARA:	SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES, SOCIEDADES PORTUARIAS, LICENCIAS, MUELLES HOMOLOGADOS, AUTORIZACIONES TEMPORALES Y EN GENERAL LAS PERSONAS PÚBLICAS O PRIVADAS QUE ADMINISTRAN PUERTOS
DE:	SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PUERTOS
ASUNTO:	REPORTE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN PORTUARIA (SIGP)

La Superintendencia de Puertos y Transporte en cumplimiento de sus funciones de Vigilancia, Inspección y Control otorgadas por la Ley 1ª de 1991; Decretos número 101 y 1016 de 2000, modificados por el Decreto número 2741 de 2001, en especial lo instituido en el numeral 10 del artículo 12 del Decreto número 2741 de 2001, el cual establece que la Superintendencia podrá solicitar documentos e información general, inclusive los libros de comercio, así como practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de su función.

De conformidad con lo anterior, y en atención a la expedición de la Resolución número 4819 del 1º de marzo de 2017, por la cual se implementa el Sistema de Indicadores de Gestión al Transporte (SIGT), y teniendo en cuenta los inconvenientes técnicos que se han presentado en el proceso de ingreso y transmisión de la información requerida, así como la importancia de consolidar la información de tráfico portuario que las sociedades portuarias han registrado en los primeros meses del año 2017, se informa que el Sistema de Indicadores de Gestión Portuaria (SIGP) ha sido habilitado temporalmente para el reporte de la información correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, para lo cual se informa que el Sistema de Indicadores de Gestión Portuaria (SIGP), no ha sufrido ninguna modificación ni en la estructura de los archivos de naves y productos, ni en la funcionalidad propia del sistema.

La Superintendencia informará a través de su página web y a través de los correos electrónicos de sus contactos una vez el Grupo de informática y Estadística de la entidad manifieste que se han superado los inconvenientes técnicos, para iniciar el cargue de la información correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2017. De igual manera se informará el tiempo que se establezca para que paralelamente transmitan la información de tráfico portuario en ambos sistemas, es decir en el SIGP y el SIGT.

Para garantizar la transmisión de los archivos requeridos a través del SIGP, la Superintendencia dispone del servicio de Call Center línea de atención 018000915615, para brindar soporte a los destinatarios de las disposiciones contenidas en esta circular, y resolverá cualquier inquietud.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2017.

Publíquese y cúmplase.

El Superintendente Delegado de Puertos,

Rodrigo José Gómez Ocampo.  
(C. F.).

Superintendencia de Notariado y Registro

AVISOS

La Superintendencia de Notariado y Registro,

HACE SABER:

La señora Rocío Bolaños Trochez, identificada con cédula de ciudadanía número 25649591, falleció, quien era funcionaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao, Cauca. Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya lugar, deberán hacerlo en la Superintendencia de Notariado y Registro, Grupo de Administración del Talento Humano, Calle 26 N° 13-49 Interior 201 Bogotá, D. C., a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la publicación del presente aviso.

Teléfono: 3282121. Ext: 1139 y 1314.

(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 000671 DE 2017
(febrero 7)
por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado y se efectúa un nombramiento de carácter provisional.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 2.2.11.1.2, 2.2.11.1.3, 2.2.5.3.4 del Decreto número 1083 de 2015, artículos 19 del Decreto-ley 1072 de 1999, 25 y 26 del Decreto-ley 765 de 2005 y 60 de la Ley 1739 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 000458 de fecha 27 de enero de 2016, se encargó al servidor público de carrera **Víctor Julio Campos Espinel**, identificado con cédula de ciudadanía número 79384290, en el empleo Gestor III, Código 303 Grado 03, rol FL3006, del Despacho de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional del cual tomó posesión mediante Acta número 106 del 17 de febrero de 2016;

Que el servidor en mención a través de oficio de fecha 06 de enero de 2017, manifestó expresamente su renuncia al encargo Gestor III, código 303 Grado 03, rol FL3006, del Despacho de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional;

Que la administración acepta la renuncia presentada, como consecuencia de lo anterior y por cumplirse el término de la situación administrativa que generó la vacancia temporal del empleo, a partir de la fecha en que el servidor Víctor Julio Campos Espinel reasuma las funciones del cargo del cual es titular, se da por terminado el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 7848 del 13 de octubre 2016 al funcionario **Víctor Hugo Useche**, identificado con la cédula de ciudadanía número 3233967 en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02- rol FL3007 Gestor II de Fiscalización y Liquidación TACI, ubicado en la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;

Que en la planta de Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a la fecha existe una vacante temporal, que por necesidades del servicio requiere ser provista a través del nombramiento en provisionalidad, en razón a que agotado el procedimiento establecido para la provisión transitoria mediante encargo no fue posible su provisión;

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1º. Aceptar la renuncia al encargo efectuado mediante la Resolución número 000458 de fecha 27 de enero de 2016 en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03 rol FL3006 del Despacho de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional del cual tomó posesión mediante Acta número 106 del 17 de febrero de 2016, a **Víctor Julio Campos Espinel**, identificado con cédula de ciudadanía número 79384290.

Artículo 2º. A partir de la comunicación del presente acto administrativo el servidor anteriormente mencionado deberá reintegrarse al cargo de carrera administrativa del cual es titular.

Artículo 3º. Dar por terminado el nombramiento provisional realizado en la Resolución número 007848 del 13 de octubre 2016 al servidor **Víctor Hugo Useche**, identificado con cédula de ciudadanía número 3233967, del cargo de Gestor II Código 302 Grado 02, del Despacho de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional, a partir de que el titular del empleo, Víctor Julio Campos Espinel, retome las funciones del mismo.

Artículo 4º. Nombrar con carácter provisional en el empleo de Gestor II Código 302 Grado 02 rol FL3007, Gestor II de Fiscalización y Liquidación TACI, ubicado en el Despacho de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a **Víctor Hugo Useche**, identificado con cédula de ciudadanía número 3233967, por el término que la titular del mismo Rubiela Cruz Chaves, identificada con la cédula de ciudadanía número 51667978 permanezca separada de este.

Artículo 5º A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución y entregar copia de la misma a los señores **Víctor Julio Campos Espinel**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79384290 al correo [vcampose@dian.gov.co](mailto:vcampose@dian.gov.co) y **Víctor Hugo Useche**, identificado con cédula de ciudadanía número 3233967, al correo [vuseche@dian.gov.co](mailto:vuseche@dian.gov.co).

Artículo 6º. Como garantía a la oportunidad de reclamaciones laborales, publicar a la solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal la presente resolución en la DIANNET, y a partir del día siguiente de esta publicación cuentan los cinco días para su oportuna interposición.

Artículo 7º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Gestión de Personal, a la Coordinación de Historias Laborales, a la Coordinación de Nómina y a la Despacho de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional.

Artículo 8º. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el *Diario Oficial* la presente resolución.

Artículo 9º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 7 de febrero de 2017.

El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.  
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 00228 DE 2017
(marzo 28)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se implementará de manera gradual y progresiva, atendiendo a los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el riesgo de una revictimización como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.

Que de acuerdo con la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) donde se adelantarán los análisis previos para la inscripción de predios en el RTDAF.

Que el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo 4° del Decreto número 440 de 2016, dispone que para la apertura y cierre de cada microzona se adelantarán con suficiente **antelación** campañas informativas, a fin de dar publicidad a las respectivas decisiones.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4. del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el retorno y seguridad.

Que la Dirección Territorial Meta de la UAEGRTD, se propuso microfocalizar la vereda de La Julia, municipio de Uribe, departamento Meta, en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción en el RTDAF, respecto de predios ubicados en esa zona y teniendo en cuenta el documento de análisis situacional elaborado por el área social de la Dirección Territorial de fecha 28 de marzo 2017.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de inteligencia, mediante oficio sin número del 11 de noviembre de 2017, en el que describió la situación general de seguridad en la vereda de La Julia, municipio de Uribe, departamento Meta.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4. del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR).

Que en sesión de noviembre 16 de 2016, el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional, respecto de la(s) zona(s) a intervenir. Lo anterior, se consignó en el Acta número 009 suscrita el 16 de noviembre de 2016 por los asistentes Diana Esmeralda Herrera Patiño, Directora Territorial Meta de la UAEGRTD, la doctora Martha Cecilia Pastrana, Procuradora Delegada para Restitución de Tierras, Brigadier General Juan Pablo Forero Tascon, Comandante Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), Coronel Luis Enrique Rodríguez Forero, Comandante Brigada Móvil 1, Coronel Néstor Caro Gutiérrez, Comandante Brigada Móvil 3, MY. Juan Carlos Leyton, Comandante Operativo Comando de Policía Meta.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En mérito de lo expuesto, la suscrita,

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la vereda La Julia, municipio de Uribe, departamento Meta, representado en el mapa número UT MT 50370 MF 001, elaborado por esta Dirección

Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS<sup>1</sup>) puntos extremos del área seleccionada, así:

COORDENADAS LÍMITE ÁREA MICROFOCALIZADA URIBE VEREDA LA JULIA				
Id	NORTE	ESTE	LATITUD	LONGITUD
1	822701	978345	2° 59' 34,127" N	74° 16' 20,279" W
2	822768	978924	2° 59' 36,313" N	74° 16' 1,537" W
3	820898	981461	2° 58' 35,472" N	74° 14' 39,361" W
4	820926	981898	2° 58' 36,382" N	74° 14' 25,213" W
5	822529	982917	2° 59' 28,577" N	74° 13' 52,238" W
6	822980	985241	2° 59' 43,264" N	74° 12' 36,978" W
7	820462	986317	2° 58' 21,298" N	74° 12' 2,128" W
8	818344	987092	2° 57' 12,334" N	74° 11' 37,000" W
9	816596	987878	2° 56' 15,414" N	74° 11' 11,563" W
10	814540	988935	2° 55' 8,489" N	74° 10' 37,315" W
11	813543	989002	2° 54' 36,043" N	74° 10' 35,154" W
12	812257	985346	2° 53' 54,171" N	74° 12' 33,519" W
13	812077	984087	2° 53' 48,306" N	74° 13' 14,287" W
14	812248	983021	2° 53' 53,860" N	74° 13' 48,828" W
15	816220	980672	2° 56' 3,159" N	74° 15' 4,881" W
16	818611	980064	2° 57' 20,987" N	74° 15' 24,601" W
17	821641	978645	2° 58' 59,638" N	74° 16' 10,554" W

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Solicitar a las autoridades locales los apoyos institucionales que se requieran para la implementación del registro.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el *Diario Oficial*, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del Decreto número 1071 de 2015.

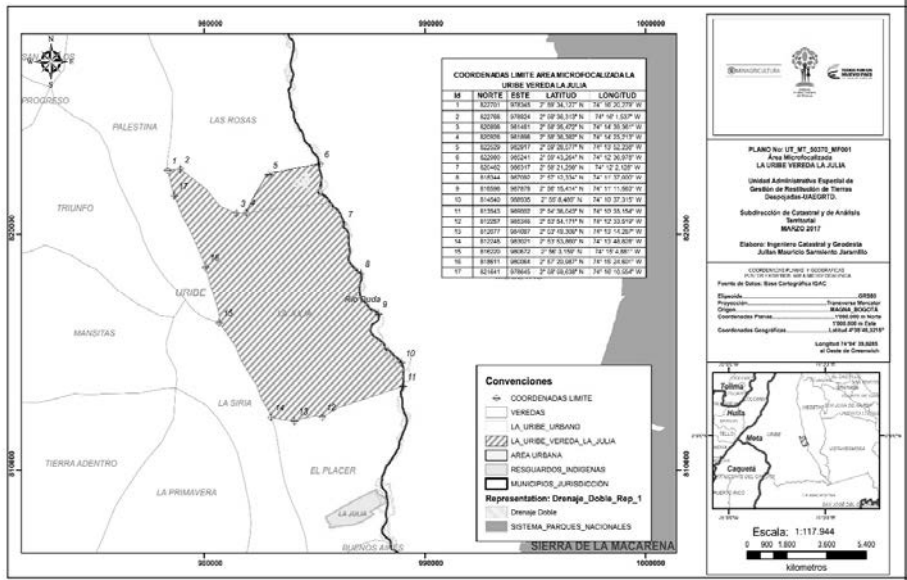
Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dado en el municipio de Villavicencio a 28 de marzo de 2017.

La Directora Territorial Meta,

*Diana Esmeralda Herrera Patiño,*  
Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas.



(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0233 DE 2017

(marzo 29)

*por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.*

La Directora Territorial del Meta, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, el Decreto número 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012, y

<sup>1</sup> MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:

Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos en un plano.



CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el parágrafo único del artículo 2.15.1.2.4. del Decreto número 440 de 2016, que modifica el 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) donde se adelantarán los análisis previos para la inscripción de predios en el RTDAF.

Que el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo 4° del Decreto número 440 de 2016, dispone que para la apertura y cierre de cada microzona se adelantarán con suficiente **antelación** campañas informativas, a fin de dar publicidad a las respectivas decisiones.

Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto número 1071 de 2015, se macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra el departamento del Vichada.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4. del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el retorno y seguridad.

Que la Dirección Territorial Meta, de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar el municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada, ubicación que se establece en las coordenadas que forman parte del presente acto administrativo, en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona; y según se evidencia del análisis situacional de fecha 28 de marzo de 2017 elaborado por el Grupo de Apoyo Social de la Dirección Territorial Meta.

Que el Ministerio de Defensa Nacional a través del CI2RT, en virtud de solicitud de la Dirección Territorial Meta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, presentó informe técnico de inteligencia a través de CI2RT A-2017-Sin número /SIPOL – GRUPI 29 de marzo 9-2017 técnico de inteligencia, en el que describe la situación general de seguridad, dentro de otros, del municipio de Puerto Carreño, en el departamento del Vichada, señalado en el plano predial **UT\_MT 99001 MF001**, el cual forma parte integral de la presente resolución.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4. del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR).

Que el día 10 de marzo de 2017, como queda constancia del acta correspondiente, se reunió el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras en las instalaciones del Comando de Policía Vichada, con la asistencia de la doctora Diana Esmeralda Herrera Patiño, Directora Territorial Meta de la UAEGRTD; Coronel César Augusto Mirando (Comandante Policía Vichada); Coronel Fabián R. Vargas (Comandante BR-28 del Ejército Nacional); Franklin Olaya (Subcomandante Departamento de Policía Vichada); Mauricio Rosales (Jefe SIPOL-MEVIC); Teniente Coronel Vásquez B. Robert (Comandante BAFIM 51 Armada Nacional); Daniel Felipe Amaya (Escuela de Inteligencia Martha Pastrana Morán (Procuradora Judicial II delegado para asuntos de Restitución de Tierras Meta); en donde se determinó que se encuentran dadas las condiciones de seguridad y disponibilidad de la fuerza pública para iniciar el proceso de microfocalización en el municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada, ubicación exacta se establece en las coordenadas que forman parte del presente acto administrativo, y por ende, procede la intervención del proceso de restitución.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de

restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la totalidad del municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada, representado en el Plano **UT\_MT 99001 MF001**, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS<sup>21</sup>) puntos extremos del área seleccionada, así:

COORDENADAS LÍMITE ÁREA MICROFOCALIZADA PUERTO CARREÑO				
Id	NORTE	ESTE	LATITUD	LONGITUD
1	1177245	1583416	6° 10' 22,411" N	68° 48' 48,700" W
2	1184595	1663432	6° 13' 52,939" N	68° 5' 36,003" W
3	1195271	1695324	6° 19' 26,363" N	67° 48' 20,380" W
4	1181375	1734296	6° 11' 41,335" N	67° 27' 26,151" W
5	1159689	1739849	5° 59' 57,926" N	67° 24' 35,437" W
6	1108733	1719362	5° 32' 37,765" N	67° 35' 55,980" W
7	1100944	1716407	5° 28' 26,861" N	67° 37' 34,110" W
8	1086247	1695776	5° 20' 38,398" N	67° 48' 45,108" W
9	1081458	1680069	5° 18' 8,540" N	67° 57' 13,806" W
10	1090731	1654140	5° 23' 16,948" N	68° 11' 8,368" W
11	1103181	1615025	5° 30' 12,268" N	68° 32' 8,854" W
12	1090751	1591357	5° 23' 36,369" N	68° 44' 57,840" W
13	1093493	1584021	5° 25' 7,356" N	68° 48' 54,342" W
14	1136580	1583632	5° 48' 24,178" N	68° 48' 54,365" W

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Solicitar a las autoridades locales los apoyos institucionales que se requieran para la implementación del registro.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el **Diario Oficial**, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del Decreto número 1071 de 2015.

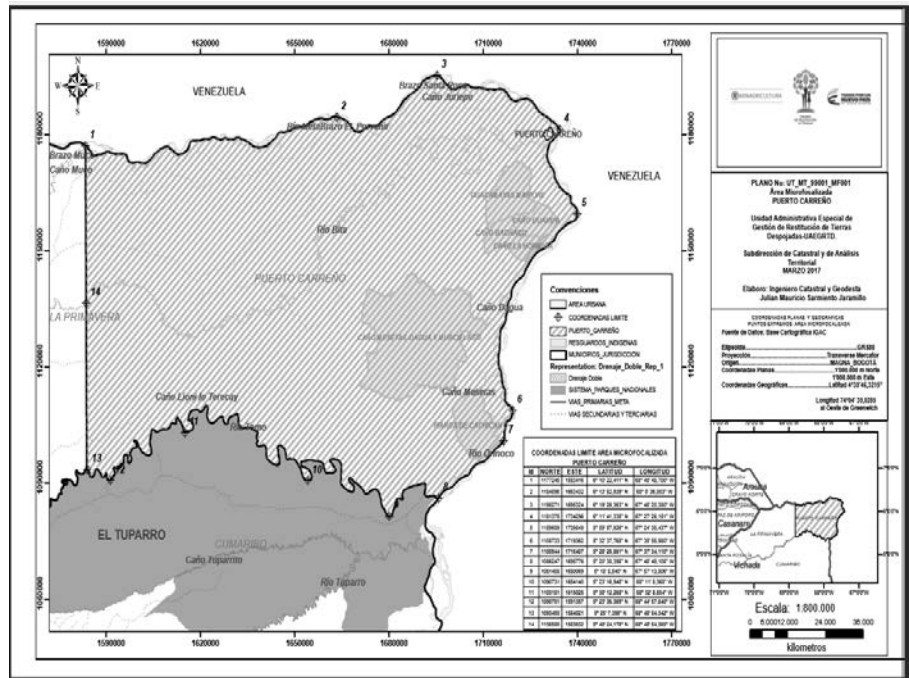
Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dada en el municipio de Villavicencio a 29 de marzo de 2017.

La Directora Territorial Meta,

Diana Esmeralda Herrera Patiño,  
Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas.



(C. F.).

<sup>21</sup> MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:

Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos en un plano 0.

## ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –  
Incoder en Liquidación

## ACTAS

## ACTA FINAL DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE 2017

(marzo 28)

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Liquidación, teniendo en consideración que:

Que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) fue creado mediante Decreto número 1300 de 2003, y reorganizado por los Decretos números 3759 de 2009 y 2623 de 2012, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que mediante el Decreto 2365 de 2015 el Gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Que en el artículo 3° del Decreto 2365 de 2015 se estableció como efecto de la liquidación, que el Incoder en Liquidación, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar operaciones, convenios y celebrar los contratos necesarios para su liquidación.

Que el régimen de liquidación será el determinado por el Decreto 2365 de 2015, por el Decreto-ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten. En lo no previsto en dichas disposiciones, se aplicará, en lo pertinente, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan.

Que el artículo 3° del Decreto 2365 de 2015 determinó el plazo de un año, contado a partir de la fecha de vigencia del decreto, para terminar la liquidación. Dicho plazo no fue prorrogado.

Que el objeto y las funciones que venía desarrollando el Incoder se transfirieron a las Agencias creadas en desarrollo de las facultades previstas en el artículo 107 de la Ley 1753 de 2015, sin que ninguna de estas funciones las asumiera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el Decreto-ley 2363 de 2015 y la Agencia de Desarrollo Rural, a través del Decreto-ley 2364 de 2015.

Que mediante el Decreto número 1850 de 2016, se modificaron los artículos 16 y 22 del Decreto 2365 de 2015 y se adoptaron medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Liquidación.

En cumplimiento del artículo 5° numeral 19 y Artículo 19 y 20 del Decreto 2365 de 2015, Decreto 421, 1193 y 1194 de 2016 el Incoder el Liquidador elaboró un programa de supresión de cargos y el cronograma de ejecución, el cual mediante oficio número 20162103098 del 25 de enero de 2016, se remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y con el concepto favorable, se implementó, posteriormente este programa se actualizó en el mes de mayo 2016.

Que las actuaciones judiciales en curso o que surjan con posterioridad requieren del manejo e intervención de la entidad técnica competente que haya asumido las funciones respectivas del Incoder, esto es, la Agencia de Desarrollo Rural o la Agencia Nacional de Tierras, según el objeto procesal.

Que de igual manera se debe garantizar la continuidad de la representación judicial con respecto a los procesos que tengan origen en asuntos netamente administrativos y/o laborales con ocasión del proceso liquidatorio del Incoder, y los posteriores al cierre de la respectiva liquidación, por las mismas materiales.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000; artículo 29 del Decreto 2365 de 2015 y artículo tercero (3°) del Decreto 1850 de 2016, el Incoder en Liquidación, antes de la extinción de su personería jurídica, suscribió el contrato de fiducia mercantil número 072-2016 con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario- Fiduciaria S. A., a través del cual se constituyó el fideicomiso denominado Patrimonio Autónomo de Remanentes Incoder en Liquidación, respecto del cual Fiduciaria S. A., actúa única y exclusivamente como administrador y vocero, para realizar las gestiones propias conforme al contrato en los términos y condiciones de las instrucciones que en él y sus anexos se establecen.

Que mediante actas se realizaron las entregas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras. Además, mediante resoluciones y anexos al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Incoder en Liquidación.

Que dentro del proceso de entrega del Incoder en Liquidación se suscribieron: • 236 actas de entrega, • 229 actas de entrega de Archivos y memoria Institucional a las Agencias, • 2 Resoluciones de transferencia de los Distritos de Riego de pequeña, mediana y gran escala, • 9 resoluciones de transferencias de inmuebles a las Agencias, • 10 Resoluciones de transferencia de bienes muebles a las Agencias, • 8 Resoluciones de transferencia de inmuebles y bienes muebles al Patrimonio Autónomo. • 7 Resoluciones que reconocen reclamaciones presentadas.

Que de acuerdo al artículo 31 del Decreto 2365 del 2015, el Liquidador deberá presentar un informe final al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de los tres (3) meses siguientes, de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto-ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006 y posterior al informe final deberá elaborar el acta final de la liquidación.

Que mediante radicado número 201731300042452 del 24 de febrero de 2017, el Liquidador entregó el informe final del cierre del proceso liquidatorio al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Surtido el trámite anterior, el Liquidador atendió las observaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentando el informe final el día 27 de marzo de 2017.

El informe final ajustado y complementado no presenta objeciones por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Conforme a lo anterior, en la ciudad de Bogotá D. C., a los 28 días del mes de marzo de 2017, se reunieron en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: por parte de Incoder en Liquidación en su calidad de Liquidador, Mauro Rodrigo Palta Cerón y por parte del Ministerio, Aurelio Iragorri Valencia en su calidad de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, a efectos de suscribir la presente acta final del proceso liquidatorio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Liquidación.

La presente acta deberá publicarse en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 38 del Decreto-ley 254 de 2000 y se complementa con la información y documentación contenida en el informe final.

Se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los 28 días del mes de marzo de 2017.


El Liquidador del Incoder,


*Mauro Rodrigo Palta Cerón.*

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

*Aurelio Iragorri Valencia.*

(C. F.).







## NUESTRA PÁGINA WEB


### [www.imprenta.gov.co](http://www.imprenta.gov.co)

Cualquier ciudadano a título personal o a nombre de una entidad puede presentar peticiones de información, quejas, reclamos, devoluciones, denuncias de corrupción, sugerencias o felicitaciones a la Imprenta Nacional de Colombia”.



Carrera 66 No. 24-09  
PBX: 4578000  
Línea Gratuita: 018000113001  
[www.imprenta.gov.co](http://www.imprenta.gov.co)

 @ImprentaNalCol

 ImprentaNalCol



CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0110 – 0171 DE 2017

(marzo 22)

por medio de la cual se fijan las tarifas para los servicios que presta la CVC durante el año 2017, y se toman otras determinaciones.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de las facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, contenidas en la Constitución Política, Decreto-ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 13 y artículo 46 numeral 4, Acuerdo AC número 03 de marzo 26 de 2010, Resoluciones número 0438 de 2001, 1029 de 2001 y 0619 de 2002, originarias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y

CONSIDERANDO:

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, constituyen patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas entre otros, las tarifas que perciban conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes, así como los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos.

Que mediante la Resolución número 1029 de noviembre 13 de 2001, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijó para todo el país, por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental que conlleva la expedición de un Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica de fauna y productos del recurso flora de bosque natural, incluidos los bosques naturales de Guadua, un valor único de 1.46 salarios mínimos diarios legales vigentes (s.m.d.l.v.). Posteriormente, en el año 2002, se expidió la Resolución número 0619 de julio 9, estableciendo que el salvoconducto nacional para la movilización de los productos primarios provenientes de plantaciones forestal será un valor único de un valor único de punto uno cinco cero nueve (0.1509) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Que con excepción de los salvoconductos, los servicios y ventas de productos cuyo cobro se establece en la presente resolución, no corresponden a los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las Corporaciones Autónomas Regionales y por lo tanto no están sometidos a la estructura de costos y topes del artículo 96 de la Ley 633 de 2000, tal es el caso, por ejemplo, de la venta de plántulas de viveros, de alevinos y otros como análisis de laboratorio; alquiler de equipos e instalaciones.

Que los servicios y ventas de productos cuyo cobro se establece en la presente resolución, corresponden a los servicios que se prestan como la expedición de conceptos para el uso o aprovechamientos de los recursos naturales renovables, venta de plántulas de viveros, de alevinos, así como análisis de laboratorio, realización de estudios hidrológicos, calibración de equipos, alquiler de instalaciones y similares, y venta de publicaciones y folletos.

Que es necesario actualizar las tarifas fijadas mediante la Resolución número 0100 número 0110-0327-2016, de mayo 16 de 2016, de acuerdo a la política de precios y procedimientos internos y autónomos que establezca la autoridad ambiental, para cada caso; ajustándose a los precios del mercado con el fin de que sean competitivos, y en algunos casos los ajustes se realizan de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al año 2016 decretado por el Gobierno nacional, el cual asciende al 5,75%; valores que al liquidarse se aproximaron al múltiplo de cien más cercano.

Que adicional al cobro de tarifas por la venta de servicios prestados y venta de productos, es necesario establecer también lo relacionado con los costos de reproducción de la información pública generada o controlada por la entidad, en desarrollo de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, y su Decreto Reglamentario número 0103 de 2015.

Que al respecto en el artículo 3°. *Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública* de la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, se dispone en aplicación del Principio de gratuidad, el acceso a la información pública de forma gratuita y que no se podrán cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información.

Que mediante el Decreto número 0103 de enero 20 de 2015, se reglamentó parcialmente la Ley 1712 de 2014, y con respecto a la aplicación del principio de gratuidad y costos de reproducción de la información pública, dispone en el artículo 20, lo siguiente:

“...

**Artículo 20. Principio de gratuidad y costos de reproducción.** En concordancia con lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley 1712 de 2014, en la gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, los sujetos obligados deben:

(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.

(2) Permitir al ciudadano, interesados o usuario:

(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta;

(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Publicación de Información;

(c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al disponible y sea necesaria la transformación de la información, de acuerdo con lo establecido por el sujeto obligado en el Acto de Motivación de los costos de reproducción de Información Pública.

Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para realizar la reproducción.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y el sujeto obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le cobrará costo alguno de reproducción de la información.

Que posteriormente en el artículo 21 del Decreto número 0103 de enero 20 de 2015, sobre la motivación de los costos de reproducción de información pública, se establece:

“...

**Artículo 21. Motivación de los costos de reproducción de información pública.** Los sujetos obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo o documento equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia del mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de parámetros del mercado.

El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de información pública debe ser suscrito por funcionario o empleado del nivel directivo y debe ser divulgado por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artículo 4 ° del presente decreto.

**Parágrafo 1°.** Los reproducción información, el obligado debe tener en cuenta que la información pública puede ser suministrada a través de los diferentes medios acuerdo con su formato y medio de almacenamiento, entre ellos: fotocopias, medios magnéticos o electrónicos, memorias USB, Discos Compactos, DVD u otros que permitan reproducción, captura, distribución, e intercambio de información pública.

**Parágrafo.** Cuando se dé información relacionadas con la prestación de un trámite a cargo del sujeto obligado, los costos reproducción de la información solicitada estarán a o tarifas establecidas para la realización trámite, normas que reglamentan el mismo.”

Que la Corporación no cuenta con un servicio propio de fotocopiado de documentos, por lo cual para facilitar la reproducción de la información pública solicitada por los ciudadanos, se tiene contratada una persona que presta dicho servicio tanto a la entidad como a los ciudadanos. Para el año 2017, el costo de fotocopiado de documentos asciende a la suma de \$120 (incluido IVA del 19%) por folio de acuerdo con el contrato suscrito.

Que con respecto a la reproducción de información cartográfica e heliográfica disponible, el valor de la tarifa a cobrar incluye los costos del papel especial que exige su copiado mediante plotter.

Que en cuanto a la información que repose en formato electrónico o digital, esta deberá ser suministrada a los ciudadanos por las distintas dependencias de la CVC, a través de los diferentes medios acuerdo con su formato y medio de almacenamiento, entre ellos: medios magnéticos o electrónicos, memorias USB, Discos Compactos, DVD; caso en los cuales solo se cobrará el valor del CD o DVD, si estos son suministrados por la Corporación.

Que es función del Director General de la CVC administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Corporación.

Que con fundamento en los anteriores considerandos, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de sus facultades legales, RESUELVE:

**Artículo 1°.** Fijar las tarifas para el cobro de los diferentes servicios que a través de sus dependencias presta la Corporación, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

**Artículo 2°.** Fijar para toda el Área de Jurisdicción de la CVC por concepto de la expedición y/o emisión del salvoconducto único nacional para la movilización de productos primarios provenientes de plantaciones protectoras o productoras-protectora, así como las plantaciones protectoras o productoras-protectora de guadua, cañabrava o bambú o de los sistemas o arreglos silvícolas<sup>1-2</sup>, un valor único de *punto uno cinco cero nueve (0.1509) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV)*, lo cual equivale para el año 2017 a \$3.700 moneda corriente. *(5001 y 5002)*.

**Parágrafo.** El cobro a que se refiere el artículo anterior, no contempla bajo ningún aspecto el valor de la tasa de aprovechamiento, por cuanto es un concepto diferente, y cuyo cobro debe hacerse por motivos y en oportunidades diferentes e independientes al que implica la expedición del salvoconducto único nacional.

**Artículo 3°.** Fijar para toda el área de Jurisdicción de la CVC por concepto de los servicios de evaluación por la expedición del Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica<sup>3</sup>, un valor único de *cero punto cincuenta y uno (0.51) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV)*, lo cual equivale para el año 2017 a \$12.600 moneda corriente. *(7378)*.

**Artículo 4°.** Fijar para toda el área de Jurisdicción de la CVC por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento por la expedición del Salvoconducto Único Nacional para

<sup>1</sup> Los productos primarios son aquellos obtenidos durante el proceso de manejo y aprovechamiento directo de plantaciones forestales o de los diferentes sistemas o arreglos silvícolas. Se incluyen dentro de estos:

Productos primarios maderables. Son los productos obtenidos directamente a partir del aprovechamiento de las especies forestales maderables, tales como trozas, bloques, bancos, tablones, tablas, postes, madera rolliza, chapos y astillas, entre otros.

Productos primarios no maderables. Son los productos diferentes a la madera como follajes, gomas, resinas, látex, frutos, cortezas, estípites, semillas y flores, entre otros.

<sup>2</sup> Que no correspondan a un sistema agroforestal definido en el artículo 2 del Decreto Reglamentario número 1498 de 2008, que establece: “Sistema agroforestal: Se entiende por sistema agroforestal, la combinación de cultivos forestales con fines comerciales con cultivos agrícolas o actividades pecuarias.”.

<sup>3</sup> Especímenes de la diversidad biológica de fauna y productos del recurso flora de bosque natural, incluidos los bosques naturales de Guadua.

la movilización de especímenes de la diversidad biológica<sup>4</sup>, un valor único de *uno punto cuatro seis (1.46) salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV)*, lo cual equivale para el año 2017 a \$36.000 moneda corriente. *(7211)*.

Parágrafo. El cobro a que se refiere el artículo anterior, no contempla bajo ningún aspecto el valor de la tasa de aprovechamiento, por cuanto es un concepto diferente, y cuyo cobro debe hacerse por motivos y en oportunidades diferentes e independientes al que implica la expedición del Salvoconducto Único Nacional.

Artículo 5°. *Excepción del cobro.* La movilización de los especímenes de la diversidad biológica que hayan sido obtenidos de aprovechamientos forestales domésticos, están exentos del pago de los servicios de evaluación y seguimiento que conlleva la expedición de los Salvoconductos Únicos Nacionales.

Artículo 6°. Fijar como Tasa de Aprovechamiento de Productos Forestales, las siguientes sumas, teniendo en cuenta la Categoría de Especies, así:

CATEGORÍA DE ESPECIES	1ª. MUY ESPECIALES	2ª ESPECIALES	3ª ORDINARIAS
TASA	\$16.000 /m <sup>3</sup>	\$12.100 /m <sup>3</sup>	\$9.000 /m <sup>3</sup>
<i>(EXCLUIDO DE IVA)</i>	<i>(600)</i>	<i>(601)</i>	<i>(602)</i>

Las sumas fijadas tienen la siguiente destinación:

30% correspondiente a la participación nacional; 40% a servicios técnicos; 30% a Investigación Forestal.

Artículo 7°. Fijar como Tasa de Aprovechamiento para Guadua, Cañabrava y Bambú las siguientes tarifas, exceptuando para los permisos domésticos:

CLASE APROVECHAMIENTO	TIPO I	TIPO II
TASA	\$3.200 /m <sup>3</sup> <i>(417)</i>	\$1.700 /m <sup>3</sup> <i>(8130)</i>

*(EXCLUIDO DE IVA)*

Artículo 8°. Fijar como valor por la venta de alevinos los que a continuación se relacionan:

a) VENTA DE ALEVINOS	
- Bocachico con fines de repoblación de humedales	\$240 / unidad <i>(7009)</i>

*(EXCLUIDO DE IVA)*

Artículo 9°. Fijar por la venta de especies producidas en el Vivero San Emigdio de la Corporación, los siguientes valores:

1. Especies forestales:

Categoría Especie	Bolsa 4 x 8	Bolsa 5.5 x 7	Bolsa 10 x 14
a) Forestales protectoras –productoras	\$460 <i>(7013)</i>	\$580 <i>(7014)</i>	
b) Forestales, ornamentales		\$580 <i>(7020)</i>	\$6.500 <i>(7023)</i>
c) Guadua		\$910 <i>(7015)</i>	
d) Especie con semilla mejorada	\$800 <i>(7018)</i>	\$800 <i>(7019)</i>	
e) Frutales propagados por semilla		\$700 <i>(7021)</i>	\$6.500 <i>(7022)</i>
f) Palmas		\$1.300 <i>(7017)</i>	\$6.500 <i>(7024)</i>
<i>(EXCLUIDO DEL IVA)</i>			

a) Entiéndase por especies forestales protectoras–productoras, aquellas cuyo objeto de siembra está relacionado con proyectos o no, de protección, conservación, recuperación de ecosistemas y/o producción entre las que se encuentran:

Aliso, Cedro de altura, Cedro rosado, Leucaena, Acacias ( negra, Japonesa, mangium, blanca, bracinga), Matarratón, Cambuilo, Cachimbo, Roble, Molde, Mestizo, Sauce, Nogal, Chiminango, Chambimbe, Eucaliptos Coníferas, Arrayán Bohío, Castaño, Chocho rojo, Nacadero, Balso, Guayacán de manizales, Guayacán lila, Guayacán blanco, Guayacán amarillo, Chachafruto, Totumo, Trapichero, Trupillo, Chirlobirlo, Varasanta, Caobo, Iguá, Ceiba roja o tolúa., Dinde mora, Fríjolillo, Carbonero rojo, Carbonero gigante, Caracolí, Urapán, Flor amarillo, Algarrobo, Árbol loco, Árbol de la cruz, Mangle dulce, Molinillo, Arenillo Cucharo, entre otros;

b) Entiéndase por especies forestales ornamentales, aquellas cuyo objetivo de siembra está relacionado con proyectos o no, cuya finalidad es la ornamentación rural o urbana (embellecimiento o mejoramiento de predios, parques y avenidas como son:

Acacia rubiña, Acacia Hawaiana, Palmas, Guayacán lila, Guayacán blanco, Guayacán amarillo, Tulipán africano, Ceiba pentandra, Gualanday, Samán, entre otros;

c) Entiéndase por frutales, a las especies cuyo objetivo de siembra está relacionado con proyectos o no, cuya finalidad no implica una producción comercial de los frutos y su propagación es por semilla. Entre estas especies se encuentran:

Algarrobo, Caimo, Pomarrosa, Madroño, Guanábano, Pera de malaca, Zapote, Árbol del pan, Níspero, Mamoncillo, Níspero costeño, Mamey, Almirajo, Uvo de playa, Marañón, Boriojo, Tamarindo, Mango común, Anón, Grosello, Ciruelo, Chirimoyo, Guayabo común entre otros.

2. Especies arbustivas ornamentales.

Categoría Especie	Bolsa 5.5 x 7	Bolsa 10 x 14
Especie arbustivas ornamentales	\$600 <i>(7365)</i>	\$6.000 <i>(7366)</i>

*(EXCLUIDO DE IVA)*

<sup>4</sup> Especímenes de la diversidad biológica de fauna y productos del recurso flora de bosque natural, incluidos los bosques naturales de Guadua.

Entiéndase por especies arbustivas ornamentales a las plantas de mediana altura, de tallo leñoso y corto, cuya finalidad u objetivo de siembra es el ornato o embellecimiento. Entre estas se encuentran:

Resucitado, Nevado, Croto, Lluvia de oro, Veranera, Ébano, Bohío, entre otros.

Artículo 10. Fijar los siguientes valores a cobrar por los servicios prestados en los Centros de Educación Ambiental y de Transferencia de Tecnología.

a) Ingreso al Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso. <i>(EXCLUIDO DE IVA)</i>	Valor
• Estudiantes	\$2.900 <i>(4001)</i>
• Público en general	\$5.800 <i>(4002)</i>
b) Alquiler sala de conferencias del Instituto de Piscicultura Tropical. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$109.300 <i>(800)</i>
c) Alquiler sala de conferencias del centro de Transferencia de Tecnología – Guadualejo – Municipio de Buga. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$110.000 <i>(801)</i>
d) Alquiler de instalaciones del Centro de Transferencia de Tecnología Guadualajara para pernoctar – municipio de Buga. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$16.000 /noche <i>(802)</i>
e) Alquiler sala de conferencias del Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología San Emigdio. Municipio de Palmira. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$110.000 <i>(803)</i>
f) Alquiler de instalaciones del Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología San Emigdio para pernoctar. Funcionarios de la CVC. (Persona/Noche.). Particulares con acompañante CVC (Persona/Noche). Los Menores de 10 años no cancelan ningún valor. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$8.300 <i>(827)</i> \$16.500 <i>(804)</i>
g) Ingreso al Centro de Educación Ambiental de San Emigdio. <i>(EXCLUIDO DE IVA)</i>	
• Estudiantes (por día).	\$2.800 <i>(823)</i>
• Público en General (por día).	\$5.500 <i>(824)</i>
h) Ingreso al Centro de Educación Ambiental El Topacio, municipio de Cali, Corregimiento de Pance. <i>(EXCLUIDO DE IVA)</i>	
• Estudiantes por día.	\$2.800 <i>(3036)</i>
• Público en General por día.	\$5.700 <i>(3037)</i>
i) Ingreso al Centro de Educación Ambiental La Teresita corregimiento La Leonera, Municipio de Cali. <i>(EXCLUIDO DE IVA)</i>	
• Estudiantes por día.	\$2.900 <i>(3038)</i>
• Público en General por día.	\$5.700 <i>(3039)</i>
j) Ingreso al Centro de Educación Ambiental de Guacas Municipio de Bolívar. <i>(EXCLUIDO DE IVA)</i>	
• Estudiantes por día.	\$1.500 <i>(3040)</i>
• Público en General por día.	\$2.900 <i>(3041)</i>
k) Alquiler auditorio del Centro de Educación Ambiental y Transferencia de Tecnología–Centro Minero, localizado en el municipio de Ginebra. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$110.000 <i>(845)</i>

Artículo 11. Fijar las tarifas por los servicios de alquiler de:

CENTRO DE RECREACIÓN Y AUDITORIOS	VALOR
a) Alquiler de la casa de habitación número 25 ubicada en Calima – Darién (por día para funcionarios). <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$90.000 <i>(808)</i>
b) Alquiler de la casa o cabaña ubicada en las instalaciones del Club de la CVC (por día para funcionarios). <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$68.000 <i>(3043)</i>
c) Alquiler auditorio de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, municipio de Buga. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$110.000 <i>(844)</i>
d) Alquiler del Auditorio Bernardo Garcés Córdoba. Cali. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$659.000 <i>(805)</i>
e) Alquiler del Auditorio de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte, Municipio de Tuluá. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$110.000 <i>(843)</i>

VALOR ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES DE LA CVC – CALI

Tipo de servicio/horario/alquiler por día	Funcionarios y pensionados de la CVC*	Particulares
Instalaciones Deportivas, Recreativas y Culturales de la CVC Diurno. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$72.000 <i>(828)</i>	\$255.000 Hasta 200 personas <i>(829)</i> , \$509.000 mayores a 200 personas <i>(830)</i>
Instalaciones Deportivas, recreativas y culturales de la CVC Nocturno. <i>(MÁS IVA DEL 19%)</i>	\$90.000 <i>(831)</i>	\$657.000 Hasta 200 personas <i>(832)</i> , \$1.431.000 mayores a 200 personas <i>(833)</i>



Tipo de servicio/horario/alquiler por día	Funcionarios y pensionados de la CVC*	Particulares
Canchas de fútbol Diurno (MÁS IVA DEL 19%)	\$39.000 (834)	\$77.000 (835)
Canchas de fútbol Nocturno (MÁS IVA DEL 19%)	\$51.000 (836)	\$102.000 (837)

PRECIOS PARA INGRESO DE INVITADOS AL SEDE CAMPESTRE DEPORTIVA Y CULTURAL DE LA CVC – CALI

Adulto	\$3.900 (838)
Niño	\$2.600 (839)
VALOR ALQUILER SALÓN ROSARIO MORENO. (MÁS IVA DEL 19%)	
Valor para funcionario horario Diurno/día	\$37.000 (840)
Valor para funcionario horario Nocturno/día	\$48.000 (841)
Valor para particulares/hora hasta 50 personas)	\$72.000 (842)

\*Este cobro corresponde a servicios solicitados por el funcionario cuando estos no sean para eventos Corporativos o para el cumplimiento e sus funciones.

Parágrafo. El mobiliario, catering, elementos de aseo, o de uso personal y limpieza no se encuentran incluidos en los valores establecidos en las tarifas. Con relación a los horarios se entiende: Diurno comprende de las 8:00 a. m. a las 6:00 p. m., Nocturno: desde las 6:01 p. m. a la 1:00 a.m. El alquiler de las canchas de fútbol será máximo por 3 horas. Los servicios a prestar están sujetos a disponibilidad de los escenarios.

Artículo 12. Fijar las siguientes sumas por el trámite de expedición de conceptos técnicos relacionados con aguas subterráneas:

CONCEPTO (MÁS IVA DEL 19%)	VALOR
1. Concepto técnico para aljibe. (< 20 m)	\$754.000 (916) (915)
2. Concepto técnico para perforación de pozo.	\$1.522.000 (901) (900)

(EXCLUIDO DE IVA SI SE DESTINA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA, YADECUACIÓN DE TIERRAS, según los establece el numeral 12 del artículo 476 del Estatuto Tributario.<sup>5</sup>

Parágrafo. En el valor indicado por expedición del concepto y demás servicios, queda incluida la visita ocular al predio.

Artículo 13. Fijar como valores a pagar por el trámite administrativo de expedición de los siguientes conceptos:

CONCEPTO (MÁS IVA DEL 19%)	VALOR
• De suelos.	\$1.757.000 (1010) (1002)
• Baldíos. Nota: Si el concepto es solicitado por el Incoder se exceptúa de pago.	\$72.300 (1013) (1004)
• Concepto técnico y certificación marítima y terrestre.	\$72.300 (3020) (3007)
• Concepto técnico para las estaciones de servicio u otras actividades que lo requieran dentro del proceso de certificación, siempre y cuando no haga parte del otorgamiento de un Derecho Ambiental.	\$72.300 (3044) (3045)
• Concepto técnico de Intensidad Auditiva <sup>6</sup>	\$72.300 (3048) (3049)
• Concepto técnico ambiental en general <sup>7</sup>	\$72.300 (3050) (3051)
• Concepto técnico forestal <sup>8</sup> .	\$72.300 (3052) (3053)

<sup>5</sup> “Numeral 12: Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos productos:

a) El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria;  
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, administración y conservación;  
c) La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria;  
d) La preparación y limpieza de terrenos de siembra;  
e) El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y terrestre de sembradíos;  
f) El corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios;  
g) El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas;  
h) La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin procesamiento industrial;  
i) La asistencia técnica en el sector agropecuario;  
j) La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros;  
k) El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de ganado mayor y menor;  
l) La siembra;  
m) La construcción de drenajes para la agricultura;  
n) La construcción de estanques para la piscicultura;  
o) Los programas de sanidad animal;  
p) La perforación de pozos profundos para la extracción de agua;  
q) Los usuarios de los servicios excluidos por el presente numeral deberán expedir una certificación a quien preste el servicio, en donde conste la destinación, el valor y el nombre e identificación del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha certificación durante el plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual servirá como soporte para la exclusión de los servicios”.

<sup>6</sup> Expedidos a solicitud de las Alcaldías Municipales con el fin de actualizar las bases de datos de ubicación de los establecimientos públicos de acuerdo a la modificación de los planes de ordenamiento.

<sup>7</sup> Concepto técnico sobre el estado actual de un predio con relación a suelo, agua bosques, fauna.

<sup>8</sup> Concepto acerca del estado actual de la cobertura boscosa del predio, o realizar recomendaciones acerca de las especies que de acuerdo a las condiciones del predio se pueden implementar con el fin de proteger y/o conservar nacimientos o fuentes de agua.

CONCEPTO (MÁS IVA DEL 19%)	VALOR
• Concepto técnico para evaluar la viabilidad de instalación de tanques sépticos en vivienda unifamiliar <sup>9</sup> .	\$72.300 (3054) (3055)
• Visitas técnicas a instalaciones portuarias.	\$72.300 (3022) (3017)
• Verificación y autorización de exportación de productos de la diversidad biológica.	\$72.300 (3024) (8115)
• Visitas para conceptos técnicos en zonas de bajamar.	\$72.300 (3026) (8116)
• Revisión de proyectos de control de emisiones atmosféricas, y proyectos para la utilización de combustibles alternativos.	\$146.000 (3034) (3046)
• Revisión y aprobación del Plan de Contingencia para la prevención y control de derrames de los usuarios que manufacturen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos y que no hagan parte del trámite de Licencia Ambiental o de un permiso de vertimiento.	\$146.000 (3042) (3047)

(EXCLUIDO DE IVA SI SE DESTINA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA, YADECUACIÓN DE TIERRAS, según los establece el numeral 12 del artículo 476 del Estatuto Tributario.<sup>10</sup>

Parágrafo 1°. Se exceptúa el pago de visita y concepto técnico para el trámite del registro de las Reserva de la Sociedad Civil, o los solicitados dentro de los procesos de Restitución de Tierras (etapa administrativa o judicial); así como los conceptos requeridos en los trámites de otorgamiento de incentivos tributarios, con excepción de los casos donde la norma expresamente reglamenta su cobro.

Parágrafo 2°. Se exceptúan del pago indicado en el presente artículo, cuando el concepto sea solicitado por otra institución o entidad pública o judicial, incluidos los entes territoriales, en aplicación de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 962 de 2005, sobre supresión de trámites.

Artículo 14. Fijar los valores por la venta del material didáctico disponible así:

1. Folleto Bosques Andinos y Subandinos Valle del Cauca.	\$19.000 (7132)
2. Libro Aves de la Laguna de Sonso.	\$13.000 (7108)
3. Libro Especies Forestales del Valle del Cauca (KUN)**	\$43.000 (7130)
4. Libro Génesis y Desarrollo de una Visión de Progreso CVC 50 años.	
• Pasta Rústica.	\$51.000 (7343)
• Pasta Dura.	\$117.000 (7344)
5. Libros: Selvas bajas inundables Páramos Bosques andinos y subandinos Bosques secos y muy secos Humedales (Madreviejas) Peces Selva pluvial tropical (The Higlands the coastrain forest). (** Estos libros tienen un descuento del 35% por venta que realice la Librería con quienes se suscriban Convenios).	\$17.000 (7003) (8121) (7129) (7133) (7345) (7131) (8127)
6. Planes de manejo para la conservación de 16 especies focales de vertebrados en el Departamento del Valle del Cauca.	\$18.500 (8134)
7. Planes de manejo para la conservación de 22 especies focales de plantas en el Departamento del Valle del Cauca.	\$18.500 (8135)

(EXCLUIDO DE IVA)

\*\* Selvas bajas-(7003); Páramos-(8121); Bosques Andinos y sub-andinos-(7129); Bosques secos y muy secos-(7133); Peces-(7131); Humedales (Madreviejas)-(7345); Selva pluvial tropical-(8128).

Artículo 15. Fijar las siguientes sumas por concepto de los servicios prestados en el Laboratorio Ambiental, en relación con Análisis de Agua, Suelos y Residuos Sólidos:

ANÁLISIS (MÁS IVA DEL 19%)	VALOR
Alcalinidad a la fenoltaleína	\$11.500 (7041)
Alcalinidad total	\$11.500 (7042)

<sup>9</sup> Requisito de las empresas prestadoras de servicio de acueducto para otorgar la matrícula de acueductos donde no hay servicio de alcantarillado.

<sup>10</sup> “Numeral 12: Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos productos:

a) El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria;  
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, administración y conservación;  
c) La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria;  
d) La preparación y limpieza de terrenos de siembra;  
e) El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y terrestre de sembradíos;  
f) El corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios;  
g) El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas;  
h) La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin procesamiento industrial;  
i) La asist1 p) La perforación de pozos profundos para la extracción de agua;  
q) Los usuarios de los servicios excluidos por el presente numeral deberán expedir una certificación a quien preste el servicio, en donde conste la destinación, el valor y el nombre e identificación del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha certificación durante el plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual servirá como soporte para la exclusión de los servicios”.

ANÁLISIS (MÁS IVA DEL 19%)	VALOR
Arsénico.	\$80.000 <b>(7367)</b>
Bacteriológico completo	\$124.200 <b>(7043)</b>
Bicarbonatos	\$11.500 <b>(7368)</b>
Boro	\$25.000 <b>(7044)</b>
Calcio	\$13.000 <b>(7369)</b>
Carbonatos	\$11.500 <b>(7370).</b>
Carbono Orgánico total	\$75.400 <b>(7045)</b>
Cianuros	\$62.500 <b>(7046)</b>
Cloruros	\$13.000 <b>(7048)</b>
Clorofila.	\$41.000 <b>(8108)</b>
Coliformes fecales (NMP)	\$50.000 <b>(7049)</b>
Coliformes Totales (NMP)	\$74.200 <b>(7050)</b>
Color	\$7.200 <b>(7051)</b>
Conductividad eléctrica	\$5.900 <b>(7052)</b>
Corrosividad	\$11.000 <b>(8109)</b>
Demanda Béntica	\$38.400 <b>(7364)</b>
Demanda bioquímica de oxígeno	\$68.400 <b>(7053)</b>
Demanda de cloro	\$124.000 <b>(7054)</b>
Demanda química de oxígeno	\$58.000 <b>(7055)</b>
Detergentes.	\$51.000 <b>(4056).</b>
Digestión de metales	\$48.000 <b>(7057)</b>
Dureza cálcica	\$13.000 <b>(7058)</b>
Dureza total	\$13.000 <b>(7059)</b>
Extracción TCLP	\$50.400 <b>(7134)</b>
Fenoles	\$64.000 <b>(7060)</b>
Fluoruros	\$41.000 <b>(8112)</b>
Fosfatos	\$25.000 <b>(7061)</b>
Fósforo total	\$32.000 <b>(7062)</b>
Gas carbónico	\$6.800 <b>(7063)</b>
Gas sulfídrico	\$7.800 <b>(7064)</b>
Grasas	\$80.000 <b>(7065)</b>
Hidrocarburos	\$80.000 <b>(7066)</b>
Indice de Langelier	\$11.400 <b>(7067)</b>
Inflamabilidad	\$51.500 <b>(7137)</b>
Jar Test	\$234.500 <b>(7068)</b>
Magnesio	\$13.000 <b>(7371)</b>
Mercurio	\$80.000 <b>(7069)</b>
Metal por absorción atómica (Hierro, Manganeseo, Sodio, Potasio, Cobre, Zinc, Cadmio, Cromo, Níquel, Plomo, Plata, Aluminio.).	\$56.300 <b>(7070)</b>
Nitratos	\$62.200 <b>(7071)</b>
Nitritos	\$44.400 <b>(7072)</b>
Nitrógeno amoniacal	\$44.400 <b>(7073)</b>
Nitrógeno orgánico	\$44.400 <b>(7074)</b>
Nitrógeno Total	\$51.500 <b>(7075)</b>
Oxígeno disuelto	\$19.100 <b>(7076)</b>
Pesticidas órgano clorados	\$725.000 <b>(7077)</b>
Pesticidas Órgano fosforados	\$725.000 <b>(7363)</b>

ANÁLISIS (MÁS IVA DEL 19%)	VALOR
PH	\$7.900 <b>(7078)</b>
Reactividad (HCN )	\$77.100 <b>(7135)</b>
Reactividad H2S)	\$80.700 <b>(7136)</b>
Residuo filtrable ( sólidos disueltos)	\$29.000 <b>(7079)</b>
Residuo filtrable fijo	\$33.800 <b>(7080)</b>
Residuo no filtrable ( sólidos suspendidos )	\$31.500 <b>(7081)</b>
Residuo no filtrable fijo	\$33.800 <b>(7082)</b>
Residuo total ( sólidos totales)	\$29.000 <b>(7083)</b>
Residuo total volátil	\$34.100 <b>(7084)</b>
Sílice	\$25.000 <b>(7085)</b>
Sólidos sedimentables	\$11.500 <b>(7086)</b>
Sulfatos	\$15.400 <b>(7087)</b>
Sulfuros	\$7.200 <b>(7088)</b>
Temperatura	\$3.000 <b>(7089)</b>
Toxicidad aguda para Daphnia	\$670.000 <b>(7362)</b>
Turbiedad	\$4.500 <b>(7090)</b>
Total Análisis Caracterización suelos	\$63.000 <b>(7196)</b>
Total Análisis Caracterización Abono Orgánico	\$67.700 <b>(8124)</b>
Total Análisis Salinidad Suelos	\$39.500.00 <b>(8125)</b>
Análisis completo ( Caracterización más Salinidad ) Suelos	\$102.000 <b>(8126)</b>
Información disponible de muestreos en ríos ( estación)	\$7.600 <b>(7091)</b>
Muestreo de corrientes o vertimientos (sin transporte)	\$104.000 <b>(6036)</b>
Muestreo Hidrobiológico (sin transporte)	\$145.000 <b>(6037)</b>
Evaluación Hidrobiológica (por muestra)	\$203.000 <b>(6038)</b>
Monitoreos isocinéticos. Información disponible de monitoreos isocinéticos por chimeneas	\$316.500 <b>(7372)</b>

Artículo 16. Fijar el valor de los siguientes servicios relacionados con la realización de aforos y estudios hidrológicos así:

A. INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA (MÁS IVA DEL 19%)		TARIFA (\$)
• Realización aforos líquidos en corriente principal		\$763.000 <b>(6000)</b>
• Realización aforos líquidos en cauces pequeños		\$456.700 <b>(5999)</b>
B. PUBLICACIONES (EXCLUIDO DE IVA)		
• Informe de precipitación media en el departamento del Valle del Cauca		\$79.500 <b>(7037)</b>
• Boletín hidroclimatológico anual (digital o en medio magnético)		\$56.300 <b>(7038)</b>
C. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS (MÁS IVA DEL 19%)		
1. Estudios de caudales con base en el modelo HVB		
Valor del Estudio		Área de la Cuenca (Km²) > <b>100</b>
Nivel Diario	\$2.602.000 <b>(7349)</b>	\$3.180.000 <b>(7350)</b>
Nivel Mensual	\$1.842.000 <b>(7351)</b>	\$2.162.000 <b>(7352)</b>
Caudales de diseño	\$2.602.000 <b>(7355)</b>	\$3.067.000 <b>(7356)</b>
2. Otros estudios hidrológicos (valor hora)		\$163.000 <b>(7353)</b>

Artículo 17. Fijar las siguientes sumas por concepto de reproducción de información cartográfica disponible y por la expedición de copias heliográficas:

1. Copia de archivos magnéticos en papel Aurosbond, mediante plotter: (MÁS IVA DEL 19%)	VALOR
– Tamaños entre 100 x 100 cm y 70 x 50 cm	\$31.400 <b>(7092)</b>
– Tamaños iguales a ¼ de pliego, 50 x35 cm.	\$7.900 <b>(7093)</b>
– Tamaño carta	\$5.500 <b>(7094)</b>



<b>2. Copia de archivos magnéticos en papel Autoprint 90, mediante plotter: (MÁS IVA DEL 19%)</b>	
a) Tamaños entre 100 x 100 cm. y 70 x 50 cm.	\$36.500 <b>(7095)</b>
b) Tamaños iguales a ¼ de pliego, 50 x 35 cm.	\$10.600 <b>(7096)</b>
c) Tamaño carta	\$7.100 <b>(7097)</b>
<b>3. Copia de archivos magnéticos en papel Autochrome 130, mediante plotter: (MÁS IVA DEL 19%)</b>	
a) Tamaños entre 100 x 100 cm. y 70 x 50 cm.	\$39.500 <b>(7098)</b>
b) Tamaños iguales a ¼ de pliego, 50 x 35 cm.	\$13.600 <b>(7099)</b>
c) Tamaño carta	\$7.900 <b>(7100)</b>

<b>COPIAS HELIOGRÁFICAS (MÁS IVA DEL 19%)</b>	
1. Copiado heliográfico planos bases y temáticos diferentes escalas, tamaños mayores de 50 cm. X 70 cm.	\$21.400 <b>(7359)</b>
2. Copiado heliográfico planos bases y temáticos diferentes escalas, tamaños hasta 50 cm. X 70 cm.	\$8.200 <b>(7360)</b>

Parágrafo. Se exceptúan del pago indicado en el presente artículo, cuando el material cartográfico o las copias heliográficas, sean solicitados por los entes territoriales, los institutos de investigación estatal o las universidades públicas.

Artículo 18. Por concepto de la reproducción de información (fotocopias), se establece el siguiente valor:

<b>Fotocopias (INCLUIDO IVA DEL 19%)</b>	\$120 <b>(7004)</b>
--	------------------------

Artículo 19. Por la información disponible en medio magnético a suministrarse en CD o DVD a petición del Ciudadano, se cobrará únicamente el costo de los CD o DVD requeridos, si estos son suministrados por la CVC, así:

<b>Valor CD (INCLUIDO IVA DEL 19%)</b>	<b>\$4.500</b>
--	----------------

Artículo 20. El presente acto administrativo deroga las resoluciones que le sean contrarias, especialmente la Resolución número 0100 número 0110-0327-2016 de mayo 16 de 2016.

Artículo 21. Publíquese en el *Diario Oficial*, en el Boletín de actos administrativos y en la página web de la Corporación.

Dada en Santiago de Cali, a 22 marzo 2017.

Publíquese y cúmplase.

El Director General,

*Rubén Darío Materón Muñoz.*  
(C. F.).

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACUERDOS

ACUERDO CD NÚMERO 008 DE 2017

(marzo 27)

*por el cual se fija la tarifa de la tasa por uso de agua para el año 2017 en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).*

El Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, la Resolución número 085 de 1996, el Decreto número 155 de 2004, la Resolución número 865 de 2004, el Decreto número 4742 de 2005, la Resolución número 872 de 2006, el Acuerdo CD número 05 de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 155 de enero 22 del 2004 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentó el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Que mediante la Resolución número 865 de julio 22 de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptó la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales.

Que mediante el Decreto número 4742 de 2005 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se modificó el artículo 12 del Decreto número 155 de 2004.

Que mediante la Resolución número 872 de mayo 18 de 2006, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptó la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas subterráneas.

Que mediante el Acuerdo número 05 de 2006, se modificó el cálculo del monto a pagar por concepto de la tasa por uso de agua, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 4742 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ACUERDA:

Artículo 1°. Aplicar, conforme lo establecido en el Decreto número 4742 de 2005, que modificó el artículo 12 del Decreto número 155 de 2004, señalando que para el cálculo de la tasa por uso de agua para el año 2017 se empleará la siguiente formula:

$$TU_{2017} = TUA_{2017}$$

$$TUA_{2017} = TM * FR$$

Donde:

TU<sub>2017</sub> = Tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año 2017, expresada en pesos por metro cúbico (\$/m³).

TUA<sub>2017</sub> = Es la tarifa de la tasa por utilización de agua para el año 2017, expresada en pesos por metro cúbico (\$/m³).

TM = Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico (\$/m³).

FR= Corresponde al factor regional, que integra componente de disponibilidad, necesidades de inversión en recuperación de la cuenca hidrográfica y condiciones socioeconómicas de la población, que viene dado por la expresión:

$$FR = 1 + [C_k + C_E] * C_s$$

Donde:

Ck: Coeficiente de inversión fracción de los costos totales del plan de ordenación y manejo de la cuenca de que trata el decreto 1729 de 2002 no cubiertos por la tarifa mínima.

CE: Coeficiente de escasez que varía de acuerdo con la escasez del recurso hídrico considerando si la captación se realiza sobre agua superficial o subterránea.

Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas que toma valores de acuerdo con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Artículo 2°. Establecer, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 240 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cálculo de la tarifa mínima (TM) para el año 2017 entrega un valor de 0.88 pesos por metro cúbico.

Artículo 3°. Fijar para el año 2017 la tarifa de la tasa por uso (TU) de agua superficial y subterránea para uso doméstico y otros usos, tal como aparecen en los cuadros anexos, los cuales hacen parte del presente acuerdo.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el *Diario Oficial* y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santiago de Cali el día 27 de marzo de 2017.

Publíquese y cúmplase.

El Presidente,

*Dilian Francisca Toro Torres.*

La Secretaria,

*María Cristina Valencia Rodríguez.*

TARIFA AGUA SUPERFICIAL 2017						
No	CUENCA	COEFICIENTE DE ESCASEZ	FACTOR REGIONAL		TASA POR USO (\$/m3)	
			Otros Usos	Uso Domestico	Otros Usos	Uso Domestico
1	Amaime	5.00	6.78	5.96	5.96	5.24
2	Anchicaya	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
3	Arroyohondo	5.00	6.00	5.10	5.28	4.49
4	Bahia Buenaventura	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
5	Bahia Malaga	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
6	Bajo San Juan	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
7	Bolo	5.00	6.00	5.00	5.28	4.40
8	Bugalagrande	2.30	3.92	3.39	3.45	2.99
9	Cajambre	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
10	Cali	1.40	3.38	3.11	2.97	2.74
11	Calima	1.53	2.53	2.13	2.23	1.88
12	Cañaveral	1.47	2.47	2.06	2.17	1.81
13	Cañaveralajo	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
14	Catarina	1.11	2.11	1.79	1.86	1.57
15	Cauca	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
16	Chanco	1.22	2.22	1.84	1.95	1.62
17	Claro	2.12	3.12	2.78	2.74	2.45
18	Dagua	1.30	2.30	1.96	2.02	1.72
19	Desbaratado	5.00	6.00	5.03	5.28	4.42
20	El Cerrito	5.00	6.00	5.07	5.28	4.46
21	Fraile	5.00	6.00	5.06	5.28	4.45
22	Garrapatas	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
23	Guabas	5.00	6.37	5.35	5.60	4.70
24	Guachal	5.00	6.00	5.36	5.28	4.72
25	Guadalajara	5.00	6.96	6.25	6.13	5.50
26	Jamundi	5.00	6.96	6.16	6.12	5.42
27	La Paila	3.97	5.78	4.86	5.08	4.28
28	La Vieja	1.73	3.70	3.18	3.25	2.80
29	Las Cañas	5.00	6.00	5.13	5.28	4.51
30	Lili	5.00	6.00	5.45	5.28	4.80
31	Los Micos	5.00	6.00	4.97	5.28	4.37
32	Mayorquin	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
33	Mediacanoa	1.39	2.39	2.02	2.10	1.78
34	Melendez	5.00	6.00	5.45	5.28	4.80
35	Morales	5.00	6.00	5.17	5.28	4.55
36	Mulalo	5.00	6.00	5.10	5.28	4.49
37	Naya	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
38	Obando	5.00	6.86	5.50	6.04	4.84
39	Pescador	5.00	6.99	5.26	6.15	4.63
40	Piedras	5.00	6.00	4.68	5.28	4.12
41	Raposo	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
42	Riofrio	1.72	3.52	2.91	3.10	2.56
43	Rut	1.72	3.68	3.06	3.24	2.70
44	Sabaletas	5.00	6.00	5.07	5.28	4.46
45	San Pedro	5.00	6.83	5.86	6.01	5.16
46	Sonso	4.23	5.23	4.50	4.60	3.96
47	Timba	1.29	2.29	2.09	2.02	1.84
48	Tulua	1.71	3.43	3.09	3.02	2.72
49	Vijes	5.00	6.00	5.01	5.28	4.41
50	Yotoco	2.65	3.65	2.95	3.21	2.59
51	Yumbo	5.00	6.97	5.90	6.14	5.19
52	Yurumangui	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88

TARIFA AGUA SUBTERRANEA 2017						
No	CUENCA	COEFICIENTE DE ESCASEZ	FACTOR REGIONAL		TASA POR USO (\$/m3)	
			Otros Usos	Uso Domestico	Otros Usos	Uso Domestico
1	Amaime	10.00	11.78	10.25	10.36	9.02
2	Anchicaya	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
3	Arroyohondo	2.31	3.31	2.90	2.91	2.55
4	Bahia Buenaventura	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
5	Bahia Malaga	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
6	Bajo San Juan	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
7	Bolo	10.00	11.00	8.99	9.68	7.92
8	Buglagrande	0.00	1.62	1.51	1.42	1.33
9	Cajambre	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
10	Cali	0.00	1.98	1.87	1.74	1.65
11	Calima	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
12	Cañaveral	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
13	Cañaveralejo	8.46	9.46	8.53	8.32	7.51
14	Catarina	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
15	Cauca	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
16	Chanco	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
17	Claro	1.04	2.04	1.88	1.80	1.65
18	Dagua	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
19	Desbaratado	1.38	2.38	2.11	2.09	1.86
20	El Cerrito	10.00	11.00	9.13	9.68	8.04
21	Fraille	10.00	11.00	9.11	9.68	8.02
22	Garrapatas	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
23	Guabas	10.00	11.37	9.39	10.00	8.27
24	Guachal	10.00	11.00	9.73	9.68	8.56
25	Guadalajara	1.17	3.13	2.88	2.75	2.53
26	Jamundi	1.17	3.13	2.84	2.75	2.50
27	La Paila	0.00	1.81	1.66	1.60	1.46
28	La Vieja	0.00	1.96	1.78	1.73	1.57
29	Las Cañas	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
30	Lili	8.46	9.46	8.53	8.32	7.51
31	Los Micos	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
32	Mayorquin	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
33	Mediacanoa	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
34	Melendez	8.46	9.46	8.53	8.32	7.51
35	Morales	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
36	Mulalo	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
37	Naya	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
38	Obando	0.00	1.86	1.66	1.64	1.46
39	Pescador	0.00	1.99	1.70	1.75	1.50
40	Piedras	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
41	Raposo	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
42	Riofrio	0.00	1.80	1.61	1.59	1.41
43	Rut	0.00	1.96	1.74	1.73	1.53
44	Sabaletas	3.40	4.40	3.77	3.87	3.32
45	San Pedro	10.00	11.83	10.04	10.41	8.83
46	Sonso	10.00	11.00	9.29	9.68	8.17
47	Timba	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88
48	Tulua	1.16	2.88	2.61	2.53	2.30
49	Vijes	10.00	11.00	9.03	9.68	7.94
50	Yotoco	3.41	4.41	3.50	3.88	3.08
51	Yumbo	0.00	1.97	1.80	1.74	1.58
52	Yurumanguí	0.00	1.00	1.00	0.88	0.88

(C. F.).

VARIOS

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 DE 2017

(marzo 23)

por la cual se modifica la Resolución número 3 de 2016.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes 16 de 1990, 101 de 1993, 1133 de 2007, 1731 de 2014, y los Decretos número 1313 de 1990,1071 y 2371 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto en la Ley 16 de 1990 y los Decretos números 1313 de 1990 y 2371 de 2015, este último expedido bajo los lineamientos del literal e) del artículo 107 de la Ley 1753 de 2015, con el cual se concedieron facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear, reasignar, modificar y distribuir competencias, funciones u objetivos a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) con el fin de diseñar e implementar políticas de financiamiento, de gestión de riesgos agropecuarios y microfinanzas rurales, respetando en todo caso el esquema de inversión forzosa, siendo la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario el organismo rector del financiamiento del sector agropecuario, teniendo dentro de sus funciones la señalada en el literal n), del artículo 2° del Decreto número 2371 de 2015, los siguientes:

“n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales Crédito (LEC), del Incentivo a Capitalización Rural (ICR) y de otros incentivos o subsidios del Estado que estén relacionados exclusivamente con el crédito y/o riesgo agropecuario y rural.

Que los artículos 2.5.1., y 2.5.2 del Decreto número 1071 de 2015 establecen:

“Artículo 2.5.1. El Incentivo a la Capitalización Rural. El Incentivo a la Capitalización Rural es un derecho personal intransferible que, previo el cumplimiento de determinadas condiciones, se da a toda persona natural o jurídica que ejecute un nuevo proyecto de inversión financiado total o parcialmente, con un crédito redescontado en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), de conformidad con lo dispuesto en este título y en las reglamentaciones que expida la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA). (...).

“Artículo 2.5.2. Definición de los proyectos y actividades objeto del incentivo. La CNCA con base en lo dispuesto en esta Parte y en las políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá los proyectos y actividades específicas que serían objeto del Incentivo, tomando en cuenta para ello que su finalidad sea elevarla competitividad, reducir los niveles de riesgo y garantizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera duradera.

Los proyectos de inversión serán económicamente viables, de duración definida, físicamente verificables y orientados, de manera general, a estimular la formación bruta de capital fijo o a adelantar programas de modernización y de reconversión tecnológica en áreas geográficas y productos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (...).”.

Que mediante la Resolución número 3 de 2016, se compiló en un solo documento las disposiciones relacionadas con el ICR, a fin de que la reglamentación del Incentivo a la Capitalización Rural y los subsidios de tasa sean de fácil comprensión por parte de los intermediarios financieros y beneficiarios de los créditos.

Que se considera necesario modificar la Resolución número 3 de 2016, en ciertos aspectos relativos al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), con el objetivo de maximizar la utilización de los recursos que apropia el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la entrega de este Incentivo, eliminando ciertas ineficiencias que genera la normatividad vigente, y posibilitando de esta manera el acceso al ICR a un mayor número de productores agropecuarios que tiene capacidad de acceder al crédito de fomento.

Que el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presentó ante los miembros la Justificación Técnica y Jurídica de la presente Resolución, la cual fue discutida en la reunión llevada a cabo el ocho (8) de febrero de dos mil diez y siete (2017).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 3° de la Resolución número 3 de 2016, el cual quedará así:

Artículo 3°. Para ser beneficiario del ICR, las inversiones deberán ser financiadas con un crédito redescontado en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), antes de la terminación de las inversiones. En ningún caso el valor reconocido por el incentivo podrá ser superior al valor inicial del crédito.

Parágrafo. Dentro del lapso de un (1) año, una persona natural o jurídica no podrá tener más de una inscripción vigente para acceder al ICR.

La Imprenta Nacional de Colombia ofrece

SERVICIOS DE PREPrensa

Contamos con la tecnología y el personal competente para desarrollar todos los procesos de impresión.

 ImprintaNalCol  @ImprintaNalCol

Si quiere conocer más, ingrese a [www.imprenta.gov.co](http://www.imprenta.gov.co)

Servicios DE PREPrensa





Esta disposición no aplica para los asociados o integrados.

Artículo 2°. Modifícase el artículo 4° de la Resolución número 3 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 4°.** Para el trámite del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) se distinguirán tres instancias: elegibilidad, otorgamiento y pago.

a) La elegibilidad comprende: La inscripción ante Finagro, que se realiza con el registro de los créditos que incluyan inversiones susceptibles de acceder al ICR, y la solicitud de pago por parte del intermediario financiero previo control de inversión realizado por este.

Finagro podrá solicitar al intermediario financiero, o al beneficiario del crédito, aclaraciones o adiciones en la documentación remitida, en cuyo caso podrá otorgar un plazo adicional para su entrega;

b) El otorgamiento es la instancia mediante la cual Finagro reconoce el derecho al Incentivo a la Capitalización Rural a favor del titular del crédito, cuando se haya evidenciado, con la documentación remitida por el intermediario financiero, el cumplimiento de los términos y condiciones aprobados en la etapa de elegibilidad;

c) El pago es el desembolso que hace Finagro del Incentivo otorgado, a través del intermediario financiero, el cual procede mediante su abono a la correspondiente obligación crediticia y estará sujeta al situado de los fondos presupuestales de la Nación en la Tesorería de Finagro.

**Parágrafo 1°.** La ejecución de las inversiones objeto del incentivo debe realizarse dentro de los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la fecha de registro del crédito respectivo, salvo aquellos casos en los que, por la magnitud de la inversión, el intermediario financiero otorgue un plazo mayor al momento de aprobar el crédito.

No obstante, cuando ocurran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentadas ante el intermediario financiero, este podrá ampliar el periodo de su vigencia por el tiempo que dure el evento respectivo, informando de ello previamente a Finagro.

**Parágrafo 2°.** Si al momento de proceder al pago el valor del incentivo supera el saldo del crédito por vencimiento normal, se procederá a abonar el excedente a la cuenta bancaria del beneficiario del incentivo.

Igualmente se podrá realizar el pago cuando, a pesar de no haber sido cancelado el respectivo crédito por el beneficiario, haya sido cancelado el redescuento por el intermediario financiero de manera unilateral”.

Artículo 3°. Modifícase el artículo 6° de la Resolución número 3 de 2016, el cual quedará así:

“**Artículo 6°.** A partir de la fecha en la que Finagro comunique al intermediario financiero la anulación de la inscripción o efectúe el pago de un incentivo, el beneficiario y/o el intermediario financiero tendrán un plazo máximo de sesenta (60) días calendario para solicitar la reconsideración de la determinación de anulación, o para solicitar la revisión del monto pagado. El intermediario financiero está en la obligación de comunicar oportunamente al beneficiario el pago del incentivo y todas las decisiones adoptadas por Finagro en el trámite del incentivo”.

Artículo 4°. Finagro deberá adoptar las medidas necesarias que procuren la debida operatividad de lo dispuesto en la presente Resolución y expedir la Circular Reglamentaria respectiva.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C. a 23 de marzo de 2017.

El Presidente,

Aurelio Iragorri Valencia.

El Secretario,

Jesús Antonio Vargas Orozco.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5 DE 2017

(marzo 23)

por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para la vigencia 2017.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes 101 de 1993, 16 de 1990, 1133 de 2007, 1731 de 2014 y los Decretos número 1313 de 1990, 1071 y 2371 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto en la Ley 16 de 1990 y los Decretos números 1313 de 1990 y 2371 de 2015, siendo la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario el organismo rector del financiamiento del sector agropecuario, teniendo dentro de sus funciones la señalada en el litera n), del artículo 2° del Decreto número 2371 de 2015, el cual dispone:

“n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales Crédito (LEC),

del Incentivo a Capitalización Rural (ICR) y de otros incentivos o subsidios del Estado que estén relacionados exclusivamente con el crédito y/o riesgo agropecuario y rural”.

Que de conformidad con los artículos 2.5.1., y 2.5.2., del Decreto número 1071 de 2015:

“**Artículo 2.5.1. Incentivo a la Capitalización Rural.** El incentivo a la Capitalización Rural es un derecho personal intransferible que, previo el cumplimiento de determinadas condiciones, se da a toda persona natural o jurídica que ejecute un nuevo proyecto de inversión financiado total o parcialmente, con un crédito redescontado en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, de conformidad con lo dispuesto en este título y en las reglamentaciones que expida la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, (CNCA) (...).

**Artículo 2.5.2. Definición de los proyectos y actividades objeto del incentivo.** La CNCA con base en lo dispuesto en esta Parte y en las políticas trazadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá los proyectos y actividades específicas que serán objeto del Incentivo, tomando en cuenta para ello que su finalidad sea elevar la competitividad, reducir los niveles de riesgo y garantizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera duradera.

Los proyectos de inversión serán económicamente viables, de duración definida, físicamente verificables y orientados, de manera general, a estimular la formación bruta de capital fijo o adelantar programas de modernización y de reconversión tecnológica en áreas geográficas y productos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (...).

Que el propósito de la presente resolución es expedir el Plan Anual de ICR y LEC, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución número 3 de 2016, por medio de la cual se compila y modifica la reglamentación de los incentivos a través de crédito.

Que el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presentó ante los miembros la Justificación Técnica y Jurídica de la presente Resolución, la cual fue discutida en la reunión llevada a cabo el ocho (8) de febrero de 2017.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO PRIMERO

Incentivo a la Capitalización Rural

**Artículo 1°.** *Distribución.* Dentro de los términos dispuestos en la Resolución número 3 de 2016, la distribución de los recursos dispuestos mediante contrato interadministrativo suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la ejecución del ICR, se sujetarán a las siguientes reglas:

- Por lo menos el 40% le corresponderán a inversiones ejecutadas por Pequeños Productores.

- Las inversiones ejecutadas por Grandes Productores no podrán acceder a más del 20% de los recursos totales asignados para el ICR.

**Artículo 2°.** *Estructura.* Los recursos se dividirán en dos (2) segmentos, así:

a) ICR Plan Colombia Siembra;

b) ICR General.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará las Bolsas y sus respectivos presupuestos para estos dos segmentos.

**Artículo 3°.** *Porcentajes de reconocimiento.* Los porcentajes de reconocimiento serán los siguientes:

a) Para el ICR Plan Colombia Siembra:

- Para esquemas asociativos, hasta el 35% del valor de las inversiones.

- Pequeños productores, hasta el 35% del valor de las inversiones.

- Medianos productores, hasta el 20% del valor de las inversiones.

- Grandes productores, hasta el 10% del valor de las inversiones.

b) Para el ICR General:

- Para esquemas asociativos, hasta el 25% del valor de las inversiones.

- Pequeños productores, hasta el 25% del valor de las inversiones.

- Medianos productores, hasta el 10% del valor de las inversiones.

**Parágrafo 1°.** Cuando se trate de esquemas asociativos para la siembra de cultivos perennes, se debe cumplir lo siguiente:

- La participación de los pequeños productores en el área a sembrar debe ser mínimo del 50%.

- La totalidad de los medianos y grandes productores que hacen parte del esquema deben participar en el área a sembrar.

- Los medianos y grandes productores que integran el esquema deben respaldar la operación de crédito con avales y/o garantías, en al menos el 20% del valor del crédito que les corresponda a los pequeños productores.

Parágrafo 2°. En esquemas de integración, los porcentajes de reconocimiento del ICR serán de acuerdo al tipo de productor que se integre.

CAPÍTULO SEGUNDO  
Líneas Especiales de Crédito (LEC)

Artículo 4°. *Estructura.* Los recursos dispuestos mediante contrato interadministrativo suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la ejecución del subsidio de tasa se dividirán en dos (2) segmentos, así:

- a) LEC Plan Colombia Siembra.
- b) LEC General.

Tanto la LEC Plan Colombia Siembra como la LEC General financiarán las actividades que determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de lo establecido en la Resolución número 3 de 2016.

Artículo 5°. *Condiciones financieras LEC Plan Colombia Siembra.* Las condiciones financieras de los créditos que se otorguen a través de esta Línea, serán:

- a) Tasa de interés y de redescuento:

TIPO DE PRODUCTOR	TASA REDESCUENTO	PARA CRÉDITOS ENTRE 0 Y 36 MESES	
		TASA INTERÉS	SUBSIDIO
Pequeño Productor	DTF - 2.5% e.a.	DTF e.a	6 % e.a.
Mediano Productor	DTF +1% e.a.	DTF+1% e.a.	6 % e.a.
Gran Productor	DTF + 2% e.a.	DTF+2% e.a.	5 % e.a.
Esquema asociativo	DTF - 3.5% e.a.	DTF e.a	5 % e.a.
Esquema integración	DTF - 1% e.a.	DTF e.a.	6 % e.a.

TIPO DE PRODUCTOR	TASA REDESCUENTO	PARA CRÉDITOS ENTRE 37 Y 60 MESES	
		TASA INTERÉS	SUBSIDIO
Pequeño Productor	DTF - 2.5% e.a.	DTF +1% e.a	5% e.a.
Mediano Productor	DTF+1% e.a.	DTF+3% e.a.	4% e.a.
Gran Productor	DTF + 2% e.a.	DTF+4% e.a.	3% e.a.
Esquema asociativo	DTF - 3.5% e.a.	DTF+1% e.a	4% e.a.
Esquema integración	DTF -1% e.a.	DTF +2% e.a	4% e.a.

*Tratándose de jóvenes rurales se aumenta un punto porcentual el subsidio (1%)*

- b) El plazo, la amortización de la deuda, el margen de redescuento y la cobertura de financiación fueron establecidas en la Resolución número 1 de 2017;

- c) Se aceptará la capitalización de intereses en los casos en los que lo considere la Resolución número 1 de 2016. Para tales eventos y dado que la capitalización procede sobre los intereses de redescuento, la tasa de interés no tendrá incremento en puntos adicionales a los pactados o concedidos inicialmente. Sobre los valores capitalizados no se reconocerá subsidio de tasa;

- d) Monto máximo de subsidio será:

- Para cualquier tipo de productor (pequeños, medianos, grandes, esquemas asociativos y de integración), hasta trescientos millones de pesos (\$300.000.000) de subsidio en este programa.

Artículo 6°. *Condiciones financieras LEC General.* Las condiciones financieras de los créditos que se otorguen a través de esta Línea, serán:

- a) Tasa de interés y de redescuento:

TIPO DE PRODUCTOR	TASA REDESCUENTO	PARA CRÉDITOS ENTRE 0 Y 36 MESES	
		TASA INTERÉS	SUBSIDIO
Pequeño Productor	DTF - 2.5% e.a.	DTF+1% e.a.	5% e.a.
Mediano Productor	DTF +1% e.a.	DTF+2% e.a.	5% e.a.
Esquema asociativo	DTF - 3.5% e.a.	DTF+1% e.a.	4% e.a.
Esquema integración	DTF - 1% e.a.	DTF+1% e.a.	5% e.a.

TIPO DE PRODUCTOR	TASA REDESCUENTO	PARA CRÉDITOS ENTRE 37 Y 60 MESES	
		TASA INTERÉS	SUBSIDIO
Pequeño Productor	DTF - 2.5% e.a.	DTF+2% e.a.	4% e.a.
Mediano Productor	DTF+1% e.a	DTF+4% e.a.	3% e.a.
Esquema asociativo	DTF-3.5% e.a.	DTF +2% e.a.	3% e.a.
Esquema integración	DTF - 1% e.a.	DTF +3% e.a.	3% e.a.

*Tratándose de jóvenes rurales se aumenta un punto porcentual el subsidio (1%)*

- b) El plazo, la amortización de la deuda, el margen de redescuento y la cobertura de financiación serán las establecidas en la Resolución número 1 de 2017;

- c) Se aceptará la capitalización de intereses en los casos considerados en la Resolución número 1 de 2016. Para tales eventos y dado que la capitalización procede sobre los intereses de redescuento, la tasa de interés no tendrá incremento en puntos adicionales a los pactados o concedidos inicialmente. Sobre los valores capitalizados no se reconocerá subsidio de tasa;

- d) Monto máximo de subsidio será:

- Para pequeños y medianos productores, así como esquemas asociativos y de integración, hasta doscientos cincuenta millones de pesos (\$250.000.000) de subsidio en este programa.

Artículo 7°. *Condiciones especiales para la línea de retención de vientres de ganado bovino y bufalino.*

- El plazo máximo del crédito será de cinco (5) años con hasta dos (2) años de gracia.
- Para pequeños, medianos y grandes productores, el monto máximo de financiación por vientre a retener, será hasta dos millones de pesos (\$2.000.000).
- Para mediano y gran productor, el valor máximo de crédito que se podrá otorgar por beneficiario será hasta trescientos millones de pesos (\$300.000.000) sin importar el número de desembolsos.
- Para acceder a esta línea, estos productores deberán acreditar ante el intermediario financiero, que cumplan con lo siguiente:
  - Estar vinculado al programa “Identifica” del ICA.
  - Pertenecer o estar registrados en asociaciones, agremiaciones, cooperativas o cualquier tipo de comités o agrupamiento formal de productores, bien sea del orden nacional, regional o local.
  - Contar con los certificados vigentes de vacunación expedidos por el ICA.

Parágrafo 1°. El control de inversión para esta línea será obligatorio para los Intermediarios Financieros, y en el mismo se deberá verificar la existencia de los vientres retenidos, así como el sistema de identificación del ganado bovino y/o bufalino.

Parágrafo 2°. De acuerdo con la política del MADR, esta línea de crédito hace parte del segmento Colombia Siembra. Para este fin el MADR definirá una bolsa de recursos específica, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

Artículo 8°. Finagro deberá adoptar las medidas necesarias que procuren la debida operatividad de lo dispuesto en la presente resolución y expedir la Circular Reglamentaria respectiva.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*, y deroga todas las Resoluciones que le sean contrarias, pero sus efectos aplicarán a partir de la fecha en la que Finagro disponga de los recursos presupuestales y expida la Circular Reglamentaria respectiva.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2017.

El Presidente,

*Aurelio Iragorri Valencia.*

El Secretario,

*Jesús Antonio Vargas Orozco.*

(C. F.).

Comisión Rectora del Sistema General Regalías

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 0044 DE 2017

(marzo 30)

*por el cual se adiciona el artículo 15A al Acuerdo número 38 de 2016.*

La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en particular de las conferidas por los artículos 4°, 5°, 25 y 26 de la Ley 1530 de 2012 y 2.2.4.1.1.3.1 del Decreto número 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 4° y 5° de la Ley 1530 de 2012 establecen que la Comisión Rectora es el órgano encargado de definir la política general del Sistema General de Regalías (SGR) y las directrices generales, procesos, requisitos y criterios para su funcionamiento.

Que de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1530 de 2012 y en concordancia con el artículo 2.2.4.1.1.3.1 del Decreto número 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y las comunidades étnicas pueden formular proyectos de inversión a financiarse con recursos del SGR, dando cumplimiento a los lineamientos para las etapas de viabilización, aprobación y previos al inicio de la ejecución que defina la Comisión Rectora del SGR.

Que el artículo 27 de la Ley 1530 de 2012 señala los criterios de priorización de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, entre los cuales incluye la culminación de proyectos de inversión ya iniciados y que sean prioritarios para el desarrollo regional.

Que el parágrafo 1° transitorio del artículo 361 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 5 de 2011, suprimió el Fondo Nacional de Regalías (FNR) y, en desarrollo de este mandato, en el Decreto número 4923 de 2011, artículo 129, reiterado por el artículo 129 de la Ley 1530 de 2012, se determinó su supresión a partir del 1° de enero de 2012 y que su liquidación se regiría por las disposiciones de la Ley 489 de 1998, el Decreto-ley número 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006. Así mismo, en los Decretos número 4972 de 2011 y 1912 de 2014 se definió el procedimiento y plazos para la liquidación del FNR.



Que el parágrafo del artículo 71 de la Ley 1815 de 2016 establece: “El análisis administrativo y financiero de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, frente a los ajustes efectuados, será emitido dentro del mes siguiente al cumplimiento de los requisitos por el ejecutor, y el concepto sobre el ajuste será emitido por la entidad viabilizadora dentro del mes siguiente a la radicación de dicho análisis”.

Que el artículo 83 de la Ley 1815 de 2016 prevé que los proyectos de inversión financiados con asignaciones del FNR-EL deben culminar a más tardar al 31 de marzo de 2017.

Que el mencionado artículo también señala en su parágrafo que: “No aplicará lo previsto en el inciso anterior en aquellos proyectos de inversión que cuenten con cofinanciación de recursos del Sistema General de Regalías aprobada por el Órgano Colegiado de Administración de Decisión (OCAD) respectivo, caso en el cual el FNR-EL girará al ejecutor los saldos pendientes a más tardar al 30 de septiembre de 2017, según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 142 de la Ley 1530 de 2012 y quedarán sometidos al Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación (SMSCE) del Sistema General de Regalías”.

Que la Comisión Rectora del SGR en Sesión XXXV del 13 de mayo de 2016 aprobó el Acuerdo número 38 de 2016: “por el cual se establecen los requisitos generales y sectoriales, para la viabilización y previos al inicio de la ejecución, para proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías; se fijan los requisitos para la financiación de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011 y se dictan otras disposiciones”.

Que las decisiones de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) se adoptarán mediante acuerdo, el cual será suscrito por el Presidente y el Secretario Técnico, y expedido dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del acta correspondiente de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo número 36 de 2016.

Que se requiere armonizar las normas sobre ajustes de los proyectos financiados con recursos del FNR-EL y del SGR.

Que la Comisión Rectora del SGR en la Sesión XLIV del 2 de marzo de 2017 aprobó la adición al Acuerdo número 38 de 2016.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Adiciónese el siguiente artículo al Acuerdo número 38 de 2016:

**Artículo 15-A. Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que tengan por objeto la culminación de proyectos ya iniciados que hayan sido financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías.** Los proyectos de inversión que tengan por objeto la culminación de un proyecto de inversión ya iniciado, que haya sido financiado con recursos del FNR-EL, presentados dentro de los términos señalados en el artículo 83 de la Ley 1815 de 2016, además de cumplir con los requisitos generales y sectoriales previos al inicio de la ejecución, deben presentar copia del concepto técnico favorable emitido por la entidad del orden nacional viabilizadora, de conformidad con el parágrafo del artículo 71 de la Ley 1815 de 2016.

Parágrafo. Esta disposición aplica para proyectos que tengan por objeto la culminación de proyectos de inversión que hayan sido financiados con recursos del FNR-EL y que se presenten para aprobación del OCAD respectivo, o para aquellos que hayan sido aprobados por el OCAD y se encuentren dentro del término para la expedición de la certificación de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución.

Artículo 2°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2017.

El Presidente Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,

Luis Fernando Mejía Alzate,

Director General (E) Departamento Nacional de Planeación.

El Secretario Técnico Comisión Rectora del Sistema General,

Manuel Fernando Castro Quiroz,

Subdirector General Territorial y de Inversión  
Pública Departamento Nacional de Planeación.

(C. F.).

AVISOS JUDICIALES

El Juzgado de Familia del Circuito de Fusagasugá,

AVISA:

Que por decreto de Interdicción Provisoria, emanado de este Juzgado el día trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016), en el proceso de Interdicción Judicial número 283 de 2016 la señora Miryam Ramírez Alfonso quien se identifica con cédula de ciudadanía número 20928403, residente en la Finca San Antonio, Vereda Bosachoque, Sector Cartódromo de Fusagasugá, no tiene la libre administración de sus bienes.

Para efectos del artículo 549 del Código Civil y artículo 586 numeral 6, del Código General del Proceso, se fija el presente edicto en la cartelera de la Secretaría del Juzgado y se expiden copias para su publicación en el *Diario Oficial* y en *La República*, hoy veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017) siendo las ocho (8:00 a. m.) de la mañana.

La Secretaria,

María Rocío Parra Ospina.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21700531. 30-III-2017. Valor \$54.500.

DIARIO OFICIAL

Publicación institucional de la Imprenta Nacional

Esta publicación dio comienzo al periodismo diario en Colombia con la aparición de su primer número el 30 de abril de 1864. Como documento histórico, recoge día a día el discurrir legal de la Nación.

Desde entonces son muchos los aportes que el Diario Oficial le ha hecho al país, pues en él ha quedado registrada la historia jurídica de la Nación.

En este momento adelantamos el producto Diario Oficial Digital, que contiene todas sus ediciones y que el público podrá adquirir próximamente en CD.

PUBLIQUE SUS EDICTOS Y AVISOS CON NOSOTROS

+ tamaño Para nosotros su información es importante

— precio \$54.500 El mejor del mercado (Edictos, autos, avisos o sentencias judiciales, avisos de liquidación, reclamación, prestación, entre otros)

También publicamos sus Estados Financieros

Si desea ampliar esta información, consulte:  
457 8000 extensiones 2720 • 2721 • 2723  
4578044 (directo)  
divulgacion09@imprenta.gov.co

## CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		Págs.
Decreto número 515 de 2017, por el cual se confía al Vicepresidente de la República unas funciones y encargos especiales.....	1	1
Decreto número 542 de 2017, por el cual se delegan unas funciones constitucionales.....	1	1
MINISTERIO DEL INTERIOR		
Decreto número 539 de 2017, por el cual se designa alcaldesa ad hoc para el municipio de Chía, Cundinamarca.....	1	1
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
Decreto número 543 de 2017, por el cual se hace un traslado en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.....	2	2
Decreto número 544 de 2017, por el cual se concede una Comisión para Situaciones Especiales a la planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.....	2	2
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Decreto número 536 de 2017, por el cual se adiciona un párrafo al artículo 1.2.4.3.1. del Libro 1, Título 4, Parte 2, Capítulo 3 del Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, para establecer la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta por actividades de estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.....	2	2
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
MINISTERIO DE CULTURA		
Decreto número 537 de 2017, por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011, se modifica el Decreto 1080 de 2015 único reglamentario del sector cultura y el Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, se definen normas sobre el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, la emisión y control de boletería electrónica para los espectáculos públicos de las artes escénicas, la inversión y el seguimiento de la contribución parafiscal cultural y se dictan otras disposiciones. ..	3	3
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO		
Decreto número 541 de 2017, por el cual se delegan unas funciones en el Ministro de Justicia y del Derecho.....	7	7
Resolución ejecutiva número 143 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	7	7
Resolución ejecutiva número 144 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	8	8
Resolución ejecutiva número 145 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	9	9
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
Decreto número 555 de 2017, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1801 de 2016 “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.....	11	11
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
Resolución número 000069 de 2017, por la cual se modifica el literal c) del artículo 1° de la Resolución número 278 de 24 de noviembre de 2016 que reglamenta y administra para el año 2017 los contingentes de importación para carne de bovino establecidos para el séptimo año calendario en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y República de Colombia.....	16	16
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		
Decreto número 546 de 2017, por el cual se modifica el Decreto 1429 de 2016.....	16	16
Decreto número 547 de 2017, por el cual se modifica el Decreto 1432 de 2016 modificado por el Decreto 2188 de 2016.....	17	17
Resolución número 000926 de 2017, por la cual se reglamenta el desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas.....	17	17
Circular número 000018 de 2017.....	19	19
MINISTERIO DE TRABAJO		
Decreto número 552 de 2017, por el cual se modifica la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y se dictan otras disposiciones.....	20	20
Decreto número 553 de 2017, por el cual se crea una planta de empleos temporales en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y se dictan otras disposiciones.....	20	20
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		
Resolución número 4 0250 de 2017, por la cual se prorroga un nombramiento provisional.....	20	20
Resolución número 4 0251 de 2017, por la cual se da por terminado un encargo y se hace otro.....	21	21
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		
Decreto número 513 de 2017, por el cual se designa un Superintendente de Industria y Comercio ad hoc.....	21	21
MINISTERIO DE CULTURA		
Decreto número 554 de 2017, por el cual se modifican los artículos 2.2.1.40, 2.10.1.10, 2.10.1.16, 2.10.2.1.3, 2.10.2.5.1, 2.10.5.1.5 y 2.10.5.1.8 del Decreto 1080 de 2015 en lo referente a elección de representantes; cortometrajes nacionales; recaudo de contribución parafiscal; Comité de Clasificación de Películas y Festivales o Muestras de Cine.....	22	22
SUPERINTENDENCIAS		
Superintendencia de Industria y Comercio		
Resolución número 14371 de 2017, por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.....	23	23
Superintendencia Nacional de Salud		
Resolución número 000515 de 2017, por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar el Hospital San Andrés ESE, del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, identificado con el NIT. 800179870-2.....	24	24
Resolución número 000527 de 2017, por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre “Manexka”, con NIT 812.002.376-9.....	26	26

	Págs.
Circular externa número 000003 de 2017.....	35
Superintendencia de Puertos y Transporte	
Resolución número 7416 de 2017, por la cual se efectúa una delegación de funciones en el Superintendente Delegado de Puertos Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011, en concordancia con la Resolución número 11434 del 31 de octubre de 2011, Comisión Intersectorial del Operador Económico Autorizado.....	38
Circular externa número 000014 de 2017.....	39
Superintendencia de Notariado y Registro	
La Superintendencia de Notariado y Registro, hace saber que Rocío Bolaños Trochez falleció, quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya lugar deberán hacerlo en la Superintendencia de Notariado y Registro.....	39
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	
Resolución número 000671 de 2017, por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado y se efectúa un nombramiento de carácter provisional.....	39
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	
Resolución número RT 00228 de 2017, por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.....	39
Resolución número 0233 de 2017, por la cual se microfocaliza un área geográfica, para implementar la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.....	40
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder en Liquidación	
Acta final del proceso liquidatorio de 2017.....	42
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	
Resolución 0100 número 0110 – 0171 de 2017, por medio de la cual se fijan las tarifas para los servicios que presta la CVC durante el año 2017, y se toman otras determinaciones.....	43
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	
Acuerdo CD número 008 de 2017, por el cual se fija la tarifa de la tasa por uso de agua para el año 2017 en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).....	47
VARIOS	
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario	
Resolución número 4 de 2017, por la cual se modifica la Resolución número 3 de 2016.....	48
Resolución número 5 de 2017, por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para la vigencia 2017.....	49
Comisión Rectora del Sistema General Regalías	
Acuerdo número 0044 de 2017, por el cual se adiciona el artículo 15A al Acuerdo número 38 de 2016.....	50
Avisos judiciales	
El Juzgado de Familia del Circuito de Fusagasugá avisa que se decretó la interdicción provisoria de Miryam Ramírez Alfonso.....	51
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017	



# CONOZCA

## NUESTROS Servicios

La Imprenta Nacional de Colombia ofrece servicios de diseño, diagramación, ilustración, coordinación editorial, entre otros. Recibimos su material en forma analógica o digital.

 ImprentaNalCol
 @ImprentaNalCol

Mayor información en: [www.imprenta.gov.co](http://www.imprenta.gov.co)

